



# **INFORME**

## **DEL CONSEJO DE SEGURIDAD**

**16 de julio de 1962—15 de julio de 1963**

**ASAMBLEA GENERAL**

**DOCUMENTOS OFICIALES : DECIMOCTAVO PERIODO DE SESIONES**  
**SUPLEMENTO No. 2 (A/5502)**

**NACIONES UNIDAS**

# **INFORME**

## **DEL**

# **CONSEJO DE SEGURIDAD**

**16 de julio de 1962 — 15 de julio de 1963**

**ASAMBLEA GENERAL**

**DOCUMENTOS OFICIALES : DECIMOCTAVO PERIODO DE SESIONES**  
**SUPLEMENTO No. 2 (A/5502)**



**NACIONES UNIDAS**

***Nueva York, 1963***

### NOTA

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

# INDICE

Página

INTRODUCCIÓN .....	v
--------------------	---

## PARTE I

### Cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad en virtud de su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales

#### Capítulo

1. CARTA DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1962, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;	
CARTA DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1962, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE CUBA;	
CARTA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1962, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE ADJUNTO DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS .....	1
A. Comunicaciones recibidas entre el 22 y el 23 de octubre de 1962 ....	1
B. Examen de la cuestión en las sesiones 1022a. a 1025a. (23 a 25 de octubre de 1962) .....	2
C. Comunicaciones recibidas entre el 23 de octubre y el 13 de diciembre de 1962	5
i) Comunicaciones de los Estados Miembros .....	5
ii) Comunicaciones de la Organización de Estados Americanos .....	6
D. Acontecimientos ulteriores a las sesiones del Consejo .....	6
2. CARTA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 1963, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE LA MISIÓN PERMANENTE DEL SENEGAL .....	9
3. TELEGRAMA DE FECHA 5 DE MAYO DE 1963 DIRIGIDO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE HAÍTÍ .....	17
A. Comunicaciones al Consejo .....	17
B. Examen de la cuestión en las 1035a. a 1036a. sesiones (8 y 9 de mayo de 1963) .....	17
C. Comunicaciones recibidas después del 9 de mayo .....	20
4. INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL AL CONSEJO DE SEGURIDAD ACERCA DE LOS ACONTECIMIENTOS RELATIVOS AL YEMEN .....	20
A. Informes del Secretario General .....	20
B. Examen de la cuestión en las sesiones 1037a. a 1039a. (10-11 de junio de 1963) .....	21
C. Acontecimientos posteriores al examen de la situación por el Consejo ....	22

## PARTE II

### Otras cuestiones examinadas por el Consejo

5. ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS	
A. Solicitud de la República de Rwanda .....	24
B. Solicitud del Reino de Burundi .....	24
C. Solicitud de Jamaica .....	24
D. Solicitud de Trinidad y Tabago .....	24
E. Solicitud de la República Argelina Democrática y Popular .....	25
F. Solicitud de Uganda .....	25
G. Solicitud de Kuwait .....	25
6. RECOMENDACIÓN RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS .....	26

## PARTE III

## El Comité de Estado Mayor

## Capítulo

7. LABOR DEL COMITÉ DE ESTADO MAYOR .....	27
---	----

## PARTE IV

## Asuntos señalados al Consejo de Seguridad pero no discutidos por éste durante el período a que se refiere este informe

8. COMUNICACIONES RELATIVAS A LA CUESTIÓN DE PALESTINA .....	28
A. Comunicaciones de Jordania e Israel referentes a la construcción de salinas .....	28
B. Comunicaciones de Israel y de la República Árabe Siria .....	28
C. Otras comunicaciones .....	28
9. COMUNICACIONES RELATIVAS AL TEMA: "CARTA DE FECHA 13 DE JULIO DE 1960 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS" .....	29
10. INFORMES SOBRE EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO, CONSIDERADO ZONA ESTRATÉGICA .....	38
11. COMUNICACIONES RELATIVAS AL IRIÁN OCCIDENTAL (NUEVA GUINEA OCCIDENTAL) .....	38
A. Comunicaciones del Gobierno de los Países Bajos .....	38
B. Acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino de los Países Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) .....	38
12. DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN EN ANGOLA .....	39
13. CARTA DEL SECRETARIO GENERAL, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1962, RELATIVA A LOS PROBLEMAS EXISTENTES ENTRE CAMBOYA Y TAILANDIA ....	39
14. COMUNICACIONES RELATIVAS A LA CUESTIÓN DEL CONFLICTO RACIAL EN EL AFRICA DEL SUR .....	39
15. COMUNICACIONES RELATIVAS A LA CUESTIÓN INDIA-PAKISTÁN .....	40
16. COMUNICACIONES RELATIVAS A LOS TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACIÓN PORTUGUESA .....	41
17. COMUNICACIÓN RELATIVA A LA CUESTIÓN DE COREA .....	41
18. COMUNICACIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN EN EL AFRICA SUDOCIDENTAL ..	42
19. COMUNICACIÓN RELATIVA A RHODESIA DEL SUR .....	42
20. COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN Y DEL REINO UNIDO	42
21. COMUNICACIONES DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS, DEL IRAK Y DE LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA .....	42

## Apéndices

I. REPRESENTANTES, REPRESENTANTES SUPLENTE Y REPRESENTANTES INTERINOS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD .....	44
II. PRESIDENTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD .....	44
III. SESIONES CELEBRADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DURANTE EL PERÍODO DE 16 DE JULIO DE 1962 A 15 DE JULIO DE 1963 .....	45
IV. REPRESENTANTES, PRESIDENTES Y SECRETARIOS PRINCIPALES DEL COMITÉ DE ESTADO MAYOR .....	45

## INTRODUCCION

El Consejo de Seguridad somete el presente informe<sup>1</sup> a la Asamblea General en cumplimiento del párrafo 3 del Artículo 24, y del párrafo 1 del Artículo 15 de la Carta.

Por ser esencialmente un resumen y una guía que refleja el sentido general de los debates, este informe no está destinado a sustituir a las actas oficiales del Consejo de Seguridad, que constituyen la única relación completa y autorizada de sus deliberaciones y decisiones.

Con respecto a la composición del Consejo de Seguridad durante el período de que se trata, se recordará que la Asamblea General, en su 1154a. sesión plenaria, celebrada el 17 de octubre de 1962, eligió a Brasil, Filipinas, Marruecos y Noruega como miembros no permanentes para cubrir las vacantes disponibles al expirar, el 31 de diciembre de 1962, los mandatos de Chile, Irlanda y la República Árabe Unida y al renunciar Rumania a su mandato.

Durante el período a que se refiere el presente informe, que va del 16 de julio de 1962 al 15 de julio de 1963, el Consejo celebró 23 sesiones.

---

<sup>1</sup> Este es el 18° informe anual del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. Los informes anteriores fueron presentados con las siguientes signaturas: A/93, A/366, A/620, A/945, A/1361, A/1873, A/2167, A/2437, A/2712, A/2935, A/3137, A/3648, A/3901, A/4190, A/4494, A/4867 y A/5202.

## Parte I

# CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE SU RESPONSABILIDAD DE MANTENER LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

### Capítulo I

**CARTA DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1962, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

**CARTA DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1962, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE CUBA**

**CARTA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1962, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE ADJUNTO DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS**

#### **A. Comunicaciones recibidas entre el 22 y el 23 de octubre de 1962**

En una carta fechada el 22 de octubre de 1962 (S/5181) el Representante Permanente de los Estados Unidos solicitó una sesión urgente del Consejo de Seguridad para hacer frente a la peligrosa amenaza que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había creado para la paz y la seguridad del mundo al instalar secretamente en Cuba bases de lanzamiento y proyectiles balísticos de largo alcance capaces de transportar cabezas de guerra termonucleares a casi cualquier punto de América del Norte y América del Sur. Los Estados Unidos sostenían que poseían pruebas incontrovertibles de que la URSS había estado instalando en Cuba toda una serie de medios de lanzamiento y armas ofensivas que sobrepasaban en mucho todas las imaginables necesidades de defensa de ese país. La magnitud de la empresa soviética en Cuba revelaba que se la había estado planeando durante varios meses, durante los cuales la Unión Soviética había dado repetidas veces garantías, tanto en público como en privado, de que no se estaba entregando a Cuba armas ofensivas de ninguna clase. Por consiguiente, el Gobierno de los Estados Unidos había iniciado una serie de medidas destinadas a hacer cesar este fortalecimiento ofensivo. Había convocado a una reunión del órgano de Consulta de la Organización de Estados Americanos (OEA) para invocar los artículos 6 y 8 del Tratado de Río de Janeiro, y había comenzado a aplicar una cuarentena estricta en Cuba para impedir la introducción de armas de carácter ofensivo en ese país. De acuerdo con sus obligaciones conforme a la Carta de las Naciones Unidas, los Estados Unidos llevaban ante el Consejo de Seguridad el hecho de la existencia de proyectiles nucleares y otras armas ofensivas en Cuba, y proponían que el Consejo asumiera pronta y efectivamente su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Los Estados Unidos sometieron el siguiente proyecto de resolución (S/5182):

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Habiendo considerado la grave amenaza a la seguridad del hemisferio occidental y a la paz del*

*mundo causada por la continuación y la aceleración de la intervención extranjera en el Caribe,*

*"Observando con preocupación que se han introducido secretamente en Cuba proyectiles nucleares y otras armas ofensivas,*

*"Observando también que a consecuencia de ello se está imponiendo una cuarentena en torno al país,*

*"Gravemente preocupado por la posibilidad de que la prolongación de la situación cubana lleve a un conflicto directo,*

*"1. Insta a que, como medida provisional conforme al Artículo 40, sean inmediatamente desmontados y retirados de Cuba todos los proyectiles y otras armas ofensivas;*

*"2. Autoriza y pide al Secretario General interino que disponga el envío a Cuba de un grupo de observadores de las Naciones Unidas para comprobar el cumplimiento de la resolución e informar al respecto;*

*"3. Pide que se levante la cuarentena impuesta a los cargamentos militares dirigidos a Cuba una vez que las Naciones Unidas hayan comprobado que se ha dado cumplimiento a la disposición del párrafo 1;*

*"4. Recomendando urgentemente que los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas celebren prontamente conversaciones sobre las medidas destinadas a eliminar la actual amenaza a la seguridad del hemisferio occidental y a la paz del mundo e informen al respecto al Consejo de Seguridad."*

En una carta de fecha 22 de octubre (S/5183), el representante de Cuba solicitó, invocando el Artículo 34, el párrafo 1 del Artículo 35, el Artículo 39, el párrafo 1 del Artículo 1, el párrafo 4 del Artículo 2, y el párrafo 1 del Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad considerase urgentemente el acto de guerra unilateralmente ejecutado por el Gobierno de los Estados Unidos al disponer el bloqueo naval de Cuba. Cuba sostenía que los Estados Unidos actuaban a espaldas de los organismos internacionales, concretamente con absoluto des-

precio del Consejo de Seguridad, y estaban creando un inminente peligro de guerra.

En una carta de fecha 23 de octubre (S/5186), la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pedía que se reuniera inmediatamente el Consejo de Seguridad para examinar la cuestión "Violación de la Carta de las Naciones Unidas y amenaza a la paz por parte de los Estados Unidos de América". En una declaración adjunta a dicha carta el Gobierno soviético señalaba el anuncio, hecho el 22 de octubre por el Presidente de los Estados Unidos, de que había dado órdenes a las fuerzas navales de los Estados Unidos de interceptar todos los barcos que se dirigiesen a Cuba, semeterlos a inspección, y hacer regresar a los barcos que transportasen armas que, a juicio de las autoridades de los Estados Unidos, fuesen de carácter ofensivo. "También se habían dado órdenes de mantener una vigilancia y estrecha vigilancia sobre Cuba. Al propio tiempo los Estados Unidos habían comenzado a desembarcar nuevas tropas de los Estados Unidos en su base de Guantánamo en Cuba, y estaban poniendo a sus fuerzas armadas en estado de alerta. En la declaración soviética se acusaba también a los Estados Unidos de tomar una medida que podía desencadenar una guerra termonuclear y de violar las normas jurídicas internacionales y los principios de la Carta de las Naciones Unidas al arrogarse el derecho de atacar embarcaciones extranjeras en alta mar. El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba era un acto provocativo, una violación del derecho internacional sin precedentes. En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, todos los países tenían derecho a organizar sus vidas según sus deseos y a tomar las medidas necesarias para proteger su propia seguridad. El Gobierno soviético se consideraba en el deber de advertir seriamente al Gobierno de los Estados Unidos que al llevar a cabo las medidas anunciadas estaba asumiendo "una grave responsabilidad con respecto al destino del mundo, y jugando temerariamente con fuego". La ayuda soviética a Cuba estaba destinada exclusivamente a fortalecer la capacidad de defensa de ese país y así lo exigían los repetidos actos de provocación por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, continuaba la declaración, estaban pidiendo el retiro del material militar que Cuba necesitaba para su propia defensa, medida que ningún Estado que estimase su independencia podía aprobar. La Unión Soviética consideraba que debían retirarse del territorio de otros Estados todas las tropas extranjeras. Si los Estados Unidos se estaban esforzando sinceramente por lograr una paz duradera, como el Presidente Kennedy había declarado, debían haber aceptado la propuesta soviética y haber retirado sus tropas y su equipo militar y desmantelado sus bases militares en diferentes partes del mundo.

## **B. Examen de la cuestión en las sesiones 1022a. a 1025a. (23 a 25 de octubre de 1962)**

En la 1022a. sesión, celebrada el 23 de octubre de 1962, el Consejo decidió examinar al mismo tiempo las cartas de los Estados Unidos, de Cuba y de la URSS, e invitó al representante de Cuba a participar en el debate.

El representante de los Estados Unidos declaró que al transformar a Cuba en una base de armas ofensivas y rápidas de destrucción en masa se había creado una amenaza a la paz en el hemisferio occidental y en el mundo, y esa amenaza había obligado a los Estados Unidos a imponer la cuarentena a todo cargamento de

armas militares ofensivas dirigido a Cuba. Examinando los acontecimientos ocurridos en Cuba desde 1959, declaró que la crítica más importante de su Gobierno al régimen cubano era la de que había dado a la URSS una cabecera de puente y una zona de operaciones en el hemisferio occidental. Las bases soviéticas en Cuba eran totalmente diferentes de las bases de la OTAN situadas en las cercanías de la Unión Soviética. En tanto que estas últimas eran de carácter defensivo y compatibles con los principios de las Naciones Unidas, las bases soviéticas en Cuba, instaladas clandestinamente, habían creado en el hemisferio la más importante base nuclear al margen de todos los sistemas de tratados existentes. La Unión Soviética, aunque oficialmente declaraba que los armamentos y el material militar enviado a Cuba eran exclusivamente de carácter defensivo, estaba enviando miles de técnicos militares y bombarderos a reacción capaces de arrojar armas nucleares y estaba instalando en Cuba proyectiles nucleares que constituían evidentemente una amenaza para el hemisferio y para el mundo entero. Si los Estados Unidos y las otras naciones del hemisferio occidental aceptaban ese trastorno fundamental de la estructura mundial del poder, estarían invitando a nuevos actos de agresión. Dicho representante subrayó que el Consejo estaba ante una grave cuestión y que su actitud podía decidir el futuro de la civilización. Informó al Consejo de que la Organización de Estados Americanos había aprobado aquella tarde una resolución en la que se pedía el inmediato retiro de todos los proyectiles de Cuba y se recomendaba a los miembros de la OEA que tomaran, individual y colectivamente, todas las medidas necesarias, inclusive el empleo de la fuerza armada, para que Cuba no continuase recibiendo de las Potencias chinosoviéticas material y suministros militares que pudieran crear una amenaza a la paz y la seguridad del continente.

El representante de Cuba afirmó que su país se había visto precisado a armarse defensivamente frente a las reiteradas agresiones del Gobierno americano. Recordó que el Presidente Dorticós, en el discurso pronunciado ante la Asamblea General en el decimoséptimo período de sesiones, había declarado que si los Estados Unidos fuesen capaces de dar a Cuba garantías efectivas, de palabra y en los hechos, de no realizar agresiones contra su país, Cuba no necesitaría fortalecer su defensa. El representante de Cuba dijo que su país no sólo había recibido el boicoteo económico del Gobierno de los Estados Unidos y la utilización de la presión americana con el propósito fallido de aislarlo económica y diplomáticamente, sino que había sido objeto de ataques armados y sabotaje por agentes entrenados en los Estados Unidos. Señaló que los Estados Unidos, que habían acusado a Cuba de ser una base amenazante, eran los que tenían la única base extranjera en Cuba, en Guantánamo, en contra de la voluntad del pueblo cubano. Esta base se estaba reforzando para desde allí agredir a Cuba. Por supuesto, el Gobierno de los Estados Unidos se había reservado el derecho de determinar cuándo un cohete era bueno y cuándo un cohete era malo y cuándo una base era buena y cuándo era mala, y estaban colocando al mundo al borde de la guerra, sin presentar pruebas de sus afirmaciones. Los Estados Unidos, continuó diciendo el representante de Cuba, habían adoptado una medida unilateral de guerra al enviar primero sus barcos y naves aéreas a Cuba para consultar después a sus aliados y a los organismos internacionales. Los Estados Unidos habían puesto al



Consejo frente a un hecho consumado porque no tenían una sola razón legal ni normal en la que fundar sus medidas de fuerza contra Cuba. El orador sostuvo que Cuba siempre había estado abierta a la negociación pacífica y a la solución de sus conflictos con Estados Unidos, de acuerdo con lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, pero que los Estados Unidos siempre habían dado una respuesta airada. Declaró que su Gobierno no aceptaría observadores de ninguna clase en asuntos que competían a su jurisdicción interna y que los observadores habría que mandarlos a las bases americanas de donde salían los piratas para hostigar a Cuba. En opinión del orador, el bloqueo naval decretado por los Estados Unidos era un acto de guerra que el pueblo cubano resistiría de todas formas y por todos los medios. Pidió el inmediato retiro de las fuerzas agresoras de los Estados Unidos alrededor de las costas cubanas y la cesación del bloqueo, de las acciones provocativas en Guantánamo y de los ataques piratas organizados por agentes al servicio del Gobierno de los Estados Unidos.

El Presidente, haciendo uso de la palabra como representante de la URSS, observó que el Consejo de Seguridad estaba reunido en circunstancias que suscitaban la más grave preocupación por la paz en el Caribe y en el mundo entero. El bloqueo naval de Cuba y todas las medidas militares adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos constituían una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios del derecho internacional y un paso hacia la guerra termonuclear. Como pretexto para su acción agresiva contra Cuba, los Estados Unidos habían utilizado el argumento falso y calumnioso de que la Unión Soviética había instalado en Cuba armas supuestamente ofensivas. El Gobierno soviético había declarado oficialmente que no había enviado ni estaba enviando armas ofensivas a Cuba y que la ayuda militar tenía fines exclusivamente defensivos que sólo Cuba tenía derecho a determinar. Desde los primeros días de su existencia, el Gobierno revolucionario de Cuba había estado sometido a continuas amenazas y provocaciones por parte de los Estados Unidos, inclusive la intervención armada. El Gobierno soviético, afirmó el orador, propugnaba el retiro de todas las fuerzas y armamentos extranjeros de los territorios extranjeros, y no se opondría a que se efectuase bajo la observación de las Naciones Unidas. Además, la decisión de los Estados Unidos de recurrir a la OEA para realizar sus acciones agresivas constituía una violación de las prerrogativas del Consejo de Seguridad, que era el único que podía aplicar medidas coercitivas. Si el Consejo de Seguridad ignoraba esas acciones agresivas, no cumpliría con su deber como órgano primordialmente responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales. El representante de la URSS presentó el siguiente proyecto de resolución (S/5187):

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Guiado por la necesidad de mantener la paz y salvaguardar la seguridad en todo el mundo,*

*"Reconociendo el derecho de todos los Estados a fortalecer sus defensas,*

*"Considerando inadmisible la injerencia de algunos Estados en los asuntos internos de otros países soberanos e independientes,*

*"Observando que es inadmisible la violación de las normas que rigen la libertad de navegación en alta mar,*

*"1. Condena los actos del Gobierno de los Estados Unidos enderezados a violar la Carta de las Naciones Unidas y a aumentar la amenaza de guerra;*

*"2. Insiste en que el Gobierno de los Estados Unidos revoque su decisión de inspeccionar las embarcaciones de otros Estados que se dirigen a la República de Cuba;*

*"3. Pide al Gobierno de los Estados Unidos de América que ponga fin a toda clase de intervención en los asuntos internos de la República de Cuba y de otros Estados que cree una amenaza para la paz;*

*"4. Insta a los Estados Unidos de América, a la República de Cuba y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a establecer contacto entre sí y celebrar negociaciones a fin de normalizar la situación y eliminar de ese modo la amenaza de guerra."*

En la 1023a. sesión, celebrada el 24 de octubre, el representante de Venezuela dijo que expresaba la grave preocupación de todos los países de América Latina ante la amenaza que constituía para su seguridad la instalación en Cuba de bases y proyectiles nucleares capaces de aniquilar a cualquiera de las naciones del hemisferio occidental. Observó que entre Cuba y las otras repúblicas americanas existía una tirante situación debida a la política del régimen comunista establecido en Cuba, que pretendía exportar su sistema a las otras naciones del continente e incitar a la subversión contra los gobiernos constituidos de otras repúblicas americanas. Frente a un peligro aún mayor para la paz y la estabilidad del hemisferio, la OEA había aprobado ya una resolución en la que se pedía el desmantelamiento de las bases de cohetes establecidas en Cuba. El orador consideró que era necesario que el Consejo de Seguridad tomase medidas para impedir que siguiesen llegando a Cuba armas nucleares y para que fuesen desmanteladas las bases actuales de proyectiles nucleares en Cuba.

El representante del Reino Unido afirmó que la introducción en el hemisferio occidental de proyectiles nucleares soviéticos de destrucción en masa constituía una situación que los responsables de la seguridad del hemisferio no podían tolerar. Su país nunca había negado el derecho del pueblo cubano a elegir su propio régimen político, el derecho del Gobierno cubano a adoptar las medidas defensivas que juzgase necesarias o el derecho de un Estado soberano a solicitar ayuda militar de otro gobierno. No obstante, habida cuenta de la naturaleza de las armas y del secreto que rodeaba a su introducción en Cuba, su Gobierno se veía obligado a concluir que estas bases no tenían fines exclusivamente defensivos y que el Gobierno soviético trataba de lograr una posición militar ventajosa en Cuba. El Gobierno del Reino Unido estimaba que los Estados Unidos habían actuado apropiadamente al acudir al Consejo de Seguridad lo antes posible. El representante del Reino Unido apoyó el proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos y declaró que el desmantelamiento y el retiro de los proyectiles de Cuba era el medio de restaurar la confianza en el hemisferio occidental.

El representante de Rumania dijo que los preparativos militares para una nueva invasión de Cuba habían comenzado antes del supuesto descubrimiento de ciertas instalaciones ofensivas en Cuba. El bloqueo militar de Cuba, continuó, era un acto de guerra que contravenía muchas convenciones y declaraciones marítimas internacionales, así como las tres convenciones sobre la

definición de agresión, concluidas en julio de 1933, que habían sido ratificadas por los Estados Unidos. La delegación de Rumania estimaba que el Consejo de Seguridad debía condenar la acción de los Estados Unidos contra Cuba e insistir en que se levantara inmediatamente el bloqueo y se cesara toda intervención en los asuntos internos de Cuba.

El representante de Irlanda dijo que si bien comprendía la preocupación del Gobierno Revolucionario de Cuba por su seguridad nacional, el fortalecimiento militar efectuado en Cuba con la ayuda de la Unión Soviética excedía a la necesidad de reforzar la capacidad defensiva de Cuba. Había provocado una peligrosa alteración del equilibrio existente en la seguridad del mundo y constituía una grave amenaza para la seguridad del hemisferio occidental. Por otra parte, la extensión de las bases nucleares y la difusión de las armas nucleares habían llegado a constituir un método inaceptable para resolver los problemas internacionales. Después de señalar que las dos partes parecían dispuestas a llegar a una solución pacífica del problema, expresó la esperanza de que se iniciaran negociaciones mientras todavía hubiese tiempo para ello.

En la 1024a. sesión, el 24 de octubre, el representante de Francia declaró que la introducción de armas ofensivas en Cuba representaba una grave tentativa de crear un nuevo frente de guerra en una región anteriormente libre de amenazas nucleares. La gravedad de la situación quedaba demostrada por la reacción de los países de América Latina ante el problema creado por la Unión Soviética. En su opinión, el proyecto de resolución de los Estados Unidos era claramente un esfuerzo en procura de una solución pacífica con arreglo a los principios de la Carta.

El representante de la China observó que el asunto no consistía en determinar si Cuba tenía derecho a reforzar su propias defensas, sino si debía permitirse a la Unión Soviética instalar armas de destrucción en masa en esa zona estratégica con las consecuencias previsibles. Los Estados Unidos tenían pleno derecho a detener la afluencia continuada de armas ofensivas a Cuba cuando se veían amenazadas su propia seguridad y la de sus vecinos. Los Estados Unidos, al señalar prontamente la cuestión a la atención del Consejo de Seguridad, habían demostrado su serio propósito de impedir que se agravara aún más la situación, que estaba cargada de grave peligro. Agregó el orador que la crisis se había precipitado por el refuerzo militar soviético en Cuba, y que podía ser rápidamente terminada mediante el retiro de las armas ofensivas, si la Unión Soviética deseaba convencer al mundo de la sinceridad de sus protestas.

El representante de Chile declaró que su Gobierno había mantenido siempre una actitud serena con respecto a la revolución cubana y las repercusiones de ésta en el hemisferio. Aunque Chile había estado en desacuerdo con Cuba, mantenía con ella relaciones normales. El problema presentado al Consejo de Seguridad no era el de la revolución cubana o el de la infiltración de su ideología en otros países latinoamericanos, sino el hecho de que una Potencia extracontinental hubiera encontrado en Cuba la puerta abierta para intervenir en el hemisferio occidental y amenazar su seguridad. Por tal razón, Chile había dado su conformidad a la convocación del órgano de consulta de la OEA conforme al Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro. Subrayó la necesidad de asegurar la presencia de las Naciones Unidas en Cuba e hizo un llamamiento al Gobierno cubano para que aceptara

dicho procedimiento o cualquier otra iniciativa que el Secretario General interino pudiera adoptar en procura de una solución pacífica de la crisis.

El representante de la República Árabe Unida manifestó que su Gobierno no podía disculpar la decisión unilateral de los Estados Unidos de imponer la cuarentena en el mar Caribe, actitud que era contraria al derecho internacional y que intensificaría las tensiones mundiales y amenazaría la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad debía concentrar sus esfuerzos en reunir a todas las partes interesadas para que logran un arreglo pacífico, conforme a los principios de la Carta, y para que aprovecharan la asistencia que el Secretario General interino pudiera brindar.

El representante de Ghana expresó que existía un temor legítimo de que el hemisferio occidental estuviera amenazado por el fortalecimiento militar de Cuba, en tanto que Cuba tenía el ataque de sus vecinos, inclusive los Estados Unidos, lo que constituía el motivo de sus medidas defensivas. En tales circunstancias, la delegación de Ghana proponía que los Estados Unidos dieran al Consejo una garantía por escrito en el sentido de que no tenían intención alguna de injerirse en los asuntos internos de Cuba, ni de realizar operaciones militares ofensivas contra ese país. Cuba debía también dar una garantía escrita semejante con respecto a los países del hemisferio occidental. Lo que se necesitaba con urgencia era la negociación entre las partes interesadas para resolver la crisis sobre la base del mutuo respeto por los derechos soberanos de cada uno. A la luz de estas consideraciones, observó, su delegación y la de la República Árabe Unida, después de consultar a gran número de Estados Miembros, presentaban al Consejo de Seguridad un proyecto de resolución (S/5190) así redactado:

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Habiendo considerado los graves acontecimientos recientes del Caribe,*

*"Observando con grave preocupación la amenaza a la paz y la seguridad internacionales,*

*"Habiendo oído a las partes directamente interesadas,*

*"1. Pide al Secretario General interino que consulte con urgencia a las partes directamente interesadas acerca de las medidas inmediatas que han de adoptarse para hacer desaparecer la amenaza a la paz mundial existente, y normalizar la situación en el Caribe;*

*"2. Exhorta a las partes interesadas a cumplir inmediatamente con esta resolución y brindar plena asistencia al Secretario General interino en el cumplimiento de su tarea;*

*"3. Pide al Secretario General interino que informe al Consejo acerca del cumplimiento del párrafo 1 de esta resolución;*

*"4. Exhorta a las partes interesadas a abstenerse entre tanto de cualquier actitud que en forma directa o indirecta pueda agravar más la situación".*

El Secretario General interino hizo una declaración acerca de la gravedad de la situación que se planteaba a las Naciones Unidas, e informó al Consejo de Seguridad que, a pedido de muchos Estados Miembros, había enviado mensajes idénticos al Presidente de los Estados Unidos y al Presidente del Consejo de Ministros de la URSS. En el mensaje, cuyo texto leyó en la reunión, el Secretario General interino formulaba

un llamamiento urgente en el sentido de que se diera tiempo para que las partes interesadas se reunieran con miras a resolver pacíficamente la crisis y normalizar la situación en el Caribe mediante la suspensión voluntaria, por un periodo de dos o tres semanas, no sólo de todos los envíos de armas a Cuba sino también de las medidas de cuarentena que involucraban el registro de los buques destinados a Cuba. En dicho contexto manifestó que se pondría gustosamente a disposición de todas las partes interesadas para cualquier función que le fuera posible desempeñar.

En la misma sesión, el Secretario General interino formuló también un llamamiento al Presidente y el Primer Ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba para que suspendiesen la construcción y ampliación de las instalaciones y servicios militares mientras se celebraban las negociaciones. Instó también a las partes interesadas a que iniciaran negociaciones inmediatamente, sin perjuicio de cualquier otro procedimiento de que se pudiera disponer o que pudiera ser invocado. Observó que desde el fin de la segunda guerra mundial nunca había existido una confrontación más peligrosa o directa entre las principales Potencias, e insistió en que la negociación y las transacciones constituían el único camino que permitiría lograr la paz en ese momento de crisis.

En la 1025a. sesión, el 25 de octubre, los representantes de los Estados Unidos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hicieron nuevas declaraciones en el curso de las cuales leyeron a los miembros del Consejo los textos de las respuestas de sus respectivos Gobiernos al llamamiento del Secretario General interino. El Presidente Kennedy, en su respuesta de fecha 25 de octubre, expresaba que apreciaba profundamente el espíritu que había impulsado a U Thant a enviar su mensaje, y declaraba que la amenaza existente había sido creada por la introducción secreta de armas ofensivas en Cuba y que la solución era el retiro de esas armas. El Presidente indicó que el Embajador Stevenson estaba dispuesto a discutir la cuestión inmediatamente con el Secretario General interino a fin de determinar si podía llegarse a un arreglo satisfactorio. Aseguró al Secretario General interino el deseo de su Gobierno de llegar a una solución satisfactoria y pacífica de la cuestión.

En su respuesta de fecha 26 de octubre, el Primer Ministro Khrushchev aprobó la iniciativa del Secretario General, declarando que el Gobierno soviético también consideraba que la situación en el Caribe era peligrosísima y requería la intervención inmediata de las Naciones Unidas. Agregaba que había estudiado cuidadosamente, y aceptado, la propuesta de U Thant, que coincidía con los intereses de la paz.

En la misma sesión el representante de los Estados Unidos expresó que su Gobierno aprobaba las seguridades que el Primer Ministro Khrushchev había dado en su carta al Conde Russell en el sentido de que la Unión Soviética no adoptaría ninguna decisión precipitada con respecto a la crisis. Los Estados Unidos recibían con especial beneplácito el informe de que el Sr. Khrushchev había aceptado las propuestas adelantadas por el Secretario General. Refiriéndose a cuestiones planteadas en el curso de sesiones anteriores, declaró que los Estados Unidos habían actuado rápidamente en el Caribe debido a la amenaza creada por la forma apresurada y secreta con que habían sido instalados los proyectiles nucleares en Cuba. Tal amenaza, que contravenía el párrafo 4 del Artículo 2 de

la Carta, era una amenaza que las Repúblicas americanas tenían derecho a rechazar; cualquier demora hubiera permitido dotar rápidamente a Cuba de armas nucleares, riesgo que el hemisferio no estaba dispuesto a correr. En cuanto a la argumentación del representante de la URSS de que los Estados Unidos mantenían 35 bases en países extranjeros, aclaró que esas bases habían sido establecidas únicamente por decisión adoptada en la reunión de Jefes de Estado de diciembre de 1957, que se había visto obligada a autorizar tales medidas debido a una anterior decisión soviética de introducir sus propios proyectiles capaces de destruir los países de Europa Occidental. Mostró varias fotografías de reconocimiento aéreo que, sostuvo, ofrecían pruebas indiscutibles del poderío militar soviético en Cuba. Además de los proyectiles, la Unión Soviética había enviado varios bombarderos que podían transportar armas nucleares y, en apoyo de esos avanzados sistemas de armamento, había enviado a Cuba mucho personal militar.

El representante de la URSS replicó que la esencia del problema no consistía en lo que los Estados Unidos habían denominado "pruebas incontrovertibles de la instalación de armas ofensivas en Cuba", sino en las intenciones agresivas de los Estados Unidos hacia dicho país. Sin embargo, los Estados Unidos, en su intento de lanzar su acción agresiva, se habían visto enfrentados con la opinión mundial y obligados a cambiar su tono. La interpretación dada por el representante de los Estados Unidos a la carta dirigida por el Sr. Khrushchev a Bertrand Russell estaba en completo desajuste con el contenido de esa carta. Leyó ante los miembros del Consejo parte de la carta, la cual afirmaba, entre otras cosas, que la URSS haría todo lo posible para evitar una catástrofe, pero que si los Estados Unidos continuaban con su programa de actos de piratería la URSS tendría que recurrir a medios de defensa contra el agresor para defender los derechos establecidos en acuerdos internacionales y en la Carta de las Naciones Unidas. La carta declaraba además que la cuestión de guerra y paz era tan vital que el Gobierno soviético consideraba útil una reunión cumbre con el objeto de discutir todos los problemas y tratar de hacer desaparecer el peligro de desatar una guerra termonuclear. El representante de la URSS expresó que su Gobierno había señalado muy claramente que la Unión Soviética poseía armas nucleares tan poderosas que no tenía necesidad de buscar bases de lanzamiento fuera de las fronteras de la Unión Soviética. El Gobierno de los Estados Unidos había creado deliberadamente la crisis y había procurado ocultar su acción agresiva mediante un debate en el Consejo de Seguridad.

Los representantes de la República Árabe Unida, Ghana y Chile celebraron la respuesta favorable de ambas partes al llamamiento del Secretario General interino y señalaron que ése era un momento propicio para que las Partes se reunieran e iniciasen negociaciones con la asistencia del Secretario General interino.

**Decisión:** *A moción de la República Árabe Unida, apoyada por Ghana, el Consejo aplazó sus sesiones sine die.*

### **C. Comunicaciones recibidas entre el 23 de octubre y el 13 de diciembre de 1962**

#### *i) Comunicaciones de los Estados Miembros*

En comunicaciones separadas de fechas 24, 25 y 26 de octubre (S/5189, 5192, 5194 y 5196), Bulgaria,

Checoslovaquia, Hungría y Mongolia denunciaron el bloqueo naval de Cuba como violación flagrante del derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Expresaron su apoyo a la declaración soviética del 23 de octubre y su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Cuba, y pidieron a las Naciones Unidas que adoptaran medidas efectivas para detener la acción agresiva de los Estados Unidos. En una carta de fecha 24 de octubre de 1962 (S/5191), la República Dominicana comprometió su apoyo a cualquier medida que pudiera adoptarse para conjurar la amenaza creada por la presencia de proyectiles nucleares en Cuba. En una carta de fecha 25 de octubre (S/5195), doce Estados Miembros africanos (la Unión de Estados Africanos y Madagascar) apoyaron las iniciativas del Secretario General sobre la crisis del Caribe y recomendaron que el cumplimiento de las propuestas fuera supervisado por las Naciones Unidas. En carta de fecha 29 de octubre (S/5199) Haití comunicó al Secretario General que había puesto instalaciones portuarias y aeropuertos a disposición de las unidades navales de los Estados Unidos que intervenían en la operación de cuarentena. En una carta de fecha 30 de octubre (S/5200), el Presidente de Yugoslavia elogiaba al Secretario General interino por su iniciativa al haber hallado una solución pacífica a la crisis del Caribe, y expresaba su confianza en que las negociaciones conducirían a una garantía internacional efectiva de la seguridad e independencia de Cuba.

#### *ii) Comunicaciones de la Organización de Estados Americanos*

Mediante una carta de fecha 23 de octubre de 1962 (S/5193), el Secretario General de la OEA comunicó al Consejo de Seguridad el texto de una resolución aprobada por el Consejo de la OEA, actuando provisionalmente como Órgano de Consulta, en la cual:

- 1) instaba a que se dismantelaran inmediatamente y se retiraran de Cuba todos los proyectiles y cualesquiera otras armas con capacidad ofensiva; 2) recomendaba a los Estados Miembros de la OEA, de conformidad con los artículos 6 y 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que adoptaran todas las medidas individuales y colectivas, incluso el empleo de la fuerza armada, que considerasen necesarias para asegurar que el Gobierno de Cuba no pudiera continuar recibiendo de las Potencias chino-soviéticas pertrechos y suministros militares que amenazarán la paz y la seguridad del Continente, y para impedir que los proyectiles en Cuba con capacidad ofensiva se convirtieran en cualquier momento en una amenaza activa contra la paz y la seguridad del continente; 3) expresaba la esperanza de que el Consejo de Seguridad, de acuerdo con el proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos, enviara a Cuba observadores de las Naciones Unidas a la brevedad posible, y 4) instaba a los Estados Miembros de la OEA a que mantuvieran debidamente informado al Órgano de Consulta sobre las medidas que adoptaran de acuerdo con el párrafo 2 de la resolución.

Por carta de 29 de octubre (S/5202), el Secretario General de la OEA comunicó al Secretario General interino notas de los Gobiernos de la Argentina, Colombia, Costa Rica, los Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá y la República Dominicana referentes al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución de la OEA de 23 de octubre de 1962. La nota de los Estados Unidos contenía el texto de la proclamación del Presidente de los Estados

Unidos sobre la "Interdicción de la Entrega de Armas Ofensivas a Cuba". Las notas de los otros miembros de la OEA contenían ofrecimientos de cooperación de fuerzas navales y aéreas, facilidades portuarias y otras instalaciones necesarias que, se afirmaba, eran necesarias para llevar a cabo la acción colectiva contemplada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Por carta de 8 de noviembre (S/5206), el Secretario General de la OEA remitió al Consejo de Seguridad el texto de una resolución aprobada el 5 de noviembre de 1962 por el Consejo de la OEA, en actuación provisional como Órgano de Consulta, por la cual tomaba nota de los ofrecimientos de ayuda militar o de otro género efectuados por los miembros de la OEA, y recomendaba a los Estados Miembros que participaban con efectivos militares u otra contribución a la defensa del continente que tomaran directamente entre ellos las medidas de carácter técnico necesarias para establecer una acción coordinada y eficaz de las fuerzas combinadas.

Por carta de 14 de noviembre (S/5208), el Secretario General de la OEA remitió al Consejo de Seguridad los siguientes documentos relacionados con la resolución aprobada el 23 de octubre de 1962 por el Consejo de la OEA actuando provisionalmente como Órgano de Consulta: informes de los Gobiernos de la Argentina, El Salvador y Venezuela referentes a nuevos ofrecimientos de ayuda militar y de otro género para las operaciones de cuarentena; un informe de los Estados Unidos que expresaba que la cuarentena impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos había sido suspendida por 48 horas entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre de 1962 y que los vuelos de observación y vigilancia sobre Cuba se habían suspendido también por dos días a partir del 30 de octubre de 1962; y una nota conjunta de las delegaciones de los Estados Unidos de América, la Argentina y la República Dominicana comunicando que, de conformidad con la resolución del Consejo de la OEA de fecha 5 de noviembre, los tres Gobiernos habían establecido una Fuerza Combinada de Cuarentena bajo comando de los Estados Unidos.

Por carta de 13 de diciembre (S/5217), el Secretario General de la OEA transmitió al Consejo de Seguridad documentos adicionales que se referían al cumplimiento de la resolución de la OEA de fecha 23 de octubre y uno de los cuales contenía una proclamación del Presidente de los Estados Unidos de 21 de noviembre de 1962, dando por terminadas las operaciones de cuarentena en las proximidades de Cuba.

#### **D. Acontecimientos ulteriores a las sesiones del Consejo**

[El 25 de octubre el Secretario General interino envió mensajes al Presidente Kennedy y al Presidente Khrushchev proponiendo que, a fin de que las discusiones permitiesen llegar a un arreglo pacífico del problema en armonía con la Carta de las Naciones Unidas, las embarcaciones soviéticas que se dirigían a Cuba se mantuviesen lejos de la zona de cuarentena por un período limitado de tiempo, y que los barcos de los Estados Unidos en el Caribe hiciesen en los siguientes días todo lo posible para evitar una confrontación directa con las embarcaciones soviéticas para disminuir el riesgo de cualquier incidente desfavorable. En su respuesta del 25 de octubre, el Presidente Kennedy manifestó que su



Gobierno aceptaría y mantendría la propuesta del Secretario General interino si el Gobierno de la Unión Soviética hacía lo mismo. Señaló que el problema era sumamente urgente y que los trabajos en las instalaciones militares ofensivas en Cuba seguían avanzando. En su respuesta del 26 de octubre el Presidente Khrushchev aceptó la propuesta del Secretario General interino y expresó su esperanza de que la otra parte comprendería que una situación en la cual los barcos de la Unión Soviética se vieran obligados a permanecer inmovilizados en alta mar debía ser temporal y de corta duración. Declaró que el Gobierno de la Unión Soviética trataba constantemente de afianzar la autoridad de las Naciones Unidas, que sirven de foro para todos los países, independientemente de su estructura sociopolítica, para que las controversias puedan ser zanjadas no mediante la guerra sino mediante negociaciones.]

En una carta con fecha 26 de octubre (S/5197), los Estados Unidos informaron al Secretario General interino de que los trabajos en las bases de cohetes balísticos de Cuba avanzaban rápidamente con el objetivo, al parecer, de ponerlas cuanto antes en condiciones de pleno funcionamiento.

[Ese mismo día el Secretario General interino envió un mensaje al Primer Ministro Fidel Castro reiterando su anterior llamamiento para que durante las negociaciones se suspendiese la construcción y ampliación de las principales instalaciones y servicios militares en Cuba, especialmente las destinadas al lanzamiento de cohetes balísticos de alcance mediano e intermedio. El Primer Ministro Castro respondió el 27 de octubre que Cuba estaba dispuesta a aceptar la transacción sugerida por el Secretario General interino si al mismo tiempo, mientras se celebraran las negociaciones, el Gobierno de los Estados Unidos cesaba sus amenazas y acciones agresivas contra Cuba, inclusive el bloqueo naval. El Primer Ministro invitó además al Secretario General interino a que fuera a Cuba a fin de celebrar conversaciones directas. Subrayó que el respeto absoluto de la soberanía de Cuba era un requisito previo indispensable para cualquier solución del problema. El 28 de octubre el Secretario General interino aceptó la invitación del Primer Ministro Castro y expresó la esperanza de que podría lograrse una solución que asegurase el principio del respeto de la soberanía de Cuba. Añadió que tal vez sería posible además adoptar medidas que tranquilizasen a otros países que se habían sentido amenazados por los recientes acontecimientos ocurridos en Cuba.]

[Durante ese período hubo un intercambio de correspondencia entre el Presidente Kennedy y el Presidente Khrushchev celebrándose simultáneamente conversaciones privadas por separado entre el Secretario General interino y los representantes de los Estados Unidos, Cuba y la URSS.]

El día 27 de octubre, el representante de los Estados Unidos dirigió una nota verbal al Secretario General interino transmitiendo copia de una carta del Presidente Kennedy al Presidente Khrushchev en la cual el primero explicaba la posición del Gobierno de los Estados Unidos. El Presidente Kennedy indicaba en su carta que, según las propuestas que en líneas generales eran aceptables por los Estados Unidos, la Unión Soviética debía acceder a retirar del territorio cubano las armas instaladas, bajo un sistema adecuado de observación y supervisión por parte de las Naciones Unidas, y proceder asimismo, con las garantías adecuadas, a detener cualquier envío ulterior de tales armas a Cuba. Los

Estados Unidos, por su parte, accederían, a base de preparativos adecuados realizados por las Naciones Unidas, a asegurar el cumplimiento de estos compromisos, a levantar prontamente las medidas de cuarentena y también a dar garantías contra una invasión de Cuba. Con respecto al último compromiso, el Presidente Kennedy señaló que confiaba en que otras naciones del Hemisferio Occidental estarían dispuestas a hacer lo mismo.

El 28 de octubre, el Presidente Khrushchev envió un mensaje al Secretario General interino, en el cual manifestaba que el Gobierno soviético había designado al Sr. V. V. Kuznetsov, Primer Viceministro de Relaciones Exteriores de la URSS, para que se dirigiera a Nueva York a fin de cooperar con el Secretario General interino en sus esfuerzos por eliminar esa peligrosa situación. Para mantener informado al Secretario General interino acerca de la posición soviética, el Presidente Khrushchev le envió también una copia de la carta que había dirigido al Presidente Kennedy el mismo día. En esa carta, el Presidente Khrushchev indicaba que veía con respeto y confianza la declaración del Presidente Kennedy según la cual "no habrá ataque, ni invasión de Cuba, ni por parte de los Estados Unidos ni por otras naciones del Hemisferio Occidental". El Presidente Khrushchev agregaba que se había dado instrucciones para "adoptar medidas adecuadas para interrumpir la construcción de las instalaciones mencionadas, desmantelarlas y llevarlas de nuevo a la Unión Soviética".

En una carta del 28 de octubre (S/5228, anexo I), dirigida al Secretario General interino, el Primer Ministro Castro se refirió a la declaración formulada por el Presidente Kennedy, en carta enviada al Presidente Khrushchev en el sentido de que los Estados Unidos aceptarían, después de establecerse adecuados acuerdos por conducto de las Naciones Unidas, eliminar las medidas de bloqueo en vigor y dar garantías contra una invasión a Cuba. Se refirió también a la decisión anunciada por el Presidente Khrushchev de retirar las armas defensivas estratégicas del territorio cubano. No existirán, dijo el Primer Ministro Castro las garantías de que habla el Presidente Kennedy contra una agresión a Cuba, si, además de eliminar el bloqueo naval que promete, no se adoptan entre otras, las siguientes medidas: primero, la cesación del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos contra Cuba; segundo, la cesación de todas las actividades subversivas, incluyendo el lanzamiento y el desembarco de armas por aire y por mar, la organización de invasiones mercenarias, la infiltración de espías y saboteadores; tercero, la cesación de los ataques piratas realizados desde los Estados Unidos y Puerto Rico; cuarto, la cesación de todas las violaciones del espacio aéreo y de las aguas territoriales de Cuba por aviones y navíos de guerra de los Estados Unidos; quinto, la evacuación de la base naval de Guantánamo, por los Estados Unidos.

[El 28 de octubre, el Secretario General interino expresó su agradecimiento al Presidente Khrushchev por haberle enviado una copia del mensaje que el Presidente había remitido el 28 de octubre al Presidente Kennedy en contestación a la carta de este último del día 27 de octubre. El Secretario General interino expresaba que había tomado nota de las constructivas propuestas que el Presidente Khrushchev había hecho para eliminar la tensión en la zona del Caribe, y que creía que cuando dichas propuestas fueran llevadas a

cabo la situación en el Caribe se normalizaría. El Secretario General interino expresó su particular satisfacción por el hecho de que el Gobierno de la Unión Soviética hubiese convenido en interrumpir la construcción de bases de cohetes balísticos en Cuba, en desmantelarlas y llevarlas de nuevo a la Unión Soviética, así como de que estuviese dispuesto a llegar a un acuerdo en virtud del cual los representantes de las Naciones Unidas pudiesen verificar el desmantelamiento de las bases. Deseaba asimismo discutir con el Sr. Kuznetsov, y con el Primer Ministro Castro, las modalidades de la verificación por los observadores de las Naciones Unidas, a lo cual el Presidente Khrushchev había accedido tan prontamente, y expresó la esperanza de que podría alcanzar un acuerdo satisfactorio con ellos.]

[Los días 30 y 31 de octubre, el Secretario General interino, que se había trasladado por avión a La Habana con algunos de sus colegas y asesores, conferenció con el Presidente Dorticós y el Primer Ministro Castro. Al regresar a la Sede el 31 de octubre el Secretario General interino declaró que sus conversaciones con los dirigentes cubanos habían sido provechosas y que se había llegado a un acuerdo para que las Naciones Unidas continuaran participando en la solución pacífica del problema. Manifestó después que durante su permanencia en La Habana se le había informado en forma fidedigna de que ya se había iniciado el desmantelamiento de los cohetes balísticos y de sus instalaciones que se completaría para el 2 de noviembre.]

[En una carta del 15 de noviembre dirigida al Secretario General interino, el Primer Ministro Castro reiteró la posición de Cuba de que la instalación de armas en Cuba había sido un acto de legítima defensa contra la política agresiva de los Estados Unidos, y de que Cuba no permitiría una inspección unilateral, nacional o internacional, de su territorio. Manifestó que mientras el Gobierno soviético, en cumplimiento de su promesa al Presidente Kennedy, había retirado sus cohetes balísticos estratégicos bajo la inspección de funcionarios de los Estados Unidos en alta mar, los Estados Unidos continuaban violando la soberanía de Cuba. Advirtió que toda nave que violase el espacio aéreo cubano correría el riesgo de ser destruida. El 19 de noviembre el Primer Ministro Castro informó al Secretario General interino de que el Gobierno cubano no se opondría a la decisión del Gobierno soviético de retirar de Cuba los bombarderos medianos IL-28.]

En una carta del 26 de noviembre (S/5210), dirigida al Secretario General interino, el Gobierno de Cuba se refirió a una declaración del Presidente Kennedy sobre el levantamiento del bloqueo en reciprocidad por la acción ante el acto de la Unión Soviética en el sentido de retirar de la Isla los cohetes balísticos de alcance intermedio y los bombarderos medianos IL-28. A juicio del Gobierno de Cuba, sin embargo, la negativa por parte de los Estados Unidos a dar garantías contra una invasión de Cuba, aduciendo que este país no había accedido a la inspección internacional, era un simple pretexto para no cumplir su compromiso e insistir en su política de agresión contra Cuba. El Gobierno cubano, insistiendo en que era indispensable adoptar los cinco puntos que había expuesto en la comunicación del 28 de octubre, sostuvo que la necesidad de establecer medidas de control efectivo constituía una de las garantías requeridas para una solución verdadera y definitiva de la crisis. Manifestó además que si Estados Unidos y sus cómplices de agresión contra Cuba no

aceptaban la inspección en sus territorios por las Naciones Unidas, Cuba no aceptaría por ningún concepto la inspección de su territorio.

En una carta con fecha 5 de diciembre (S/5214), el Representante Permanente de Cuba denunció que en la noche del 4 de diciembre, individuos integrantes de organizaciones contrarrevolucionarias que operaban en territorio norteamericano, tripulando una embarcación grande procedente del norte dispararon contra una zona situada al este de la ciudad de Caibarién.

El 7 de enero de 1963, en una carta conjunta dirigida al Secretario General (S/5227), el Sr. Kuznetsov, Primer Viceministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Sr. Stevenson, Representante Permanente de los Estados Unidos, expresaron su reconocimiento al Secretario General por los esfuerzos que había realizado para ayudar a sus respectivos Gobiernos a evitar la grave amenaza surgida a la paz recientemente en la región del Caribe. Manifestaron que aunque no había sido posible resolver todos los problemas que se suscitaron en relación con ese asunto, los dos Gobiernos estimaban que, dado el grado de entendimiento logrado entre ellos respecto de la solución de la crisis y el grado de progreso realizado en la aplicación de ese entendimiento, no era necesario que esa cuestión continuara ocupando, por el momento, la atención del Consejo de Seguridad. Los dos Gobiernos expresaron la esperanza de que las acciones realizadas para evitar la amenaza de guerra en relación con la crisis condujeran al arreglo de otras diferencias que existieran entre ellos y de la disminución general de la tirantez que pudiera ocasionar una nueva amenaza de guerra.

En una carta de fecha 7 de enero de 1963 (S/5228), el Representante Permanente de Cuba comunicó al Secretario General la opinión de su Gobierno de que las negociaciones no habían producido acuerdos aceptables para Cuba y capaces de garantizar de manera permanente la paz en el Caribe. El argumento básico era que los Estados Unidos, lejos de renunciar a su política agresiva e intervencionista respecto de la República de Cuba, había mantenido la posición de fuerza asumida en flagrante violación de las normas jurídicas internacionales. El Gobierno cubano no podía considerar como acuerdo eficaz otro que no fuera el que incluyese la consideración de los cinco puntos o medidas, que como garantías mínimas para la paz en el Caribe, había reclamado el Primer Ministro Fidel Castro en su declaración del 28 de octubre de 1962. La simple promesa de no invasión por el Gobierno de los Estados Unidos, la cual, por otra parte, ni siquiera había sido formalizada, no constituía garantía alguna para Cuba. El Gobierno cubano recordó que ya había dicho que estaba dispuesto a aceptar un sistema de verificación múltiple en los países de la zona del mar Caribe que incluyera el territorio correspondiente de los Estados Unidos, lo cual resolvería la verificación del cumplimiento de los compromisos contraídos, siempre que los Estados Unidos asumieran como compromiso suyo la adopción de las mencionadas cinco medidas o puntos exigidos por el Gobierno cubano. A juicio del Gobierno de Cuba no había mejor manera de resolver la crisis, que mediante negociaciones pacíficas y el acatamiento de las normas del derecho internacional. Por último, Cuba se reservaba siempre todo el derecho, frente a sus enemigos, de adoptar las medidas que estimase pertinentes y a obtener las armas que considerase necesarias.

El 8 de enero, el Secretario General, en cartas (S/5229 y S/5230) dirigidas al Representante Permanente de los Estados Unidos y al Primer Viceministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, expresó su esperanza de que todos los gobiernos interesados se abstendrían de adoptar cualquier medida que pudiera agravar de algún modo la situación en la zona del Caribe. En una carta con fecha 9 de enero (S/5231) dirigida al Representante Permanente de Cuba, el Secretario General tomó nota de la posición del Gobierno revolucionario de Cuba, expresada en su carta del 7 de enero, y manifestó su confianza en que todos los gobiernos interesados se abstendrían de cualquier acto que pudiera agravar de cualquier manera la situación en la región del Caribe.

Por una carta de fecha 11 de marzo (S/5259) el Representante Permanente de Cuba comunicó al Presidente del Consejo de Seguridad el texto de una carta, de fecha 4 de marzo de 1963, dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, al Secretario General. En la carta se manifestaba que desde la terminación de

las negociaciones diplomáticas en torno a la crisis del Caribe, habían surgido nuevas amenazas y tirantezas como resultado de la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba. Refiriéndose a los acontecimientos ocurridos en la Organización de los Estados Americanos, el Gobierno cubano acusaba a Venezuela y a otros países de América Latina de fomentar la agresión contra Cuba.

En relación con el documento S/5259 hubo un canje de correspondencia entre los representantes de Venezuela, Costa Rica y Paraguay y el Presidente del Consejo de Seguridad (S/5260, S/5264, S/5266, S/5267, S/5268, S/5269, S/5271, S/5272 y S/5273).

En una carta de fecha 1° de mayo (S/5299), el representante de Cuba transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad el texto de una nota que su Gobierno había enviado, el 26 de abril, al Gobierno de Estados Unidos. En la nota se protestaba contra un intento de bombardear una refinería de petróleo en Cuba, realizado supuestamente el 25 de abril, por un ciudadano de los Estados Unidos, en un avión que operó desde territorio norteamericano.

## **Capítulo 2**

### **CARTA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 1963, DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS INTERINO DE LA MISION PERMANENTE DEL SENEGAL**

En una carta, de fecha 10 de abril de 1963 (S/5279), el encargado de negocios interino del Senegal pidió que el Consejo de Seguridad se reuniera cuanto antes para discutir "las repetidas violaciones del espacio aéreo y del territorio senegalés". Agregaba que el 9 de abril, cuatro aviones portugueses habían violado el espacio aéreo del Senegal y lanzado cuatro granadas sobre la aldea de Bougniack. En la carta se recordaba que, en diciembre de 1961, Senegal ya había señalado a la atención del Consejo de Seguridad otras violaciones anteriores de carácter análogo. Ante la repetición de estos incidentes, el Gobierno del Senegal no tenía más remedio que dirigirse al Consejo de Seguridad. En una corrección ulterior (S/5279/Corr.1), el Senegal declaraba que el incidente mencionado había ocurrido el 8 de abril y no el 9 de abril.

En carta de la misma fecha, el representante de Portugal declaró (S/5281) que tras minuciosa investigación, su Gobierno podía declarar categóricamente que la acusación de violación formulada en la carta del Senegal "carecía de todo fundamento". En la fecha indicada, ninguna aeronave militar portuguesa había volado en la zona a que se refería la carta o ninguna otra zona a lo largo de la frontera con el Senegal. En cuanto a la referencia del Senegal a supuestas violaciones anteriores, Portugal ya las había contestado en su carta de 10 de enero de 1962 (S/5055). Portugal deploraba que el Senegal hubiera combinado estas dos viejas denuncias con una alegación totalmente nueva y sin fundamento con objeto de crear un ambiente de hostilidad contra Portugal a fin de fomentar ciertos objetivos políticos. En esas circunstancias, Portugal consideraba que la reunión del Consejo de Seguridad no se justificaba en modo alguno.

El Consejo de Seguridad incluyó este asunto en su orden del día de la 1027a. sesión, celebrada el 17 de abril de 1963, e invitó a los representantes del Senegal y

de Portugal a que participaran, sin voto, en el examen del mismo. En su 1028a. sesión, celebrada el 18 de abril, el Consejo acordó acceder a las solicitudes de los representantes del Congo (Brazzaville) y del Gabón (S/5286 y S/5288 respectivamente) a participar en el debate en el momento oportuno. El Consejo examinó esta cuestión en sus sesiones 1027a. a 1033a. (inclusive) celebradas entre los días 17 y 24 de abril de 1963.

En la 1027a. sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 17 de abril de 1963, el representante del Senegal declaró que no era la primera vez que habían ocurrido incidentes de esa clase. Ya el 1° de diciembre de 1961, unidades motorizadas del ejército colonial portugués habían penetrado en la aldea senegalesa de Bakaka sembrando el terror entre su población. Portugal había persistido en esa política con actos parecidos, entre ellos repetidos vuelos de aviones de caza portugueses sobre territorio senegalés. El Senegal había pedido al Consejo de Seguridad que examinara estos incidentes en el momento oportuno, pero se le había recomendado que tratara de llegar a un arreglo directo con Portugal. Aun cuando el Senegal había seguido ese procedimiento, se veía muy a su pesar obligado a comparecer ante el Consejo de Seguridad en vista de que los incidentes que habían ocurrido eran más graves que los de 1961.

El 8 de abril de 1963, la aldea senegalesa de Bougniack había sido bombardeada por cuatro aviones del ejército colonial portugués. Dos aviones pequeños volaron previamente y fueron seguidos por bombarderos que arrojaron bombas sobre la aldea de Bougniack y la atacaron con fuego de ametralladora. Un grupo de funcionarios del Gobierno senegalés encontró pedazos de cola de cohetes y cartuchos de ametralladora. Resultó herida una persona que fue hospitalizada. Las autoridades portuguesas en Bissau admitieron que, el 8 de abril, se habían realizado maniobras combinadas

de aire y tierra en la región vecina a la aldea de Bougniack.

Además del bombardeo de la aldea de Bougniack, la tirantez existente en la región se debía también a la política sistemática de división de la población fronteriza. Los portugueses estaban realizando matanzas y aterrorizando a la población de Diola, que era de nacionalidad portuguesa, a fin de inducirles a luchar contra los nacionalistas e incitarles contra los habitantes locales en el lado del Senegal, que se llaman *mandjakes*. La situación era sumamente peligrosa porque si elementos extranjeros cruzaban la frontera del Senegal para atacar a sus nacionales, el Senegal se vería obligado a actuar.

Una tercera causa de tirantez era la detención de dos conductores senegaleses que habían sido atacados y posteriormente detenidos después de penetrar en la Guinea Portuguesa en ejercicio normal de sus actividades. El Gobierno senegalés no había podido establecer contacto con ellos. Entre otros factores que agravaban la situación figuraba la existencia de una red de espionaje portugués que actuaba en territorio senegalés. Se había detenido a dos espías que habían confesado que trabajaban a favor de Portugal.

Más de una vez Portugal había acusado al Senegal de abrigar intenciones de anexión respecto de la Guinea Portuguesa. Tales acusaciones quedaban desmentidas por la posición que siempre había mantenido el Senegal en las Naciones Unidas y su apoyo al principio de la libre determinación y la independencia nacional. Además, en todas las cuestiones relativas a fronteras de antiguas colonias, el Senegal se adhería estrictamente al principio jurídico de que cuando una colonia obtendría su independencia sus límites territoriales debían ser los mismos que cuando había sido colonia. La tirantez a lo largo de la frontera obedecía exclusivamente a la política que seguía Portugal. De hecho, el ambiente era tan tirante y cargado de peligro que podría provocar un conflicto armado y constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Por ese motivo, su delegación estimaba que el Consejo debería condenar las incursiones portuguesas en territorio senegalés y los ataques contra aldeas del Senegal. También pedía al Consejo que adoptara las medidas necesarias para que Portugal se atuviera al derecho internacional y aplicara la resolución 1514 (XV) relativa a la descolonización.

El representante de Portugal declaró que el examen de los supuestos agravios del Senegal era irregular y prematuro con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. La solicitud del Senegal de que el Consejo celebrara una sesión correspondía al Capítulo VI de la Carta en el que se prevé que las partes en una controversia tratarán de buscarle solución ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación y otros medios pacíficos. Sólo se podía recurrir al Consejo de Seguridad cuando todas esas medidas hubiesen sido probadas sin éxito. Sin embargo, el Senegal ni siquiera había pretendido utilizar ninguno de estos medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta, y el Gobierno de Portugal sólo había podido enterarse de las supuestas causas de la controversia por medio de la prensa. No obstante, Portugal siempre había tratado de mantener con el actual Gobierno del Senegal las relaciones más correctas y de mejor vecindad, como corresponde a Estados que tienen fronteras comunes.

El representante de Portugal agregó que el 9 de abril de 1963, ningún avión militar portugués, procedente

de bases en la provincia de Guinea, había despegado y por lo tanto ningún avión portugués podía haber volado sobre la aldea de Bougniack ni sobre ninguna otra zona a lo largo de la frontera del Senegal. Además, todos los aviones portugueses en la provincia de Guinea tenían órdenes muy estrictas de respetar escrupulosamente la soberanía e integridad de la República del Senegal. El Senegal había alegado luego que el supuesto incidente no había ocurrido el 9 de abril sino el día anterior. No estaba muy clara la razón de que el Senegal hubiera esperado siete días para corregir ese dato tan importante. La investigación efectuada por el Gobierno de Portugal había revelado claramente que el 9 de abril ningún avión militar había despegado en Guinea Portuguesa y que el 8 de abril se habían efectuado maniobras militares de poca importancia, pero que ningún avión había empleado bombas ni granadas, y todas las operaciones se habían desarrollado estrictamente en territorio portugués. No parecía que las autoridades senegalesas estuvieran seguras de la fecha en que se había producido el incidente ni de los daños que presuntamente se habían causado. Precisamente para evitar situaciones confusas de esa clase se recomendaba a las partes de una controversia las disposiciones del Artículo 33 de la Carta. El representante de Portugal hizo resaltar que se había hecho evidente que la queja carecía a todas luces de fundamento. No se había realizado ningún vuelo ni ningún bombardeo sobre parte alguna de territorio senegalés.

Las denuncias del Senegal relativas a los incidentes de diciembre de 1961 habían sido dirimidas en aquella oportunidad. Se había explicado que obedecían en su mayor parte a errores de navegación y que no había existido el propósito deliberado de violar el territorio senegalés. Además, Portugal había expresado su pesar por los incidentes ocurridos y había ofrecido una explicación en forma que dejaba perfectamente a salvo su buena fe y sinceridad. La denuncia de que columnas motorizadas portuguesas habían penetrado en territorio senegalés carecía de fundamento y, junto con otras denuncias, había quedado contestada adecuadamente en el documento S/5055. En cuanto a la acusación de que en el Senegal actuaban agentes de la policía portuguesa, afirmó igualmente que la acusación carecía de fundamento y que las personas detenidas por el Senegal no eran agentes de Portugal. Respecto de la acusación de que se había detenido a dos conductores senegaleses, podía afirmar que era la primera vez que había escuchado tal denuncia, pero suponía que se trataba de un caso ordinario y estaba seguro de que, de haberse comprobado la inocencia de esas personas, se les habría puesto en libertad. En todo caso, el citado incidente no servía de base a una denuncia ante el Consejo. Terminó diciendo que su país estaba dispuesto a cooperar y a discutir con el Senegal problemas de interés común a fin de llegar a soluciones aceptables.

En la 1028a. sesión del Consejo celebrada el 18 de abril, el representante del Senegal observó que Portugal había acusado al Senegal de no haber utilizado las disposiciones de la Carta relativas al arreglo de la controversia por conciliación. No es que ello significara que Portugal se había convertido de repente en un ardiente defensor de la Carta de las Naciones Unidas, ya que de todos era bien conocido el desprecio que Portugal había demostrado por la Carta. Además, a raíz de los incidentes de 1961 y principios de 1962, el Senegal había tratado por todos los medios de resolver sus diferencias con Portugal por medio de la



negociación, pero esas conversaciones habían fracasado. El Senegal había tenido que comprender el hecho ineludible de que no había posibilidad alguna de diálogo con Portugal. Portugal negaba todo, e incluso en su carta de 10 de abril de 1963 había calificado la denuncia del Senegal de carente de fundamento y, en el mejor de los casos, de carácter trivial. El Senegal no tenía más recurso que presentar la denuncia ante el Consejo de Seguridad.

Portugal había tratado de sembrar la confusión en el asunto al declarar que la denuncia del Senegal era imprecisa y que la fecha del incidente se había corregido en un telegrama posterior. La fecha del primer telegrama se debió a un error de transmisión. El comunicado facilitado por las autoridades portuguesas en Bissau demostraba que había habido agresión y que se habían efectuado maniobras aéreas en la región fronteriza. El primer comunicado senegalés se había referido a granadas de mano por basarse en el informe que se había recibido entonces. En el segundo comunicado, el Gobierno del Senegal había dado la información precisa. Sin embargo, aparte de los detalles de la agresión, lo importante era que se había demostrado la violación del espacio aéreo del Senegal, que se había bombardeado una aldea senegalesa, se había puesto en peligro la vida de nacionales senegaleses y se había herido gravemente a uno de sus ciudadanos. Tal vez, todo esto pareciera trivial al representante de Portugal, pero, para el Senegal, era una cuestión de grave importancia. Con su acción, Portugal había causado una grave situación de tirantez en las fronteras del Senegal, que también se debía a la política general que Portugal seguía en África, y que las Naciones Unidas habían discutido y condenado durante muchos años. El mejor servicio que el Consejo de Seguridad podría prestar a Portugal era hacerle comprender lo retrasado que se hallaba en la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General relativa a la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Asimismo, el Senegal confiaba en que el Consejo de Seguridad le ayudaría a restablecer la paz y la tranquilidad en sus fronteras con la llamada Guinea Portuguesa obligando a Portugal a comprender mejor los principios que regulan las relaciones entre países vecinos.

En la misma sesión, el representante de Ghana declaró que, tras examinar las declaraciones hechas ante el Consejo, su delegación estaba persuadida de que la reunión del Consejo estaba en orden y era importante. En virtud del Artículo 35 de la Carta, todo Estado Miembro podía llevar cualquier controversia o cualquier situación que pudiese poner en peligro la paz y la seguridad internacionales a la atención del Consejo. Ghana estaba persuadida de que existía tal amenaza a la paz internacional como resultado de los incidentes de que el Senegal había dado cuenta ante el Consejo. El Senegal había tratado antes de resolver su controversia con Portugal en forma bilateral, pero en vista de la persistencia de los incidentes y de que el Senegal había roto sus relaciones diplomáticas con Portugal, no se podían continuar esas negociaciones. Además, la violación del territorio senegalés por Portugal se debía a la existencia de la colonia portuguesa en las fronteras del Senegal, es decir, a la llamada Guinea Portuguesa. Cabía afirmar que la denuncia del Senegal era una denuncia presentada por toda África. Para los Estados africanos, el provocativo y arrogante alarde de fuerza que Portugal hacía en la llamada Guinea Portuguesa y en el Senegal y otras partes de África, era causa de grave preocupación. De tener solamente en cuenta

los daños materiales y las bajas, cabría la tentación de calificar de "triviales" los incidentes ocurridos en territorio senegalés. Pero tenían, de hecho, gran trascendencia para el Consejo, ya que revelaban una situación de tirantez que se había venido incubando en la frontera que separa al Senegal de la llamada Guinea Portuguesa, por culpa de la política de Portugal. Esa situación podía tener graves consecuencias para la paz internacional y, sinceramente, el Consejo de Seguridad no podía hacer caso omiso de ella. La denuncia del Senegal no era más que uno de los muchos incidentes que estaban produciéndose en África. No se le podía examinar aisladamente, ya que formaba parte de la cuestión general del colonialismo portugués. Para poner fin a esos incidentes era necesario liquidar la acumulación de efectivos militares portugueses en África y que se lamentaran las incursiones fronterizas, las violaciones del espacio aéreo y los ataques esporádicos contra las aldeas.

En vista de que Portugal negaba categóricamente la ocurrencia de incidentes, y ante la creciente tirantez en la frontera, el representante de Ghana creía que convenía efectuar una investigación sobre el terreno. Por ese motivo, sugería que el Consejo de Seguridad designara una comisión para visitar la zona y presentar un informe con recomendaciones para evitar la repetición de incidentes de esta clase. A su juicio, tal medida tendría un efecto saludable en las regiones de África donde existieran problemas análogos.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que ante el Consejo de Seguridad se había denunciado un acto de agresión a consecuencia de la violación del espacio aéreo senegalés por aviones militares portugueses y el bombardeo de la aldea de Bougniack. El caso era tanto más grave cuanto que no era la primera vez que Portugal había cometido una agresión de esa índole. Portugal había tratado de restar importancia a este reciente acto de agresión y había llegado a calificar de "triviales" las acusaciones del Senegal. ¿Estaría dispuesto Portugal a calificar de "triviales" la violación de su espacio aéreo y el bombardeo de su territorio? Asimismo, Portugal había recurrido al viejo truco colonialista de negar que se hubiera cometido la agresión. Sin embargo, las autoridades de la llamada Guinea Portuguesa habían admitido que durante las llamadas operaciones militares combinadas se habían "bombardeado blancos en tierra". Así, pues, por una parte Portugal había declarado en un comunicado oficial que no había la menor posibilidad de que Portugal hubiese violado el espacio aéreo del Senegal ni haber cometido ningún otro acto de agresión, pero, por otra, en una declaración portuguesa, también oficial, se declaraba que los días 8 y 9 de abril aviones militares portugueses habían realizado varios vuelos sobre territorio senegalés y durante ellos se habían bombardeado algunos blancos en tierra. Era evidente que ni siquiera a Portugal le resultaba fácil negar los hechos. Portugal se había quejado de que el Senegal no había aplicado las disposiciones de la Carta en las que se pide el arreglo pacífico de las controversias entre Estados Miembros. Aun dejando de lado el hecho de que el Senegal así lo había intentado en 1961 cuando se cometieron contra su territorio tres actos de agresión de esa clase, resultaba una burla de la Carta y del sentido común el que un país que había cometido reiteradas agresiones y que constantemente violaba las disposiciones de la Carta abogara ahora por el arreglo pacífico de la controversia. La agresión de

Portugal contra el Senegal no era un acto aislado, sino que formaba parte de la política que seguía en cooperación con otras Potencias coloniales a fin de restaurar su decadente posición en África. Así, las autoridades portuguesas de Angola y la empresa británica Benguela Railway habían cooperado en la organización del envío de suministros de armas y equipo a Tshombé. Portugal no podría reprimir el movimiento de liberación nacional de los pueblos de las colonias portuguesas sin el apoyo y la asistencia de otros miembros de la OTAN. Era evidente que esa política constituía una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En su resolución 1807 (XVII), aprobada el 14 de diciembre de 1962, la Asamblea General ya había tomado nota con viva inquietud de que la política y los actos de Portugal con respecto a los territorios bajo su administración habían creado una amenaza muy grave para la paz y la seguridad mundiales. El Comité de los veinticuatro había señalado a la atención del Consejo de Seguridad la situación que se había producido a consecuencia de los actos de Portugal y había pedido al Consejo que adoptara las medidas apropiadas, incluidas las sanciones, contra Portugal. Con este nuevo acto, Portugal había demostrado de modo concluyente que seguía violando obstinada y sistemáticamente los principios de la Carta, motivo por el cual era absolutamente indispensable que el Consejo actuara inmediata y decisivamente.

En la 1030a. sesión del Consejo, celebrada el 19 de abril, el representante de Portugal declaró que, por el tono y el contenido de las declaraciones de los representantes del Senegal y de los que le habían apoyado, se infería claramente que la denuncia del Senegal constituía parte de una conspiración cuidadosamente tramada para preparar el terreno al Consejo para que éste examinara sin justificación alguna cuestiones que eran de la exclusiva jurisdicción interna de un Estado soberano. Los incidentes denunciados por Senegal eran de poca trascendencia y todas las acusaciones subsiguientes de "represión", "barbaridades" y "atrocidades" carecían de fundamento. El Senegal había utilizado sin distinción alguna las expresiones "granadas, granadas de mano, bombas y cohetes". Era evidente que se estaba tratando de sembrar la confusión y encubrir las discrepancias en cuanto a la fecha del incidente y a los hechos del supuesto daño. Aun los documentos (S/5287) presentados posteriormente por la delegación del Senegal y distribuidos a su solicitud no demostraban que los proyectiles o cohetes de que hablaba hubiesen sido disparados desde aviones portugueses el citado día, ya fuera el 8 o el 9 de abril. Además, tampoco había prueba alguna de que hubieran sido disparados contra la aldea de Bougniack. Las declaraciones del representante del Gobierno del Senegal para demostrar su caso parecían haber sido hechas por personas de la Guinea Portuguesa que se habían trasladado al Senegal para escapar de las pesquisas de las autoridades portuguesas. Además, no existía indicio alguno en cuanto a la fecha en que se habían hecho esas declaraciones o la forma en que se había establecido su autenticidad.

El representante de Portugal agregó que la referencia a la supuesta tirantez en las fronteras entre el Senegal y la Guinea Portuguesa sólo tenía por objeto reforzar la denuncia original del Senegal. En realidad, no existía la menor tirantez en la frontera, salvo en aquellas ocasiones en que penetraban agitadores en la Guinea Portuguesa bajo el pretexto de que eran nacionalistas, cuando en realidad eran agentes provocadores.

Asimismo era falsa la acusación de que Portugal mantenía en territorio del Senegal una "red de espionaje" que actuaba contra ese país.

Senegal había puesto gran empeño en asegurar que no tenía designios expansionistas con respecto a la Guinea Portuguesa. Sin embargo, en septiembre de 1961, cuando el Senegal rompió relaciones diplomáticas con Portugal, una de las razones aducidas había sido que Portugal se había negado a ceder su provincia de Guinea. Con ese propósito, el Senegal había recurrido a métodos sutiles de presión contra Portugal. Las estaciones de radio transmitían programas subversivos de propaganda antiportuguesa. Se habían proporcionado medios a los grupos de terroristas en el Senegal para sus incursiones agresivas en territorio portugués. Sobre territorio de la Guinea Portuguesa habían volado aviones que, se suponía, procedían del Senegal. Portugal había reiterado su deseo de discutir con el Senegal asuntos de interés común y cooperar con este país para llegar a una solución aceptable. Sin embargo, en vista de las versiones contradictorias sobre el supuesto ataque contra Bougniack, Portugal sugería que se estableciera una pequeña comisión para investigar sobre el terreno el incidente que había provocado la denuncia del Senegal. La Comisión se compondría de técnicos competentes que serían nombrados en número igual por cada una de las partes y estaría presidida por un neutral aceptable para ambas partes. Portugal presentaba esa propuesta con espíritu de buena fe e impulsado por un auténtico deseo de conciliación.

El representante del Gabón declaró que su delegación había solicitado participar en el debate porque le unían al Senegal acuerdos bilaterales de defensa y, a su juicio, si se producía un conflicto entre el Senegal y otro Estado, Gabón se interesaba justificadamente en la cuestión. El presente conflicto no se limitaba a esas dos partes, sino que también interesaba a los aliados del Senegal y a los Estados africanos en general. Estaba autorizado por los Estados que constituían la Unión Africana y Malgache a apoyar incondicionalmente a la República del Senegal. Los reiterados actos de terrorismo perpetrados por los elementos motorizados del ejército portugués y la violación del espacio aéreo senegalés habían ofrecido pruebas innegables de que el ejército portugués estaba dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para mantener su presencia en el continente africano. Sin embargo, las Naciones Unidas no podían permanecer indiferentes ante tal situación y permitir que Portugal siguiera negando el derecho de libre determinación al pueblo de la Guinea Portuguesa o a efectuar sus incursiones contra países vecinos.

El representante del Congo (Brazzaville) dijo que le parecía irónico que Portugal, cuyo historial poco envidiable de desconocimiento de resoluciones de la Asamblea General y de negativas de cooperar con todas las comisiones establecidas para resolver los problemas de la descolonización y que había cometido reiterados actos de agresión contra Estados africanos, pidiera ahora que se celebraran conversaciones bilaterales cuando anteriormente habían fracasado todas las conversaciones de ese tipo. Asimismo, Portugal había tratado de restar importancia a la denuncia del Senegal. No obstante, independientemente de la confusión que se hubiera producido a consecuencia de un error en cuanto a la fecha del suceso o la forma de expresión, lo cierto era que se había producido la agresión y que no era la primera vez que Portugal era culpable de un acto de esa índole. Además, el Congo (Brazzaville) en sus fronteras con Cabinda

también había sufrido incidentes análogos a los del Senegal. Tales incidentes reflejaban la trágica situación que Portugal había creado en distintas partes de África por su obstinada política de no reconocer las aspiraciones legítimas del pueblo que, para su desgracia, estaba bajo su administración. Como los pueblos de África, y, en particular los pueblos bajo administración portuguesa, habían rechazado la llamada sociedad multirracial de Portugal, no le quedaba a este país más remedio que seguir una política sumamente represiva en esos territorios. Si el Consejo de Seguridad no adoptaba medidas decisivas para impedir que Portugal siguiera esa política de represión, se vería obligado a entender en casos mucho más graves de agresiones de Portugal contra naciones africanas unidas.

En la 1031a. sesión del Consejo, celebrada el 22 de abril, el representante del Senegal declaró que su delegación había demostrado claramente que los incidentes que habían resultado de la acción de Portugal afectaban a las raíces mismas de la independencia de los Estados africanos. Si Portugal podía lanzar bombas sobre el Senegal, también podría bombardear impunemente cualquier otro Estado africano. Se amenazaba con ello la existencia misma de la independencia. El representante de Portugal no había aducido argumento alguno como no fuera la negación de todo. Portugal había acusado al Senegal de desencadenar una campaña radiofónica y de propaganda contra Portugal. En primer lugar, los programas de Radio Senegal no tenían más finalidad que informar al pueblo senegalés del comportamiento de Portugal en África. Además, al igual que los otros Estados africanos, el Senegal estaba dispuesto a mantener el derecho de la libre determinación de los pueblos y seguiría proclamando su adhesión a la libertad, justicia y dignidad humana para todos los pueblos del mundo. Todos los Estados que no podían aceptar la política retrógrada de Portugal habían definido y enunciado oficialmente su posición jurídica y los medios que consideraban adecuados para acelerar la liberación de los pueblos oprimidos de las colonias portuguesas. La oferta de Portugal de establecer una comisión de encuesta no era más que una táctica dilatoria cuya única finalidad era impedir que el Consejo de Seguridad adoptara una decisión justa y eficiente.

En la 1032a. sesión del Consejo, celebrada el 23 de abril, el representante de Marruecos declaró que el Senegal había demostrado claramente su deseo de basar sus relaciones con Portugal en el respeto mutuo y en el derecho internacional, pero los incidentes que habían venido produciéndose desde diciembre de 1961 y los esfuerzos frustrados del Senegal por resolver amigablemente esos incidentes, habían definido claramente cuál era la parte que constantemente faltaba a las obligaciones mutuas. Portugal había tratado de restar importancia a los incidentes y había llegado a sugerir que el Senegal debería haber recurrido al Artículo 33 de la Carta antes de presentar su denuncia ante el Consejo de Seguridad. Como ya lo había señalado el propio Senegal, un país que no sólo venía desconociendo obstinadamente las resoluciones de las Naciones Unidas, sino que también prestaba poca atención a los principios fundamentales de la Carta, había demostrado claramente que toda discusión bilateral era inútil. Por ese motivo, Marruecos había apoyado plenamente al Senegal al plantear la cuestión actual ante el Consejo. Además, el incidente denunciado por el Senegal no era un incidente aislado. Era un acto característico de agresión perpetrado por el imperialismo portugués con-

tra la soberanía e integridad territorial del Senegal, ya que, de hecho, la presencia de Portugal en Guinea revestía un carácter que exponía forzosamente al Senegal al riesgo de nuevas violaciones que inevitablemente habrían de cometer las fuerzas armadas de Portugal. Portugal había acusado tácitamente al Senegal de dar asilo a los nacionalistas de Guinea y calificado este acto del Senegal de acto de beligerancia. De ser así, Portugal se encontraría en estado de guerra con todos los países de África y con otros muchos que desearían apoyar y dar asilo a los nacionalistas de Angola, Guinea y Mozambique. Sin embargo, dejando a un lado por el momento las consecuencias remotas del incidente de Bougniack y limitándose al acto de agresión en una localidad precisa, la delegación de Marruecos no podía menos de considerarlo en verdad como una violación, cometida por Portugal, de la integridad territorial del Senegal. Por consiguiente, el Consejo debía adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esa situación. Por ese motivo, su delegación, junto con la de Ghana, presentaba el siguiente proyecto de resolución (S/5292):

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Deplorando los incidentes que han ocurrido cerca de la frontera entre el Senegal y la Guinea Portuguesa,*

*"Observando con inquietud que el estado de las relaciones en esa región entre las dos partes interesadas puede ser causa de tirantez en ocasión de cualquier incidente, y expresando la esperanza de que dicha tirantez sea eliminada en conformidad con las disposiciones de la Carta,*

*"Tomando nota de la declarada intención del Gobierno de Portugal de respetar escrupulosamente la soberanía y la integridad territorial del Senegal,*

*"1. Deplora toda incursión en el territorio del Senegal por fuerzas militares portuguesas, así como el incidente ocurrido en Bougniack el 8 de abril;*

*"2. Pide al Gobierno de Portugal que, conforme a sus declaradas intenciones, adopte todas las medidas que puedan ser necesarias para evitar cualquier violación de la soberanía e integridad territorial del Senegal;*

*"3. Pide al Secretario General que siga de cerca el desarrollo de la situación."*

El representante de Marruecos añadió que su delegación reconocía que el proyecto de resolución antes transcrito (S/5292) distaba de expresar adecuadamente los sentimientos de los Estados africanos respecto del comportamiento de Portugal en África. Al presentarlo, los autores habían querido lograr un espíritu de cooperación, así como la unanimidad, entre los miembros del Consejo con respecto a un principio fundamental de la Carta. Cualquier discrepancia de opiniones sobre dicha cuestión no sólo menoscabaría la autoridad del Consejo sino que tendría graves repercusiones en toda África.

El representante de Ghana manifestó que su delegación también se percataba de que el proyecto de resolución (S/5292) que copatrocinaba no correspondía a la gravedad de la denuncia formulada por el Senegal. Existía un grave estado de tirantez en las fronteras del Senegal debido a los actos de Portugal. Portugal no había negado el incidente, pero había tratado de restarle importancia. Cabía destacar el tercer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, en el cual se pedía al Secretario General que siguiese de cerca el desarrollo de la situación.



El representante de Francia declaró que su delegación no había considerado a la ligera la preocupación expresada por el Senegal, con el cual Francia tenía vínculos muy estrechos. No obstante, esa estrecha simpatía no impedía a su delegación examinar la situación objetivamente. Conforme a la información recibida por ella de diversas fuentes, la delegación de Francia estaba segura de que el 8 de abril había ocurrido un incidente en el curso del cual la aldea de Bougniack había sido blanco de balas y por lo menos de un cohete, disparados por aviones procedentes de la Guinea Portuguesa. En realidad, no existía ninguna contradicción entre los hechos comunicados por el Senegal y la información procedente de fuentes portuguesas. Con todo, el lamentable incidente no era de tal gravedad que pudiese poner en peligro la paz internacional. En cuestiones de ese género Francia consideraba que debían utilizarse de la manera más amplia posible los procedimientos mencionados en el Artículo 33 de la Carta. En consecuencia, su delegación no habría considerado inapropiada la propuesta de Portugal de que se enviase una comisión investigadora, de haberse obtenido el consentimiento del Senegal. Como las relaciones entre los dos Gobiernos interesados no daban viabilidad a dicha solución, la delegación de Francia podría apoyar el proyecto conjunto de resolución (S/5292) que el Consejo tenía ante sí.

En la 1033a. sesión del Consejo, celebrada el 24 de abril, el representante de Venezuela manifestó que los hechos mencionados en la denuncia del Senegal, considerados aisladamente, no revestían mayor gravedad, pero que debido a su repetición y por estar enmarcados dentro de un ambiente de tirantez como consecuencia de la política colonial de Portugal, dichos incidentes tenían una significación más importante. No se podía pasar por alto ningún incidente que constituyese una violación del territorio o del espacio aéreo de un país. Debido a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre las partes y a la tirantez creada entre ellas por razón de los movimientos nacionalistas de la Guinea Portuguesa, que contaban con la simpatía del Senegal y de otros Estados africanos, no se había podido resolver el incidente mediante conversaciones bilaterales. En consecuencia, incumbía al Consejo establecer la verdad de los hechos y tomar una determinación al respecto. De las declaraciones hechas ante el Consejo y de informaciones provenientes de otras fuentes, quedaba establecido que el 8 de abril Portugal había efectuado en la frontera maniobras durante las cuales se hicieron lanzamientos de proyectiles tanto en Guinea Portuguesa como en el Senegal. Seguramente los daños habían sido causados involuntariamente, pero dada la tirantez existente entre los dos países tales equivocaciones podían dar origen a un conflicto muy grave. Por lo tanto, sería apropiado que el Consejo de Seguridad deplorase los hechos ocurridos y pidiese a Portugal que en lo sucesivo tomase todas las precauciones del caso a fin de evitar la repetición de hechos similares.

El representante de los Estados Unidos declaró que como no era probable que se pudiera obviar por entonces la causa subyacente de la tirantez entre Portugal y los Estados contiguos a la Guinea Portuguesa, a saber la cuestión de la libre determinación, lo mejor sería ayudar a reducir la tirantez existente. Se había pedido al Consejo primordialmente que se ocupara de un incidente concreto. Dicho incidente había ocurrido con el antecedente de que ya se habían planteado problemas similares en 1961. De todos modos, los incidentes eran de menor importancia, y en anteriores ocasiones

Portugal había reconocido que habían ocurrido violaciones involuntarias, y luego de expresar su pesar había reiterado su política de respetar la soberanía del Senegal y se había declarado dispuesto a tomar medidas para evitar nuevas dificultades. En consecuencia, los Estados Unidos no estimaban que hubiese pruebas de que las incursiones en el territorio del Senegal obedecieran a un plan predeterminado.

Si bien era cierto que conforme al Artículo 35 de la Carta todo Estado Miembro podía señalar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier controversia o cualquier situación de naturaleza similar a la presentada por el Senegal, la delegación de los Estados Unidos consideraba que en condiciones análogas a las del caso de que se trataba debía recurrirse en primer término a las disposiciones del Artículo 33. Caba esperar, por lo tanto, que en caso de que se repitieran incidentes leves de esa naturaleza, las partes interesadas recurrirían a las medidas prescritas en la Carta.

El representante de los Estados Unidos manifestó luego que la relación geográfica entre las dos aldeas del mismo nombre a ambos lados de la frontera y la configuración del toscamente demarcado límite en dicha zona eran factores conducentes a un alto grado de peligro de violación accidental en el curso de operaciones aéreas. No obstante, sobre la base de los informes de testigos, y de otros elementos de prueba, cabía llegar a la conclusión de que en realidad había ocurrido un incidente de la naturaleza descrita en la denuncia del Senegal. Aun así, la declaración hecha por el representante de Portugal ante el Consejo ponía en claro que no había existido el propósito de efectuar ninguna incursión y había reafirmado la política del Gobierno de Portugal de respetar escrupulosamente la soberanía y la integridad territorial del Senegal. Las sugerencias de que se efectuara una investigación imparcial, aunque planteaban dificultades de procedimiento, habían demostrado moderación y buena fe. El Senegal también había expresado su deseo de utilizar métodos pacíficos y el procedimiento previsto en la Carta a fin de obtener garantías contra la violación de su territorio. A juicio de los Estados Unidos esa era una actitud apropiada y constructiva. Por tal razón, los Estados Unidos apoyarían el proyecto conjunto de resolución (S/5292), que colocaba el referido incidente en una perspectiva aceptable, incluido el reconocimiento de la política declarada de Portugal y, al mismo tiempo, satisfacía adecuadamente la denuncia presentada al Consejo por el Senegal.

El representante del Reino Unido manifestó que el Consejo examinaba una denuncia relativa a un incidente que en sí mismo era de menor importancia, pero que podía llevar a hechos mayores. La magnitud de un acontecimiento no constituía el único factor que se debía tener en cuenta para evaluar su importancia. De igual modo, sería equivocado desconocer las disposiciones del Artículo 33 de la Carta, que subrayaban la importancia de las negociaciones directas. La delegación del Reino Unido lamentaba que las partes no hubieran podido reunirse para establecer los hechos y discutir los medios de evitar que se plantearan problemas similares en lo porvenir. Como el Consejo estaba examinando el caso, debía en primer término establecer los hechos y formarse una opinión al respecto y, en segundo lugar, determinar lo que podía hacerse para remediar la situación y disminuir la tirantez en la región. Aunque no eran completos los elementos de prueba presentados al Consejo y no era posible tener absoluta seguridad acerca de todo lo que había pasado, el Gobierno de

Su Majestad se inclinaba a aceptar que había ocurrido un incidente de menor importancia el 8 de abril en la aldea de Bougniack en territorio del Senegal. De ahí que la delegación del Reino Unido pudiera aceptar el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto conjunto de resolución (S/5292). Ciertamente, no había nada que demostrara que el incidente de Bougniack había sido un acto de agresión deliberada. La delegación del Reino Unido se inclinaba a creer que lo ocurrido había sido muy probablemente el resultado de un auténtico error o de un cálculo equivocado.

En cuanto a lo que podría recomendar el Consejo para aliviar la situación, a juicio de la delegación del Reino Unido el punto esencial en cualquier problema relativo a una frontera mal delimitada debía ser evitar escrupulosamente cualquier extralimitación, incursión o acción que pudiera provocar un incidente fronterizo. En consecuencia, acogía con agrado las seguridades dadas por Portugal de que respetaría la soberanía y la integridad territorial del Senegal y de que las fuerzas portuguesas habían recibido órdenes estrictas en ese sentido. La delegación del Reino Unido esperaba que Portugal, como se sugería en el proyecto de resolución, adoptase todas las medidas posibles para evitar cualquier incidente en sus fronteras y estaba segura de que podía confiarse en que el Senegal hiciera lo mismo. Si en lo futuro se afirmara que habían ocurrido incidentes de menor importancia, los dos Gobiernos podrían celebrar consultas con miras a adoptar medidas preventivas. Esa era al parecer la idea que había inspirado el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. El ofrecimiento de Portugal de participar en una comisión mixta de investigación demostraba que ese país estaba dispuesto a proponer métodos de cooperación para resolver la controversia. La delegación del Reino Unido lamentaba que el ofrecimiento hubiera sido inaceptable para el Senegal. No obstante, considerada la propuesta desde el punto de vista práctico, seguía siendo evidente que una comisión de esa índole no podía sino ser provechosa con el consentimiento de las dos partes. Además, era quizás dudoso que algún tiempo después de ocurrido el hecho una comisión pudiera agregar algo nuevo a lo que ya era de conocimiento del Consejo. La delegación del Reino Unido estimaba que el proyecto conjunto de resolución presentado por Marruecos y Ghana era apropiado a las circunstancias y le daría su apoyo.

El representante de Noruega declaró que al presentar su caso el Senegal había expresado claramente que no sólo le preocupaban el incidente del 8 de abril y los anteriores incidentes de diciembre de 1961, sino la tirantez general que existía en la zona fronteriza. Se abrigaba el temor de que si no se reducía la tirantez pudiera agravarse la situación en la frontera. El Senegal había señalado que no poseía los armamentos ni el equipo necesarios para patrullar la frontera y evitar violaciones. La delegación de Noruega simpatizaba con la posición del Senegal y la comprendía, al mismo tiempo que confiaba en que la acción del Consejo de Seguridad pudiera aliviar la tirantez y disipar los temores expresados por el Senegal. A este respecto, también acogía con satisfacción las seguridades dadas por Portugal de que las fuerzas armadas portuguesas habían recibido las órdenes más estrictas de respetar escrupulosamente la soberanía, la integridad y el espacio aéreo del Senegal. A pesar de los puntos de vista opuestos que se habían presentado al Consejo —lo cual era cosa frecuente en casos de disputas fronterizas— la delegación de Noruega consideraba claramente demostrado que existía un estado de tirantez a lo largo de la frontera

entre el Senegal y la Guinea Portuguesa y que había ocurrido una incursión portuguesa en la aldea senegalesa de Bougniack el 8 de abril. En esas circunstancias, sería mejor que el Consejo concentrara su atención en el aspecto preventivo de la cuestión y adoptara medidas capaces de disipar las naturales aprehensiones del Senegal. Dado que el proyecto de resolución presentado por Ghana y Marruecos estaba inspirado en dichos objetivos, la delegación de Noruega lo acogía complacida y estimaba que una resolución del Consejo de Seguridad así orientada haría mucho por evitar nuevos incidentes fronterizos, y que la solicitud dirigida al Secretario General de que siguiera de cerca el desarrollo de la situación tendría un efecto especialmente beneficioso.

El representante de Filipinas manifestó que si bien la denuncia del Senegal entrañaba asimismo la cuestión de las relaciones entre los Estados africanos y Portugal, el Consejo se ocupaba en esos momentos de la controversia provocada por el incidente concreto del 8 de abril. Ese incidente demostraba que se había violado el espacio aéreo del territorio de un Estado Miembro y el Consejo debía deplorarlo. Aunque la ocasión no era la de examinar el problema de los territorios portugueses de Africa, la delegación de Filipinas tomaba en cuenta el más ancho margen de problemas que planteaba la denuncia del Senegal. En consecuencia, apoyaba en particular la inclusión en el proyecto conjunto de resolución (S/5292) del párrafo 3 de la parte dispositiva, en el cual se solicitaba del Secretario General que siguiese de cerca el desarrollo de la situación. La delegación de Filipinas confiaba asimismo en que la decisión del Consejo evitaría que se repitieran los incidentes entre los dos países y ayudaría a eliminar la tirantez entre ellos.

El representante del Brasil expresó que como el Consejo se hallaba ante dos versiones diametralmente opuestas del incidente que examinaba, no estaba en condiciones de adoptar una decisión sobre el fondo de la denuncia. Para poder hacerlo, sería necesario realizar una investigación imparcial del caso y examinar luego la cuestión a la luz de los resultados obtenidos. No obstante, sería perfectamente apropiado que el Consejo recomendará a las partes que recurrieran a otros medios de arreglo pacífico, como los expuestos en el Artículo 33 de la Carta. También en el caso que se estudiaba, el Consejo debía actuar de conformidad con el Capítulo VI de la Carta. En consecuencia, la delegación del Brasil apoyaría el proyecto conjunto de resolución, que trataba de limitarse al problema planteado y estaba inspirado en el Capítulo VI de la Carta. No obstante, el Brasil tenía una reserva que hacer con respecto al párrafo 1 de la parte dispositiva, el cual estaba redactado de tal suerte que podría interpretarse como si fuera una decisión del Consejo sobre los aspectos fundamentales de la cuestión. En consecuencia, la delegación del Brasil pediría que se sometiera a votación por separado dicho párrafo para poder abstenerse al respecto. Con dicha reserva, apoyaba el proyecto conjunto de resolución.

El Presidente, hablando en su calidad de representante de la China, dijo que las declaraciones de las partes interesadas, a pesar de ser contradictorias, habían sido hechas de buena fe. Portugal había admitido por una parte que se habían efectuado maniobras en pequeña escala el 8 de abril, pero había negado por otra que se hubiese volado sobre territorio del Senegal. No obstante, como lo había señalado el representante de

Francia, Portugal probablemente no había podido verificar el impacto accidental de balas y otros proyectiles sobre territorio del Senegal. Así, pues, cada una de las partes estaba diciendo la verdad tal como podía verla. En circunstancias normales un incidente de esa índole podría haber sido resuelto mediante negociaciones directas, pero en el caso de que se trataba había resultado difícil efectuar conversaciones directas debido a las relaciones tirantes entre las partes. Era satisfactorio, sin embargo, advertir que no había ocurrido ningún nuevo incidente a partir del 8 de abril. El hecho de que la situación no hubiera empeorado mostraba que el Senegal no abrigaba el propósito de agravarla. De igual modo, era satisfactorio que Portugal hubiese dado seguridades de que respetaba cabalmente la soberanía y la integridad territorial del Senegal. Como el proyecto de resolución que examinaba el Consejo trataba de atenuar inmediatamente la tirantez existente, la delegación de la China votaría en su favor.

Refiriéndose al proyecto conjunto de resolución (S/5292), el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas manifestó que el proyecto, como lo habían señalado los propios autores, era sumamente débil. Su defecto principal residía en que no reflejaba todo el fondo de la situación creada por los muchos actos de agresión de Portugal contra el Senegal. No contenía una reprobación directa de dichos actos, a pesar de que el Senegal había suministrado pruebas convincentes al respecto. No obstante, la delegación de la URSS conocía el deseo de los Estados africanos miembros del Consejo, deseo que compartía y respetaba, de llegar a una solución generalmente aceptable de la cuestión.

A pesar de sus insuficiencias, el proyecto de resolución expresaba clara e inequívocamente una evaluación negativa, por el Consejo de Seguridad, de los actos hostiles de Portugal contra el Senegal. El Consejo tenía la obligación de no pasar por alto los llamamientos del Senegal y otros Estados africanos para que se lograra una solución del problema creado por los actos de Portugal.

En una nueva declaración, el representante de Portugal reafirmó la posición de su Gobierno respecto de que los resultados de las investigaciones por él realizadas en diferentes fases le habían impedido aceptar ninguna responsabilidad por ningún supuesto incidente que se sostuviera haber ocurrido en la aldea de Bougniack. No se habían efectuado vuelos sobre el territorio del Senegal, ni se había bombardeado ninguna aldea o poblado del Senegal. Se había afirmado que existía contradicción entre la versión de los hechos comunicada desde Lisboa y la versión dada en Bissau. Eso no era exacto. El Senegal había denunciado al Consejo de Seguridad que había ocurrido un incidente en la aldea de Bougniack el 9 de abril. El Gobierno de Portugal emitió un comunicado en Lisboa negando dicho incidente, sobre la base de su propia investigación. Luego las autoridades portuguesas de Bissau, negando asimismo las afirmaciones del Senegal, habían dado volun-

tariamente la información de que se habían efectuado ejercicios militares el 8 de abril y de que en el curso de dichos ejercicios habían resultado heridos dos soldados del ejército portugués. La delegación de Portugal no consideraba que hubiera ninguna contradicción en ello, pues las dos declaraciones se referían a dos fechas diferentes. En una hábil maniobra, la delegación del Senegal había modificado la fecha del supuesto incidente, pasando del 9 al 8 de abril — y ello sólo siete días más tarde — y, basándose en la declaración de las autoridades de Bissau, había afirmado que su denuncia quedaba demostrada. De todos modos, animado de buena fe y del deseo de obtener una conciliación de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 de la Carta, Portugal había sugerido el envío de una comisión investigadora. Era lamentable que la actitud poco conciliadora del Senegal hubiera hecho imposible la creación de dicha comisión. En vez de ello, se había redactado una resolución que prejuzgaba la cuestión principal sin realizar siquiera un esfuerzo por apreciar el lado portugués de la cuestión. A pesar de que la delegación de Portugal lamentaba todo eso, en justicia no podía negar que los términos del proyecto de resolución reflejaban la política reiterada de su Gobierno, basada en el respeto por la soberanía del Senegal y en su deseo de lograr una estrecha cooperación.

Antes de someterse a votación el proyecto conjunto de resolución (S/5292), el representante de Marruecos, en su calidad de copatrocinador, hizo un llamamiento al representante del Brasil para que no insistiera en la solicitud de su delegación de que se sometiera a votación por separado el párrafo 1 de la parte dispositiva, de modo que el Consejo pudiera adoptar el proyecto de resolución por unanimidad. El representante del Brasil manifestó que en vista de dicho llamamiento su delegación no insistiría en su solicitud, pero observó que si se hubiera efectuado una votación separada, la delegación del Brasil se habría abstenido con respecto a dicho párrafo.

**Decisión:** En la 1033a. sesión, celebrada el 24 de abril de 1963, quedó aprobado por unanimidad el proyecto conjunto de resolución presentado por Ghana y Marruecos (A/5292).

Después de la votación, el representante del Senegal expresó la satisfacción de su delegación por la unanimidad en la decisión del Consejo, aunque su Gobierno hubiera preferido una reprobación formal de la agresión de Portugal y una decisión más concreta por parte del Consejo para hacer frente a dicha agresión. Sin embargo, el Consejo había deplorado claramente la violación del territorio del Senegal por Portugal y, en particular, el incidente ocurrido el 8 de abril de 1963. Además el Consejo había dirigido una reprobación implícita a Portugal, al pedir a este país que se abstuviera de tomar medidas similares. El Senegal atribuía una especial importancia a la solicitud formulada al Secretario General de que siguiera de cerca el desarrollo de la situación.

**TELEGRAMA DE FECHA 5 DE MAYO DE 1963 DIRIGIDO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE HAITI****A. Comunicaciones al Consejo**

En carta de fecha 28 de abril de 1963 (S/5301), el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó al Consejo de Seguridad de que el Consejo de la OEA había resuelto, en respuesta a la solicitud del Gobierno de Costa Rica, convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para estudiar la situación que había surgido entre la República Dominicana y Haití, y para constituirse y actuar provisionalmente como Organo de Consulta, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

En carta de fecha 3 de mayo (S/5307), el Secretario General de la OEA informó además al Consejo de Seguridad de que el Consejo de la OEA había designado una Comisión de cinco miembros para que estudiara sobre el terreno los hechos denunciados por la República Dominicana, y que había solicitado a los Gobiernos de la República Dominicana y Haití que se abstuvieran de realizar cualquier acto susceptible de quebrantar la paz internacional.

En telegrama de fecha 5 de mayo (S/5302), el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití pidió que se reuniera el Consejo de Seguridad para examinar urgentemente la grave situación existente entre Haití y la República Dominicana. Haití sostenía que la situación había sido causada por las reiteradas amenazas de agresión y los actos de injerencia por parte de la República Dominicana, que atentaban contra la soberanía y la integridad territoriales de Haití y ponían en peligro la seguridad y la paz internacionales.

En carta de fecha 6 de mayo (S/5304), el Presidente del Consejo de la OEA informó al Presidente del Consejo de Seguridad de que el Consejo de la OEA continuaba conociendo en el conflicto existente entre la República Dominicana y Haití, y que había hecho un llamamiento a ambos Gobiernos para que cooperasen a fin de llegar a un arreglo pacífico.

En nota verbal de fecha 6 de mayo (S/5306), la Misión Permanente de la República Dominicana transmitió al Secretario General de las Naciones Unidas los textos de una nota que el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana había enviado al Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, y de un mensaje enviado por el Presidente de la República Dominicana a la Organización de los Estados Americanos. En estas comunicaciones, la República Dominicana declaraba que no podía acceder a la solicitud del Gobierno haitiano de retiro de la misión diplomática dominicana, hasta que hubiese recibido de ese Gobierno el salvoconducto solicitado para los ciudadanos haitianos que se habían refugiado en la Embajada dominicana en Puerto Príncipe, o garantías de que se les permitiría permanecer bajo la protección de alguna misión diplomática amiga.

En telegrama de fecha 7 de mayo (S/5309), el Presidente del Consejo de la OEA comunicó al Consejo de Seguridad la respuesta del Presidente de la República Dominicana a su llamamiento del 6 de mayo.

El Presidente había declarado que su Gobierno recurriría al uso de la fuerza solamente en caso de que persistiesen los actos de agresión de que había sido objeto la Embajada dominicana en Haití.

**B. Examen de la cuestión en las 1035a. a 1036a. sesiones (8 y 9 de mayo de 1963)**

El Consejo de Seguridad incluyó el tema en su orden del día en la 1035a. sesión, celebrada el 8 de mayo. Se invitó a los representantes de Haití y de la República Dominicana a que participasen en el debate.

El representante de Haití declaró que el Gobierno de la República Dominicana había amenazado a Haití con una invasión y había enviado un ultimátum de 24 horas con el pretexto de supuestas violaciones de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe por las fuerzas de seguridad haitianas. Estos actos hostiles de la República Dominicana tenían por objeto destruir las instituciones haitianas y abatir la inflexible determinación del pueblo haitiano de defender su soberanía y su independencia. Sostuvo que el Gobierno de la República Dominicana había proseguido prestando ayuda a los asilados haitianos, y que les había consentido que iniciaran actividades hostiles contra el Gobierno de Haití, violando así los tratados vigentes entre los dos países y los principios que rigen la cuestión del asilo en el derecho interamericano. Además, la Embajada dominicana había dado asilo a varios oficiales militares haitianos, a los cuales se les había permitido conservar ametralladoras y otras armas. A uno de los oficiales, el Capitán François Benoit, que había buscado asilo el 23 de abril de 1963, le había resultado posible atentar contra la vida de los hijos del Presidente Duvalier, y volver luego, sano y salvo, a la Embajada. Finalmente, el representante de Haití reafirmó la fe de su Gobierno en el arreglo pacífico de las controversias como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, y expresó la esperanza de que el Consejo de Seguridad tomara las medidas necesarias para salvaguardar la paz en el Caribe.

El representante de la República Dominicana declaró que la tensión entre su país y Haití obedecía a la política del Presidente Duvalier, quien en su deseo de perpetuarse en el poder, había mantenido a su país en un estado de terror y caos. Los ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad haitianas contra la Embajada dominicana en Puerto Príncipe constituían innegables actos de provocación y eran la culminación de una serie de actos irresponsables por medio de los cuales el Gobierno haitiano intentaba ultrajar la dignidad y violar la soberanía de la República Dominicana. El despliegue de tropas dominicanas en la frontera dominico-haitiana no podía considerarse como un acto de agresión. Las tropas habían sido destacadas con fines de legítima defensa y para impedir que las fuerzas haitianas hicieran incursiones militares en territorio dominicano. La República Dominicana hizo observar que el conflicto entre los dos países estaba sometido a examen de la Organización de los Estados Americanos, la cual, como organización competente para entender en el asunto, ya había tomado medidas



para resolver el problema. Señaló también que el Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas permitía aplicar los principios establecidos en los Artículos 33 y 36 de la Carta en el sentido de que la solución de las controversias internacionales ha de hacerse, ante todo, merced a los medios pacíficos elegidos por las Partes, y que el Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las Partes hubiesen ya adoptado para la solución de la controversia. Por consiguiente, la República Dominicana confiaba en que el Consejo de Seguridad suspendería el examen de esta cuestión para dejarla al arbitrio de la OEA.

En la 1036a. sesión, celebrada el 9 de mayo, el Presidente del Consejo de Seguridad señaló a la atención de éste el texto de una resolución que había sido transmitida al Consejo por el Secretario General de la OEA (S/5312). Según la resolución, el Consejo de la OEA hacía un nuevo llamamiento a los dos Gobiernos para que continuasen prestando su valiosa cooperación y se abstuviesen de realizar acto alguno incompatible con las obligaciones emanadas de la Carta de la OEA, y autorizaba al Presidente del Consejo de la OEA para que ampliase, en caso necesario, el número de los miembros de la Comisión de estudio.

En la misma sesión el representante de Haití negó que hubiese habido violación alguna de la Embajada dominicana en Haití, y declaró que los centinelas haitianos custodiaban la Embajada a pedido del Jefe de la Misión Dominicana. El Gobierno de Haití ya había concedido salvoconducto y pasaportes a 15 asilados en la Embajada dominicana, y a los asilados en otras embajadas latinoamericanas. Los argumentos aducidos por el representante de la República Dominicana eran solamente pretextos para asestar un golpe mortal a Haití. Por lo tanto, Haití se encontraba dentro de su derecho al apelar al Consejo de Seguridad, de conformidad con los Artículos 34 y 35 de la Carta. Sin embargo, si el Consejo consideraba que, pese a la gravedad de la situación, debería esperar los resultados de la misión pacificadora de la OEA, Haití estaría de acuerdo, siempre que el Consejo de Seguridad permaneciese informado de la cuestión y reanudase el estudio de la misma en cualquier caso necesario.

El representante de la República Dominicana declaró que Haití había recurrido al Consejo de Seguridad solamente para distraer la atención de la situación interna de Haití. Opinó que la OEA debería continuar entendiendo en el asunto, y expresó la esperanza de que las medidas que ésta adoptara fueran eficaces para restablecer la armonía entre las dos naciones.

El representante de Venezuela observó que tanto Haití como la República Dominicana debían acatar el Artículo 20 de la Carta de Bogotá (OEA), que establece el arreglo pacífico de las controversias y está de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas. Según el Artículo 102 de la Carta de Bogotá y el párrafo 4 del Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, cualquier Estado Miembro de la OEA tiene derecho a llevar una controversia de carácter regional a la atención del Consejo de Seguridad, pero era lógico que el Consejo de Seguridad solamente tomase medidas cuando hubiesen fracasado los esfuerzos para un arreglo pacífico de la controversia en el plano regional. Cualquier otra interpretación privaría de sentido tanto al Artículo 20 de la Carta de Bogotá como al párrafo 2 del Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, en opinión de la delegación de Venezuela, lo que procedía en esas circunstancias era que el Consejo de Seguridad reconociese la acción de la OEA en el caso, y mantuviese el conocimiento del asunto en dicha Organización, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 52 de la Carta.

El representante del Brasil declaró que su delegación no tenía duda alguna de que el Consejo de Seguridad, según los Artículos 24, 34, 35, 52 (4) y 103 de la Carta de las Naciones Unidas, era competente para tratar de un asunto que estaba ya sometido al examen de la OEA. Además, el Artículo 20 de la Carta de Bogotá debía interpretarse según el Artículo 102 de la misma Carta, el cual declaraba que ninguna de las estipulaciones de dicha Carta se interpretaría en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados Miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. El Artículo 20 de la Carta de Bogotá no estipulaba que un Estado Miembro tuviese que esperar la acción de la organización regional, sino solamente que la controversia debía resolverse por uno de los procedimientos previstos en la carta de la OEA. Además, el Artículo 36 de la Carta de las Naciones Unidas autorizaba al Consejo de Seguridad a ocuparse en cualquier momento de cualquier controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 de la misma Carta. En opinión de su delegación, la Carta de las Naciones Unidas no privaba a un miembro de la OEA del derecho de solicitar al Consejo de Seguridad que considerase cualquier asunto de su competencia en cualquier momento. En realidad, un país miembro de la OEA y de las Naciones Unidas tenía el gran privilegio de utilizar dos organizaciones diferentes para facilitar el arreglo de las controversias. La tensión entre Haití y la República Dominicana tenía su origen en una controversia sobre el derecho de asilo, institución típicamente latinoamericana que había arraigado en el derecho internacional latinoamericano por causa de las especiales condiciones políticas y sociales reinantes en aquella región. Por dicha razón, y por haber tenido en cuenta los párrafos 2 del Artículo 36 y 3 del Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, su delegación consideraba que, en la situación presente, la cuestión podía arreglarse satisfactoriamente por el Consejo de la OEA, que, a petición de las dos partes interesadas, ya había tomado medidas para restaurar la paz y la armonía en aquella zona.

El representante de Ghana dijo que su delegación estaba completamente de acuerdo con las opiniones expresadas por el representante del Brasil con respecto a la competencia del Consejo de Seguridad. El párrafo 4 del Artículo 52 no dejaba dudas de que cualquier miembro de una organización regional que abrigase un motivo de queja legítimo tenía completo derecho a presentarse ante el Consejo.

La naturaleza explosiva de la tensión entre Haití y la República Dominicana había quedado de manifiesto por las declaraciones de los representantes de dichos países. A ese respecto, dijo que su Gobierno había sostenido siempre que la naturaleza política de un gobierno era una cuestión que tocaba decidir al pueblo del mismo país; el carácter del régimen actual de Haití no podía ser un tema de debate en el Consejo de Seguridad. Por parte de Haití había auténtico temor a una invasión desde la República Dominicana. En esas circunstancias era alentador observar que ambas partes estaban dispuestas a resolver sus diferencias por medios pacíficos y habían prometido su completo apoyo a la OEA. Sin embargo, la actuación de la organización



regional no debía menoscabar la responsabilidad fundamental del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad mundiales. Propuso que el Consejo: 1) hiciese un llamamiento formal a Haití y a la República Dominicana para que recurriesen a medios pacíficos a fin de zanjar sus diferencias; 2) exhortase a la OEA, de acuerdo con el Artículo 52 de la Carta, a continuar sus esfuerzos para la solución del problema; 3) conservase el tema en su programa; y 4) pidiese que se comunicasen los resultados de las negociaciones al Presidente del Consejo de Seguridad y al Secretario General.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que la tensa situación creada en la Hispaniola y el carácter de los sucesos que ocurrían en aquella zona eran un peligro para la paz y la seguridad y hacían necesario que el Consejo tratase del problema y tomase medidas concretas. El argumento de que la cuestión estaba sometida al estudio de la OEA y que, por consiguiente, el Consejo de Seguridad no necesitaba tratar del asunto, no podía resistir la crítica desde un punto de vista jurídico. La Carta de las Naciones Unidas y las responsabilidades de sus miembros tenían prioridad sobre la Carta y las responsabilidades de cualquier organización regional, y en particular, de la OEA. Los acuerdos regionales según la Carta de las Naciones Unidas eran lícitos y efectivos sólo en la medida en que fuesen compatibles con los principios y objetivos de la Organización. No podían y no debían ser un obstáculo para los derechos y obligaciones de la Organización. La experiencia del Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones Unidas también mostraba que en muchas ocasiones las Naciones Unidas habían examinado cuestiones surgidas entre países bajo jurisdicción de la OEA, sin tener en cuenta si la cuestión había sido examinada o no por la organización regional.

La cuestión sometida al Consejo no era de simpatía o antipatía hacia ningún régimen determinado, sino de relaciones entre Estados. El peligro de la situación en la Hispaniola residía no sólo en la actitud del Gobierno dominicano en relación con el régimen de Duvalier sino también en las acciones de los Estados Unidos que, como indicaban las informaciones de la prensa, estaban interviniendo abiertamente en la situación. La presencia de la Marina de los Estados Unidos en las costas de Haití, dijo, tenía por fin dictar a este país el rumbo que había de seguir su vida política. Los Estados Unidos intentaban practicar otra vez su diplomacia de fuerza en aquella zona.

La delegación soviética consideraba que el Consejo de Seguridad debía instar a la República Dominicana, Haití y los Estados Unidos a abstenerse de nuevas acciones que pudiesen aumentar la tensión en la zona; exigir el inmediato retiro de todas las fuerzas de tierra, mar y aire de las costas de la Hispaniola, y la cesación inmediata de toda intervención extranjera en los asuntos internos de Haití.

El representante de los Estados Unidos lamentó que el representante soviético hubiese traído la "guerra fría", con sus conocidas e infundadas acusaciones, al debate del Consejo.

Mientras que las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del Artículo 52 y del Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y del Artículo 20 de la Carta de Bogotá, no sustraían, naturalmente, las responsabilidades del Consejo de Seguridad según la Carta, si prescribían los procedimientos y prioridades para tratar

normalmente las controversias de carácter local. Los Estados Unidos, añadió, creían firmemente que el organismo adecuado para actuar en aquel caso concreto era la OEA, sobre todo porque dicha Organización había tomado medidas rápidas y eficaces para restaurar la paz en aquella zona. En ese sentido, observaba con satisfacción las respuestas de las partes a los llamamientos dirigidos por el Presidente del Consejo de la OEA.

El representante de Noruega declaró que su delegación se había guiado por el hecho de que la Carta de las Naciones Unidas alentaba el uso de organizaciones regionales para arreglar las controversias de carácter local. Además, el origen de la controversia afectaba al derecho de asilo. Los convenios y doctrinas sobre este tema eran únicos en su género, y se limitaban principalmente a la zona de la OEA. Por consiguiente, los medios que ofrecían las mejores perspectivas para llegar a un arreglo pacífico eran los procedimientos iniciados por la OEA. Expresó la esperanza de que la OEA tuviera éxito en sus esfuerzos y de que las partes interesadas observasen medida de palabra y acción para facilitar la labor de la OEA.

El representante de las Filipinas dijo que, en vista de la importante actividad diplomática emprendida por la OEA, y considerando las disposiciones de los Artículos 33, 52 y 54 de la Carta de las Naciones Unidas, que eran aplicables al caso debatido, su delegación creía que la OEA debía continuar buscando un arreglo pacífico de la controversia entre la República Dominicana y Haití, que era lo bastante grave para constituir una seria amenaza para la paz y la seguridad en el Caribe.

El representante de la China, expresando opiniones semejantes, dijo que sería prudente que el Consejo de Seguridad aguardase los resultados de la acción emprendida por la organización regional antes de tomar sus propias medidas. Incumbía al Consejo de Seguridad, dijo, alentar el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de organismos regionales, tal como se preveía en el Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas. Eso no menoscababa en modo alguno la posición de ninguna de las partes de la controversia ni impedía que el Consejo de Seguridad siguiese entendiendo en el asunto.

El representante de Marruecos apoyó la opinión de que el Consejo de Seguridad era plenamente competente para hacerse cargo del asunto. En realidad, de acuerdo con la tradición latinoamericana, era el Consejo quien, según el derecho internacional, tenía prioridad para tratar del asunto. Haití, como Miembro de las Naciones Unidas y de la OEA, había considerado esa doble calidad como un aumento y no como una restricción de sus derechos, y por consiguiente había llevado el asunto ante el Consejo de Seguridad. El representante de Haití, con espíritu de conciliación, había accedido ahora a que la cuestión continuase tratándose por la OEA, pero se había reservado el derecho de volver al Consejo si fuese necesario. El Consejo debía continuar ocupándose del asunto, aunque dejándolo de momento a la OEA.

El representante del Reino Unido acogió con satisfacción las medidas adoptadas por la OEA para un arreglo pacífico de la controversia, las cuales estaban de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y debían proseguir sin ningún impedimento. En vista de la disminución de las tensiones en la zona y de la cooperación prestada a la OEA por las partes interesadas, consideraba superfluo que el Consejo de Segu-

ridad interviniese en aquella prometedora fase de los acontecimientos.

El Presidente, hablando como representante de Francia, declaró que en el caso presente no podía cuestionarse válidamente la aplicabilidad del Artículo 52. Participó de la opinión de la mayoría de los miembros del Consejo de que, en la coyuntura presente, el Consejo de Seguridad debía procurar no estorbar la acción de la OEA.

Hablando como Presidente, hizo notar que la mayoría de los miembros creían preferible, de momento, dejar la iniciativa a la organización regional que estaba intentando lograr un arreglo amistoso. Las dos partes habían indicado que no veían ningún inconveniente a dicho procedimiento. El asunto continuaría en el orden del día del Consejo.

### **C. Comunicaciones recibidas después del 9 de mayo**

En un telegrama de fecha 14 de mayo de 1963 (S/5314), el Ministro de Relaciones Exteriores de

Haití informó al Presidente del Consejo de Seguridad que las tropas dominicanas estaban todavía destacadas en la frontera dominico-haitiana por orden del Presidente de la República Dominicana, y que representaban una amenaza continua de agresión y una violación flagrante de los principios en que se inspiraban los procedimientos de conciliación que ya había iniciado la OEA.

En una carta de fecha 17 de mayo (S/5315) dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el Representante Permanente de la República Dominicana negó que las tropas dominicanas abrigasen designios agresivos contra Haití, según se afirmaba en la comunicación de Haití del 14 de mayo. Agregaba la carta que el Gobierno dominicano deseaba llegar a un arreglo pacífico de la crisis y había demostrado su disposición a cooperar con la OEA una actitud que estaba en contraste con la renuencia del Gobierno haitiano a facilitar a dicho organismo los medios para la realización de su labor conciliadora.

## **Capítulo 4**

### **INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL AL CONSEJO DE SEGURIDAD ACERCA DE LOS ACONTECIMIENTOS RELATIVOS AL YEMEN**

#### **A. Informes del Secretario General**

El 29 de abril de 1963, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad (S/5298) de que desde el otoño de 1962 había venido celebrando consultas regularmente con los representantes de los Gobiernos de la República Árabe del Yemen, de Arabia Saudita y de la República Árabe Unida, sobre ciertos aspectos de la situación en el Yemen que tenían su origen fuera del país, con objeto de poner a disposición de las partes sus buenos oficios para prestarles la asistencia que pudieran desear a fin de evitar que se produjesen acontecimientos que pudiesen poner en peligro la paz en la región. Como resultado de una misión de investigación realizada en su nombre por el Sr. Bunche en la zona, después de haber obtenido el asentimiento de los gobiernos interesados, y de una misión independiente pero similar, cumplida por el Sr. Ellsworth Bunker de los Estados Unidos de América, recibió de cada uno de los tres Gobiernos interesados, en comunicaciones separadas, la confirmación oficial de que aceptaban condiciones similares para el cese de las hostilidades en el Yemen.

El Gobierno de Arabia Saudita pondría término a todo apoyo y ayuda a las fuerzas monárquicas del Yemen y prohibiría el empleo del territorio de Arabia Saudita, por parte de los dirigentes monárquicos, para continuar la lucha en el Yemen. Simultáneamente, la República Árabe Unida se comprometía a empezar a retirar del Yemen las tropas enviadas a petición del nuevo gobierno; la retirada se efectuaría en varias fases y tendría lugar lo antes posible. Se pondría fin a todas las acciones en territorio de Arabia Saudita por parte de fuerzas de la República Árabe Unida. Se establecería una zona desmilitarizada de 20 kilómetros a cada lado de la frontera entre el Yemen y Arabia Saudita, y en ella se estacionarían observadores imparciales para comprobar el cumplimiento de las condiciones del cese de las hostilidades. También vigilarían la suspensión

de las actividades en apoyo de los monárquicos desde el territorio de Arabia Saudita y la salida de las fuerzas y equipo enviados por la República Árabe Unida, desde los aeropuertos y puertos marítimos del Yemen. El General Von Horn visitaría los tres países interesados para celebrar consultas sobre el carácter y la actuación de los observadores de las Naciones Unidas en cumplimiento de las condiciones del cese de las hostilidades. Por lo que se refiere a la financiación de cualquier actividad de esa naturaleza por parte de las Naciones Unidas, el Secretario General manifestaba que tenía intención de proceder en conformidad con las disposiciones de la resolución 1862 (XVII) relativa a los gastos imprevistos y extraordinarios.

En un nuevo informe, presentado el 27 de mayo (S/5321), el Secretario General, basándose en la información proporcionada por el General Von Horn, llegaba a la conclusión de que la presencia de los observadores de las Naciones Unidas en la región era esencial y que debía enviárselos lo más pronto posible. El número requerido no pasaría de 200 personas y se calculaba que las funciones de observación no serían necesarias por más de cuatro meses. El 3 de junio, el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad (S/5323) el cálculo de los gastos que requeriría la misión. El 7 de junio, el Secretario General informó al Consejo (S/5325) de que Arabia Saudita había aceptado aportar "una contribución proporcional" a los costos de la operación, mientras que la República Árabe Unida se mostraba, en principio, dispuesta a proporcionar asistencia hasta un equivalente de 200.000 dólares durante un período de dos meses, con los que se cubriría aproximadamente la mitad del costo de la operación en dicho período. Ello no sería óbice, desde luego, para solicitar del Gobierno de la República Árabe Unida una mayor asistencia, al cabo de los dos meses, en caso de que fuese necesario prolongar la operación más allá de ese período. En consecuencia, el establecimiento y puesta

en marcha de la misión de observación en el Yemen, así como su mantenimiento durante un período inicial de dos meses, no entrañarían ninguna consecuencia financiera para las Naciones Unidas.

## **B. Examen de la cuestión en las sesiones 1037a. a 1039a. (10-11 de junio de 1963)**

En una carta de fecha 8 de junio (S/5326), el representante de la URSS pidió que se reuniese el Consejo de Seguridad para examinar los informes del Secretario General, ya que esos informes contenían ciertas propuestas relativas a posibles medidas por parte de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales sobre las que, con arreglo a la Carta, correspondía al Consejo de Seguridad tomar decisiones.

El Consejo de Seguridad examinó la cuestión en sus sesiones 1037a. a 1039a., celebradas el 10 y 11 de junio de 1963.

En su sesión 1037a., celebrada el 10 de junio, el Secretario General declaró que en sus cuatro informes se exponía su concepto de una función de observación por parte de las Naciones Unidas que podría realizarse en cumplimiento de las condiciones convenidas para el cese de las hostilidades. En aquel momento ello no tendría consecuencias financieras para las Naciones Unidas en vista de que Arabia Saudita y la República Árabe Unida habían aceptado costear los gastos de la operación durante dos meses. Para terminar, dijo que los informes subrayaban la urgencia cada vez mayor de la operación.

En la sesión 1038a., celebrada el 11 de junio, el Secretario General declaró que tenía la firme impresión de que todos, incluidas las partes interesadas, estaban de acuerdo en que las Naciones Unidas debían cumplir una función de observación. Dijo que estaba dispuesto a comenzar la operación inmediatamente. Sería una misión modesta, cuya duración no pasaría de cuatro meses, y que podría concluirse en dos. En caso de que fuesen necesarios más de dos meses, informaría al Consejo de Seguridad por anticipado. Terminó sus observaciones con la advertencia de que podría ponerse en peligro el acuerdo sobre las condiciones para el cese de las hostilidades si el personal de observación de las Naciones Unidas no se encontraba sobre el terreno.

En la misma sesión, el representante de la Unión Soviética declaró que había habido injerencia extranjera en los asuntos internos de la República del Yemen. Era natural que en tales circunstancias el Gobierno del Yemen, en virtud de su derecho de legítima defensa, hubiese emprendido acciones militares a fin de proteger su independencia. Las consultas mencionadas en el informe del Secretario General demostraban que los Gobiernos de la República Árabe Unida y del Yemen trataban de resolver el conflicto entre el Yemen y la Arabia Saudita por medios pacíficos. El acuerdo alcanzado entre las tres partes interesadas estaba precisamente dirigido a ese fin y por ello había que acogerlo con satisfacción. Sin embargo, el aspecto del acuerdo relativo al envío de observadores de las Naciones Unidas exigía ciertas observaciones ya que alcanzaba a todo el problema de la acción de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

En los últimos años se había demostrado, siguió diciendo, que el envío de fuerzas de las Naciones Unidas era un método utilizado por las Potencias im-

perialistas para establecer su propio control sobre determinadas regiones. Por consiguiente, era esencial señalar que la garantía más eficaz contra la continuación o la repetición de la agresión por parte de cualquier Potencia era tomar medidas destinadas a refrenar resueltamente al agresor, y no enviar fuerzas u observadores de las Naciones Unidas a la frontera entre un agresor extranjero y su víctima. Sin embargo, en vista de que en este caso los gobiernos de la RAU y del Yemen consideraban que el envío de observadores de las Naciones Unidas a la zona fronteriza entre el Yemen y Arabia Saudita podría evitar nuevas acciones hostiles contra el Yemen, la delegación soviética no se oponía a que el Consejo de Seguridad — único órgano competente para adoptar decisiones relativas a la acción de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales — decidiese el envío de un limitado número de observadores a aquella región durante un período de dos meses. En cuanto a los gastos que ocasionaría la operación y que se detallaban en los cálculos presentados al Consejo de Seguridad por el Secretario General, la Unión Soviética seguía opinando que correspondía al agresor sufragar el costo de la eliminación de las consecuencias de la agresión. Sin embargo, puesto que las partes interesadas habían convenido en pagar los gastos de la misión de observación y puesto que la medida no entrañaría obligaciones financieras para las Naciones Unidas, no había razón para creer que pudieran ponerse objeciones.

El representante de Marruecos presentó un proyecto de resolución, patrocinado conjuntamente por Ghana y Marruecos (S/5330), cuyo texto decía lo siguiente:

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Tomando nota con satisfacción de la iniciativa del Secretario General, mencionada en su informe S/5298 "acerca de ciertos aspectos de la situación en el Yemen que tienen su origen fuera del país", y encaminada a lograr una solución pacífica y a "evitar que se produzcan acontecimientos que puedan poner en peligro la paz en la región",*

*"Tomando nota además de la declaración formulada por el Secretario General ante el Consejo de Seguridad el 10 de junio de 1963,*

*"Tomando nota además con satisfacción de que las partes directamente interesadas en la situación que afecta al Yemen han confirmado que aceptan condiciones similares para el cese de las hostilidades en el Yemen, y de que los Gobiernos de Arabia Saudita y de la República Árabe Unida han convenido en sufragar durante un período de dos meses los gastos que requieran las funciones de observación de las Naciones Unidas previstas en las condiciones del cese de las hostilidades,*

*"1. Pide al Secretario General que establezca la operación de observación tal como la ha definido;*

*"2. Insta a las partes interesadas a que observen cabalmente las condiciones para el cese de las hostilidades expuestas en el documento S/5298 y a que se abstengan de toda acción que pueda aumentar la tirantez en la zona;*

*"3. Pide al Secretario General que informe al Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento de esta decisión."*

El representante de Marruecos explicó que el proyecto de resolución estaba encaminado a definir en forma precisa los términos legales de la acción de las Naciones Unidas que le permitiría asumir la responsabilidad en

el conflicto que ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales. Puso de relieve que el proyecto de resolución no debía considerarse como un precedente, ni desde el punto de vista político en cuanto a las soluciones de los problemas ni en cuanto a los aspectos financieros de la situación. Podía decirse que la crisis del Yemen era *sui generis* y que cualquier solución debía tener también un carácter *sui generis*. A su juicio, los elementos de la solución no podían cambiar, enmendar, ni contrariar los principios de la Carta en lo relativo a la definición de las soluciones, los métodos de financiación y las medidas que las Naciones Unidas podrían tener que adoptar con objeto de garantizar la paz y la seguridad internacionales.

En la sesión 1039a., el representante del Reino Unido declaró que la política de su país había sido de estricta prescindencia y no intervención y que su único interés era que se restableciese la estabilidad en el Yemen y se evitase la extensión del conflicto. Añadió que la nueva misión emprendida por la Organización estaba en consonancia con las obligaciones relativas al mantenimiento de la paz que le confería la Carta y contribuiría a la paz en el Yemen y a la estabilidad en el Cercano Oriente.

**Decisión:** *El proyecto de resolución conjunto (S/5330) quedó aprobado por 10 votos contra ninguno y 1 abstención (URSS) (S/5331).*

El representante de los Estados Unidos de América declaró que su Gobierno había confiado en que el Secretario General pudiera haber procedido rápidamente y sin objeciones, sobre la base de sus informes, al envío de la misión de observación requerida. Aunque la demora era lamentable, en vista de la gran urgencia del proyectado cese de hostilidades, la resolución aprobada era, en términos generales, satisfactoria. Señaló, sin embargo, que el cese de las hostilidades entre las partes no limitaba la duración de la operación de las Naciones Unidas a dos meses ni a ningún otro período. La referencia al período de dos meses se había hecho únicamente a causa del acuerdo sobre la financiación y no prejuzgaba la forma de esa financiación una vez transcurrido dicho período, en caso de que resultase necesario prolongar la operación. En cuanto a la financiación de la operación, a su juicio era acertado que la resolución no previese nada al respecto y se limitase a tomar nota de que las partes convenían en sufragar los gastos durante un período limitado.

El representante de la Unión Soviética declaró que la resolución que se acababa de aprobar no respondía cabalmente a las necesidades de la situación y por lo tanto no parecía adecuada. En primer lugar, la resolución no contenía indicaciones directas en cuanto al período de tiempo concreto en que actuaría la misión de observación. Sin embargo, era evidente, por la declaración formulada por el Secretario General en la sesión del Consejo de Seguridad del 10 de julio, que se trataba de enviar a los observadores por un período concreto y limitado. Subrayó que si la misión tenía que permanecer en la región fronteriza entre Arabia Saudita y el Yemen después de transcurridos los dos meses, la cuestión tendría que ser examinada oportunamente por el Consejo de Seguridad y tendría que adoptarse una decisión al respecto. Refiriéndose a la importancia, desde el punto de vista financiero, de la duración de la misión, el representante de la Unión Soviética dijo que aunque el Consejo de Seguridad había considerado esencialmente la cuestión de las fuentes de financiación de la operación, puesto que el Secretario General le

había presentado un presupuesto y que el Consejo también había tomado nota de la declaración del Secretario General de que todos los gastos pertinentes serían sufragados por las partes interesadas, los datos relativos a las fuentes de financiación de la operación no estaban debidamente reflejados en la resolución. Destacó que la delegación soviética había adoptado sistemáticamente la actitud de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con la letra y el espíritu de la Carta, debía adoptar las decisiones relacionadas con las medidas tomadas en nombre de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, únicamente después de tener en cuenta todos los aspectos del caso, incluidas las circunstancias materiales y financieras que entrañase la aplicación de las decisiones del Consejo.

Al explicar su voto en favor de la resolución, el representante del Brasil dijo que la misma tenía el mérito de no establecer principios controvertibles como un *cas d'espece*, hecho que tenía ventajas para la Organización en esa situación y que al mismo tiempo mantenía la confianza de los Estados Miembros en la eficacia de las Naciones Unidas.

El representante de las Filipinas declaró que, como lo había dicho el representante de Marruecos, se trataba de una situación peculiar que exigía una solución también peculiar y que, en consecuencia, no debía considerársela como un precedente, particularmente en lo relativo a la presunción de que sólo el Consejo de Seguridad podía autorizar operaciones de mantenimiento de la paz o de que era el único órgano que podía iniciar acciones encaminadas a mantener la paz.

El representante de Francia declaró que la financiación de la operación constituía un aspecto importante del problema acerca del cual el Consejo de Seguridad tenía competencia para adoptar decisiones. Si la misión de observación tenía que prolongarse más de dos meses, es decir, el período durante el cual sería válida la decisión del Consejo de Seguridad, y si las partes dejaban de costear los gastos que habían aceptado pagar, el Consejo se vería obligado a volver a examinar el problema.

El representante de la China explicó que su delegación había votado en favor de la resolución porque creía que en virtud de ella el Consejo velaría por que el acuerdo entre las partes fuese cumplido rápida y cabalmente y por que todos los elementos de origen externo, cualquiera fuese su procedencia, quedasen eliminados de la lucha civil en el Yemen con la menor demora posible.

El representante de Ghana señaló que si el grupo de observación tenía que continuar su tarea después de transcurridos los dos meses, el Consejo de Seguridad tendría que aprobar nuevas medidas en la región.

### **C. Acontecimientos posteriores al examen de la situación por el Consejo**

En una carta de fecha 17 de junio dirigida al Secretario General (S/5333), el representante de Arabia Saudita informó de que los días 6 y 8 de junio aviones militares egipcios habían realizado incursiones contra el territorio de Arabia Saudita, causando víctimas y cometiendo una violación del derecho internacional y de la Carta. La actitud moderada de su Gobierno no debía interpretarse como signo de debilidad. Debido al profundo deseo de paz de Arabia Saudita, su Gobierno confiaba en que el Secretario General velaría por que



se aplicase de buena fe el reciente acuerdo relativo al Yemen.

En su respuesta dirigida al Secretario General el 20 de junio (S/5336), el representante de la República Árabe Unida declaró que, a petición de la República Árabe del Yemen, su país había puesto fuerzas militares a disposición del mando supremo yemenita, en virtud del pacto de defensa mutua concertado entre los dos Gobiernos, con objeto de rechazar la agresión extranjera contra el Yemen. Se había comprobado que Arabia Saudita desempeñaba un papel preponderante en aquella

agresión. Los Gobiernos de la República Árabe del Yemen y de la República Árabe Unida habían aceptado de buena fe las condiciones para el cese de las hostilidades, que disponían el envío de una misión de las Naciones Unidas cuyo objeto principal sería la suspensión de la intervención militar extranjera contra el Yemen. Por consiguiente, el Gobierno de Arabia Saudita debía ser el último en protestar, ya que la acción ofensiva contra un pueblo pacífico era una violación de la Carta y una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.

## Parte II

### OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

#### Capítulo 5

#### ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS

##### A. Solicitud de la República de Rwanda

En cartas de fecha 27 de junio de 1962 (S/5137) y 1° de julio de 1962 (S/5137/Add.1), del Primer Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Rwanda, y en un telegrama de fecha 2 de julio de 1962 (S/5137/Add.2), del Presidente de la República de Rwanda, se presentó la solicitud de admisión de la República de Rwanda como Miembro de las Naciones Unidas. El Primer Ministro y el Presidente declaraban que la República de Rwanda se comprometía a aceptar sin reservas las obligaciones enunciadas en la Carta.

En una carta de fecha 19 de julio de 1962 (S/5146), el representante de Bélgica apoyó la solicitud y pidió que se le autorizase a participar en el examen de la cuestión.

El Consejo de Seguridad examinó la cuestión en su 1017a. sesión, celebrada el 26 de julio. El Presidente, con el consentimiento del Consejo, invitó al representante de Bélgica a participar en el debate.

Francia, Ghana, Irlanda, la República Árabe Unida y Venezuela presentaron el siguiente proyecto de resolución (S/5147):

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Habiendo examinado la solicitud de la República de Rwanda,*

*"Recomienda a la Asamblea General que admita a la República de Rwanda como Miembro de las Naciones Unidas."*

Después de oír declaraciones del representante de Bélgica y de todos sus miembros, el Consejo procedió a votar sobre el proyecto de resolución conjunto.

**Decisión:** *El proyecto de resolución presentado por Francia, Ghana, Irlanda, la República Árabe Unida y Venezuela quedó aprobado por unanimidad (S/5149).*

##### B. Solicitud del Reino de Burundi

En un telegrama de fecha 4 de julio de 1962 (S/5139 y Add.1) el Primer Ministro del Reino de Burundi presentó la solicitud de admisión del Reino de Burundi como Miembro de las Naciones Unidas, junto con una declaración en que dicho país aceptaba las obligaciones enunciadas en la Carta.

En una carta de fecha 19 de julio de 1962 (S/5146) el representante de Bélgica apoyó la solicitud y pidió que se le autorizase a participar en el examen de la cuestión.

El Consejo de Seguridad examinó la solicitud del Reino de Burundi en su 1017a. sesión, celebrada el 26 de julio. El Presidente, con el consentimiento del

Consejo, invitó al representante de Bélgica a participar en el debate.

Francia, Ghana, Irlanda, la República Árabe Unida y Venezuela presentaron el siguiente proyecto de resolución (S/5148):

*"El Consejo de Seguridad*

*"Habiendo examinado la solicitud del Reino de Burundi,*

*"Recomienda a la Asamblea General que admita al Reino de Burundi como Miembro de las Naciones Unidas."*

Después de oír declaraciones del representante de Bélgica y de todos sus miembros, el Consejo procedió a votar sobre el proyecto conjunto de resolución.

**Decisión:** *El proyecto de resolución presentado por Francia, Ghana, Irlanda, la República Árabe Unida y Venezuela quedó aprobado por unanimidad (S/5150).*

##### C. Solicitud de Jamaica

En un telegrama de fecha 6 de agosto de 1962 (S/5154), el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Jamaica presentó la solicitud de admisión de Jamaica como Miembro de las Naciones Unidas. Declaraba que Jamaica se comprometía a aceptar sin reservas las obligaciones enunciadas en la Carta.

El Consejo de Seguridad examinó la solicitud en su 1018a. sesión, celebrada el 12 de septiembre. Ghana y el Reino Unido presentaron el siguiente proyecto de resolución (S/5164):

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Habiendo examinado la solicitud de Jamaica,*

*"Recomienda a la Asamblea General que admita a Jamaica como Miembro de las Naciones Unidas."*

Después de oír declaraciones de todos sus miembros, el Consejo procedió a votar sobre el proyecto conjunto de resolución.

**Decisión:** *El proyecto de resolución presentado por Ghana y el Reino Unido quedó aprobado por unanimidad (S/5166).*

##### D. Solicitud de Trinidad y Tabago

En telegramas de fecha 6 y 8 de septiembre de 1962 (S/5162 y Add.1), el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Trinidad y Tabago presentó la solicitud de admisión de Trinidad y Tabago como Miembro de las Naciones Unidas. Declaraba que el Estado de Trinidad y Tabago se comprometía a aceptar sin reservas las obligaciones enunciadas en la Carta.

El Consejo de Seguridad examinó la solicitud en su 1018a. sesión, celebrada el 12 de septiembre. Ghana y el Reino Unido presentaron el siguiente proyecto de resolución (S/5165):

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Habiendo examinado la solicitud del Estado de Trinidad y Tabago,*

*"Recomienda a la Asamblea General que admita al Estado de Trinidad y Tabago como Miembro de las Naciones Unidas."*

Después de oír declaraciones de todos sus miembros, el Consejo procedió a votar sobre el proyecto conjunto de resolución.

**Decisión:** *El proyecto de resolución presentado por Ghana y el Reino Unido quedó aprobado por unanimidad (S/5167).*

### **E. Solicitud de la República Argelina Democrática y Popular**

En un telegrama de fecha 30 de septiembre de 1962 (S/5172/Rev.1), el Jefe de Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular presentó la solicitud de admisión de la República Argelina Democrática y Popular como Miembro de las Naciones Unidas. Declaraba que la República Argelina Democrática y Popular aceptaba sin reservas las obligaciones enunciadas en la Carta.

El Consejo de Seguridad examinó la solicitud en su 1020a. sesión, celebrada el 4 de octubre. Chile, los Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Irlanda, el Reino Unido, la República Árabe Unida, Rumania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela presentaron el siguiente proyecto de resolución (S/5173):

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Habiendo examinado la solicitud de la República Argelina Democrática y Popular,*

*"Recomienda a la Asamblea General que admita a la República Argelina Democrática y Popular como Miembro de las Naciones Unidas."*

Después de oír declaraciones de todos sus miembros, el Consejo procedió a votar sobre el proyecto de resolución conjunto.

**Decisión:** *El proyecto de resolución presentado por Chile, los Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Irlanda, el Reino Unido, la República Árabe Unida, Rumania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela, quedó aprobado por unanimidad por 10 votos contra ninguno y una abstención (China) (S/5174).*

### **F. Solicitud de Uganda**

En un telegrama de fecha 9 de octubre de 1962 (S/5176) el Primer Ministro de Uganda presentó la solicitud de admisión de Uganda como miembro de las Naciones Unidas. Declaró que Uganda aceptaba sin reservas las obligaciones enunciadas en la Carta.

El Consejo de Seguridad examinó la solicitud en su 1021a. sesión, celebrada el 15 de octubre. Ghana, el Reino Unido y la República Árabe Unida presentaron el siguiente proyecto de resolución (S/5177).

*"El Consejo de Seguridad,*

*"Habiendo examinado la solicitud de Uganda,*

*"Recomienda a la Asamblea General que admita a Uganda como Miembro de las Naciones Unidas."*

Después de oír declaraciones de todos sus miembros, el Consejo procedió a votar sobre el proyecto de resolución conjunto.

**Decisión:** *El proyecto de resolución presentado por Ghana, el Reino Unido y la República Árabe Unida quedó aprobado por unanimidad (S/5179 y Corr.1).*

### **G. Solicitud de Kuwait**

En una carta de fecha 20 de abril de 1963 (S/5294), el Ministro de Relaciones Exteriores de Kuwait pidió que el Consejo de Seguridad volviese a considerar en fecha próxima la solicitud presentada por Kuwait el 30 de junio de 1961 (S/4852).

En su 1034a. sesión, celebrada el 7 de mayo de 1963, el Consejo de Seguridad examinó la solicitud e invitó al representante del Irak, conforme a su pedido (S/5305), a participar sin voto en el debate.

El representante del Irak expresó su convicción de que el aplazamiento del examen de la solicitud habría dado una oportunidad para resolver el problema de conformidad con la política de su Gobierno de encontrar una solución pacífica. Su Gobierno no tenía otra alternativa que manifestar en forma inequívoca sus reservas con respecto a toda decisión que se tomase y declarar que reafirmaba sus legítimos derechos y jamás permitiría que nada afectase los históricos vínculos que lo unían con Kuwait y su pueblo.

El Consejo accedió luego al pedido del representante de Kuwait de que se le autorizase a exponer la opinión de su Gobierno respecto de algunas de las cuestiones planteadas por el representante del Irak. El representante de Kuwait declaró que su Gobierno consideraba que no había justificación para ningún aplazamiento y que la mayoría abrumadora de los Miembros de las Naciones Unidas compartía la convicción de su Gobierno de que no existía ningún problema entre Kuwait y el Irak. Su Gobierno había demostrado, en el canje de comunicaciones con miembros del nuevo régimen del Irak, su voluntad y su deseo de que se pudiese término a esta llamada "reclamación" del Irak, que su Gobierno no aceptaba.

Después de oír declaraciones de todos los miembros del Consejo, el Presidente llegó a la conclusión de que el Consejo recomendaba unánimemente la admisión de Kuwait como miembro de las Naciones Unidas, y leyó el texto de una carta dirigida al Secretario General en que le pedía que informase a la Asamblea General de la recomendación del Consejo.

**Decisión:** *El Consejo aprobó sin objeciones la declaración del Presidente.*

**RECOMENDACION RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS  
NACIONES UNIDAS**

El 3 de noviembre de 1961, la Asamblea General, actuando en conformidad con la recomendación del Consejo de Seguridad había nombrado a Su Excelencia U Thant Secretario General interino de las Naciones Unidas por un período que terminaría el 10 de abril de 1963. En consecuencia, en el programa del decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea General se incluyó un tema titulado "Nombramiento de Secretario General de las Naciones Unidas". En conformidad con el Artículo 97 de la Carta, el

Secretario General es nombrado por la Asamblea a recomendación del Consejo de Seguridad.

En su 1026a. sesión celebrada a puerta cerrada el 30 de noviembre de 1962, el Consejo de Seguridad examinó la cuestión de dicha recomendación y decidió por unanimidad recomendar a la Asamblea General el nombramiento de U Thant como Secretario General de las Naciones Unidas por un período que expirará el 3 de noviembre de 1966. Ese mismo día, el Presidente del Consejo informó al Presidente de la Asamblea General de la recomendación del Consejo.



**Parte III**  
**EL COMITE DE ESTADO MAYOR**

***Capítulo 7***

**LABOR DEL COMITE DE ESTADO MAYOR**

Durante el período reseñado, el Comité de Estado Mayor siguió funcionando de modo continuo en conformidad con su reglamento provisional y celebró 26 sesiones en total sin realizar ningún progreso en cuestiones de fondo.

## Parte IV

# ASUNTOS SEÑALADOS AL CONSEJO DE SEGURIDAD PERO NO DISCUTIDOS POR ESTE DURANTE EL PERIODO A QUE SE REFIERE ESTE INFORME

## Capítulo 8

### COMUNICACIONES RELATIVAS A LA CUESTION DE PALESTINA

#### A. Comunicaciones de Jordania e Israel referentes a la construcción de salinas

En una carta de fecha 20 de julio de 1962 (S/5144), el representante del Reino Hachemita de Jordania presentó una reclamación contra Israel por haber construido salinas del otro lado de la línea de demarcación del Armisticio jordano-israelí en suelo jordano al sur del Mar Muerto, lo que constituía una infracción del Acuerdo de Armisticio General. La carta se refería a la resolución de la Comisión Mixta de Armisticio de 12 de diciembre de 1961, por la que se pedía a Israel que suspendiera los trabajos y la explotación de las salinas al otro lado de la línea de demarcación en territorio de Jordania. En la carta se añadía que las autoridades de Israel no habían dado muestras de estar dispuestas a cumplir dicha resolución.

En respuesta, el representante de Israel manifestó en una carta de fecha 1° de agosto (S/5152), que la alegación de Jordania carecía de fundamento ya que jamás se había demarcado la frontera internacional y puesto que Jordania no había protestado contra la ubicación ni la explotación de las salinas en los seis años que siguieron al retiro, en 1955, de la queja que presentara en 1954. Añadía que Israel había informado a Jordania y al Secretario General de que estaba dispuesto a cooperar en una demarcación conjunta de la frontera a fin de permitir que Jordania llevase a cabo sus propios planes de extracción de minerales al sur del Mar Muerto.

#### B. Comunicaciones de Israel y de la República Arabe Siria

En una carta de fecha 11 de marzo de 1963 (S/5258), el representante interino de la República Arabe Siria reclamó contra una serie de actos de agresión cometidos por Israel entre el 24 de enero y el 3 de marzo de 1963 a lo largo de las líneas de demarcación del armisticio y en particular en las costas oriental y nororiental del Lago Tiberíades. En la carta se decía que esas incursiones y provocaciones israelíes constituían una grave amenaza para la paz en la región así como una violación del Acuerdo de Armisticio.

En respuesta, el representante de Israel, en una nota verbal de fecha 15 de marzo (S/5261), negó las alegaciones de Siria y enumeró una serie de incidentes ocurridos en el Lago, en territorio de Israel, que habían sido objeto de reclamaciones presentadas a la Comisión de Armisticio entre el 4 de enero y el 14 de marzo. La situación era inquietante pero ello se debía exclusivamente a las violaciones del Acuerdo de Ar-

misticio General cometidas por Siria, ya que una serie de decisiones de la Comisión Mixta de Armisticio había confirmado que todo acceso al Lago por el lado de Siria constituía una violación del Acuerdo. La responsabilidad por el hostigamiento constante de las actividades civiles de Israel en el Lago Tiberíades y las incursiones ilegales al otro lado de la línea de demarcación del Armisticio recaía por entero en el Gobierno sirio.

En una carta de fecha 10 de junio (S/5329), el representante de la República Arabe Siria informó al Consejo de que el 9 de junio, en violación del Acuerdo de Armisticio General, un cañonero israelí se había aproximado a la costa oriental del Mar de Galilea y abierto fuego sobre las posiciones sirias, y asimismo, que aviones de retropropulsión israelíes habían atacado la aldea siria de El Douga con ametralladoras y cohetes.

En respuesta, el representante de Israel declaró en una carta de fecha 11 de junio (S/5332) que el 9 de junio una lancha de la policía israelí había contestado al fuego de las posiciones del ejército sirio que dominaban la costa oriental del Lago Tiberíades, y negó que aviones israelíes hubieran atacado El Douga con ametralladoras y cohetes. En las posiciones fortificadas sirias se estaba recurriendo a la práctica de disparar contra las lanchas de la policía israelí que cumplían sus funciones normales y de hacer fuego contra los agricultores israelíes con el fin de perturbar las actividades civiles israelíes en la región fronteriza y, por último, tratar de establecer el control territorial de Siria más allá de las fronteras de dicho país. Estos actos constituían violaciones del Acuerdo de Armisticio General.

#### C. Otras comunicaciones

En una carta de fecha 29 de abril de 1963 (S/5297), el representante de Israel señaló a la atención del Consejo de Seguridad la declaración conjunta formulada el 17 de abril de 1963 por la República Arabe Unida, la República Arabe Siria y el Irak sobre el establecimiento de una federación entre esos tres Estados en la que se instaba a la "liberación de Palestina". Dicha declaración era incompatible con la obligación de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

En respuesta, los representantes del Irak, de la República Arabe Siria y de la República Arabe Unida, manifestaron en una carta de fecha 1° de mayo (S/

5300) que la declaración conjunta de 17 de abril de 1963 reiteraba y reafirmaba la opinión de sus gobiernos, que habían expresado por separado y conjuntamente en las Naciones Unidas y fuera de ellas, de que los

derechos del pueblo de Palestina debían ser cabalmente protegidos. Al suscitar esta cuestión, Israel trataba en realidad de encubrir una posible acción militar contra los Estados árabes.

## Capítulo 9

### COMUNICACIONES RELATIVAS AL TEMA: "CARTA DE FECHA 13 DE JULIO DE 1960 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS"

El 20 de agosto de 1962 se distribuyó en el documento S/5053/Add.11 un informe dirigido al Secretario General por el funcionario encargado de la ONUC sobre los acontecimientos relativos a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de 21 de febrero y 24 de noviembre de 1961. Con respecto a los acontecimientos ocurridos con posterioridad a las conversaciones entre el Sr. Adoula y el Sr. Tshombé, en el informe se señalaba que el 26 de junio, tras haberse suspendido sin llegar a ninguna conclusión las conversaciones de Leopoldville, el Sr. Tshombé había regresado a Elisabethville en un avión de la ONUC con los restantes miembros de la delegación de Katanga. En el centro de Elisabethville se había organizado un desfile. Dirigiéndose a la multitud, el Sr. Tshombé había señalado que las conversaciones de Leopoldville, en las cuales las tres partes interesadas habían seguido tres políticas diferentes en nombre del bienestar y felicidad de las poblaciones del Congo, habían suscitado problemas muy complejos. Había resultado inútil tratar de resolverlos todos durante la segunda fase de las conversaciones. La posición de la delegación de Katanga había sido muy razonable; había aceptado la creación de comisiones para estudiar los problemas y presentar propuestas al Gobierno Central y al Gobierno de Katanga. La delegación de Katanga había aclarado desde el principio que estas comisiones debían ser órganos consultivos, mientras que el Gobierno Central había tratado, en diversas formas, de facultar a las comisiones para tomar decisiones definitivas y obligatorias. Se habían hecho repetidos intentos para inducir a la delegación de Katanga a aprobar enmiendas que hubiesen modificado el carácter de las comisiones, pero la delegación de Katanga no se había dejado envolver por estas maniobras. El Sr. Tshombé había insistido en que no había firmado nada. Habían tratado de convencerle de que estaba comprometido por comunicados de prensa como si los comunicados representasen un compromiso. En el informe se continuaba diciendo que el 27 de junio el Sr. Tshombé había informado al Secretario General y al funcionario encargado de la ONUC de que las autoridades de Katanga habían decidido traspasar una suma de 100 millones de francos al Gobierno Central, por intermedio de las Naciones Unidas (Anexos III y IV). El 2 de julio el Sr. Tshombé había comunicado al Secretario General, al funcionario encargado de la ONUC y al Primer Ministro Adoula que Katanga había designado las personas que iban a integrar las cuatro comisiones cuya creación se había decidido durante las conversaciones de Leopoldville.

El 28 de julio el Sr. Bomboko, Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Central, había dirigido una carta al Secretario General interino pidiéndole que nombrase juristas especializados en derecho internacional público y especialmente en constituciones fede-

rales para que ayudasen al Gobierno Central a preparar una constitución federal (Anexo XI). Al propio tiempo el Gobierno Central había hecho público un comunicado en el que se apoyaba la aprobación de una nueva constitución de carácter federal que concediese amplia autonomía a los estados miembros aunque reservando ciertos derechos al Gobierno Central (Anexo XII). Tras las consultas celebradas entre el funcionario encargado de la ONUC y el Gobierno Central con respecto a la solicitud del Sr. Bomboko, el Secretario General interino había obtenido los servicios de los cuatro juristas siguientes, cuyo nombramiento había sido aprobado por el Primer Ministro Adoula: Jean Beetz (Canadá), profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Montreal; B. Malik (India), presidente retirado de la Corte Suprema de Allahabad, ex asesor en asuntos constitucionales de Malaya y Kenia; Dietrich Schindler (Suiza), profesor de Derecho Constitucional e Internacional de la Universidad de Zurich; O. O. Davies, Q.C. (Nigeria) escritor y jurista especializado en derecho constitucional. Los juristas debían asesorar al Gobierno congolés a título personal y en calidad de expertos; sus opiniones no representarían necesariamente las de las Naciones Unidas. Entre tanto el Sr. Tshombé había aprovechado la ocasión para hacer una declaración al cuerpo consular pidiendo el nombramiento de una quinta comisión que debía encargarse de redactar una constitución federal (Anexo XIII).

El informe se refería también a la celebración del segundo aniversario de la denominada independencia de Katanga, en la que habían tomado parte 2.000 miembros de la gendarmería, además de 800 policías, aunque el Sr. Tshombé había afirmado que sólo intervendría en el desfile una representación de las fuerzas de Katanga. También se mencionaba en el informe el incidente del 17 de julio durante el cual tropas de la ONUC habían sido atacadas en la Avenue Tombeur de Elisabethville por una turba de mujeres. Una comisión internacional de la ONUC nombrada para investigar el incidente llegó a las siguientes conclusiones: a) la manifestación había sido planeada cuidadosamente y contaba con el pleno apoyo de las autoridades de Katanga; b) a pesar de las grandes provocaciones a que habían sido sometidos, los soldados de las Naciones Unidas se habían comportado con disciplina y moderación ejemplares; c) era completamente infundada la acusación de que la muerte de una mujer katanguesa y de un niño había sido causada por el fuego de las tropas de las Naciones Unidas (Anexo XXIII).

Al comparecer ante el Comité Consultivo para el Congo el 24 de julio, el funcionario encargado de la ONUC había destacado los siguientes puntos: a) al nombrar los miembros de las cuatro comisiones, Katanga las había calificado de preparatorias, consultivas, y en modo alguno ejecutivas; b) durante el curso de

las negociaciones de Leopoldville los katanguenses habían estado al mismo tiempo activamente dedicados a preparar la celebración de su "independencia", como acontecimiento distinto de la independencia del Congo; c) en la prensa local, en la radio, y mediante anuncios generales publicados en Katanga se había popularizado la idea de un Estado, de un país, de una nación.

En el mismo documento se distribuyeron algunas observaciones del Secretario General interino con respecto al informe del funcionario encargado de la ONUC. Comentando el problema del Congo en general, el Secretario General interino informaba de que después de la interrupción de las conversaciones entre el Sr. Adoula y el Sr. Tshombé el 26 de junio, había convocado una reunión del Comité Consultivo para el Congo, el 29 de junio, con objeto de consultarlo acerca de las pautas de acción para el porvenir y comunicarle sus propias opiniones. Había consultado también con varios delegados en la Sede. Además, durante las visitas que había realizado en el mes de julio a algunas capitales europeas había aprovechado la oportunidad para llevar a cabo provechosos intercambios de opinión con los gobiernos interesados sobre los problemas con que se enfrentaban las Naciones Unidas en el Congo.

Los incidentes mencionados anteriormente por el funcionario encargado de la ONUC, a saber la celebración del denominado Día de la Independencia de Katanga el 11 de julio y el ataque cuidadosamente preparado por miles de mujeres y niños katanguenses contra las tropas de las Naciones Unidas en un puesto de control de Elisabethville, habían contribuido a aumentar la tirantez y también la impresión de que, por lo que hacía a Katanga, el deseo de llegar a una solución conciliando las discrepancias entre el Gobierno Central y las autoridades de la provincia de Katanga era más débil que nunca.

Teniendo en cuenta esta situación había celebrado nuevas consultas con el Comité Consultivo, a las que asistió asimismo a petición suya el funcionario encargado de la ONUC, el 24 de julio y el 31 de julio. Había expuesto al Comité la situación, tal como él la veía, a la luz de los recientes acontecimientos así como de sus consultas en Europa y en otros lugares. En estas reuniones, como en el curso de conversaciones con delegaciones y gobiernos, el Secretario General había tratado de dejar claramente establecido que a fin de evitar el caos en la República y en esa región de África en general, era imperioso adoptar medidas enérgicas y eficaces para cumplir con el mandato de las Naciones Unidas en el Congo.

Cuando había planteado la cuestión de la necesidad o conveniencia de que se celebrase una sesión del Consejo de Seguridad con miras a formular un nuevo mandato para la operación de las Naciones Unidas o a aclarar y fortalecer el existente, el consenso del Comité había sido que el mandato existente de las Naciones Unidas era adecuado y que no parecía necesaria ninguna otra decisión del Consejo de Seguridad.

El Secretario General había planteado asimismo la cuestión de la posibilidad de que los Estados Miembros ejercieran una presión económica sobre Katanga para lograr los objetivos de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta también las posibles consecuencias políticas de tal acción. El Secretario General interino continuaba diciendo que sin menospreciar las posibilidades del proyecto de constitución federal que estaban preparando el Primer Ministro y sus colegas como base para

un futuro acuerdo, había creído conveniente, en vista de que la solución del problema de Katanga era cada vez más urgente tanto para las Naciones Unidas como para el porvenir del Congo, adoptar ciertas medidas con ese fin. Estas medidas habían sido expuestas en las cartas que había dirigido a todos los Estados Miembros (Anexo XXV), al Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica (Anexo XXVI), al Primer Ministro Adoula (Anexo XXVII) y a la Unión Postal Universal en Berna (Anexo XXVIII).

Con respecto a las propuestas que, según se anunciaba, el Secretario General interino pensaba hacer, afirmaba que como el problema de Katanga era la clave de las dificultades del Congo, su propósito había sido tratar de lograr la unidad del Congo por todos los medios posibles, distintos del empleo de la fuerza, poniendo fin a los intentos de secesión de Katanga mediante un acuerdo sobre una constitución. Había ordenado a su representante en Leopoldville que presentara al Primer Ministro Adoula y al presidente provincial Tshombé un programa de medidas relativas a la preparación de una constitución que previese un sistema de gobierno federal, la distribución de los ingresos entre el Gobierno Central y los gobiernos de las provincias, y procedimientos para la utilización de las divisas, la unificación de la moneda, la integración y unificación del ejército congolés, la conducción de las relaciones exteriores, la reorganización del Gobierno Central, la proclamación de una amnistía general para los políticos y la cooperación de todas las autoridades congoleesas con las Naciones Unidas.

El Secretario General interino expresaba la creencia de que las autoridades de Katanga aceptarían el programa. Si no lo aceptaban, pensaba ejercer sobre las autoridades katanguesas una presión económica de tal naturaleza que les hiciese comprender cuál era su situación real y el hecho de que Katanga no era un Estado soberano ni estaba reconocido como tal por ningún gobierno del mundo.

El 23 de agosto se distribuyó una adición (S/5053/Add.11/Add.1) al informe del funcionario encargado de la ONUC. Se refería a los choques ocurridos entre el ENC y la gendarmería en el norte de Katanga y a la detención del Sr. Antoine Gizenga. Un oficial del ENC y un mercenario habían resultado muertos el 14 de agosto cuando la gendarmería había atacado al ENC en la zona de Kitenge.

El 17 de agosto el funcionario encargado de la ONUC había enviado una carta a las autoridades katanguesas advirtiéndoles que si la gendarmería katanguesa no cesaba en sus ataques, la ONUC se vería obligada a intervenir con todos los medios de que disponía (Anexo XXIX).

El mismo día, el Sr. E. Kimba, Presidente interino del gobierno provincial de Katanga, había respondido que se habían dado las órdenes necesarias para que se suspendiesen todos los movimientos militares (Anexo XXX).

Con respecto a la detención del Sr. Antoine Gizenga, se recordaba que el ex Viceprimer Ministro estaba bajo la custodia del Gobierno Central en la Isla de Bulabemba, situada en el estuario del Río Congo. El 20 de agosto, había visitado al Sr. Gizenga una comisión integrada por el comandante de la base del ENC en Banana, el comandante de la guardia del Sr. Gizenga y un miembro de la guardia, un representante de la *Sûreté nationale*, dos médicos y un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja.

En el informe presentado por el delegado de la Cruz Roja se había dejado constancia de que el Sr. Gizenga gozaba de buena salud.

Otro informe (S/5053/Add.12), distribuido el 8 de octubre de 1962 por el funcionario encargado de la ONUC, contenía detalles acerca del fortalecimiento de la fuerza mercenaria katanguesa. En el informe se señalaba que se había observado que continuaba la presencia de mercenarios extranjeros en las fuerzas armadas de Katanga y que habían llegado otros a pesar de la promesa hecha después de la Declaración de Kitona por el Sr. Tshombé y otros portavoces de Katanga con respecto a la eliminación de los mercenarios. Aunque las comisiones mixtas ONUC-Katanga relativas a los mercenarios no habían podido confirmar ni negar los informes procedentes de diversas fuentes de que mercenarios extranjeros permanecían todavía en la provincia de Katanga, habían llegado a las Naciones Unidas datos fidedignos, inclusive pruebas documentales, relativos a la presencia y las actividades de mercenarios en Katanga desde comienzos de 1962. El Anexo I del informe contenía los nombres, las nacionalidades y las fechas de la presencia de algunos de ellos. Otra lista, procedente de fuente muy fidedigna y adjunta como Anexo II daba los nombres de 36 nacionales belgas que, según se informaba, se hallaban en Katanga y podían todavía actuar como mercenarios. En el informe se señalaba que otras pruebas menos concretas procedentes de observadores más o menos fidedignos habían fijado el número de personal extranjero en las fuerzas armadas de Katanga entre 300 y 500. El 13 de noviembre se distribuyó como documento S/5053/Add.12/Add.1 otra lista de personal militar extranjero que según fuentes dignas de crédito se encontraba en Katanga desde enero de 1962. En el informe se continuaba diciendo que la conclusión que había que sacar de las pruebas documentales en poder de las Naciones Unidas y de los informes suplementarios procedentes de otras fuentes era que el elemento mercenario, aunque había disminuido temporalmente a fines de 1961, había aumentado hasta llegar a sus primitivos efectivos a partir de los primeros meses de 1962. Sin embargo lo que ocurría era que en general los mercenarios de Katanga habían adoptado ropas y empleos civiles, lo que hacía difícil distinguirlos de la población local de origen europeo. Por consiguiente, resultaba mucho más difícil que antes aprehenderlos.

En los párrafos 10 a 14 del informe se aludía a los casos individuales de mercenarios que habían resultado muertos durante choques ocurridos entre las tropas del ENC y la gendarmería de Katanga o con respecto a los cuales había pruebas de que habían servido en las fuerzas armadas de Katanga. En el informe se mencionaba también el caso del Sr. Hubert Fauntleroy Julian, un nacional de los Estados Unidos cuyas declaraciones a los funcionarios de la ONUC, así como los documentos que llevaba consigo, habían demostrado claramente que había estado dedicado al comercio de armas, municiones y equipo militar por cuenta de las autoridades secesionistas de Katanga.

Refiriéndose al fortalecimiento de la fuerza aérea katanguesa, en el informe se declaraba que entre las pruebas relativas al aumento de poderío aéreo se incluía la anunciada adquisición y llegada a Katanga de nuevos aviones (aviones de combate y de adiestramiento), la construcción y ampliación de campos de aviación y pistas de aterrizaje y la llegada de merce-

narios extranjeros que se sabía eran pilotos y técnicos de aviación.

El informe contenía información, verificada por el Mando de las Naciones Unidas, acerca de la llegada a Katanga de un cierto número de aviones desde comienzos de 1962. Gran parte de esta información había sido confirmada mediante fotografía aérea directa. Se indicaba que la principal base de la fuerza aérea de Katanga era Kolwezi-Kengere. Desde enero de 1962 se venían realizando obras para mejorar este aeródromo. Se habían construido cobertizos semisubterráneos para aviones, en general bien disimulados. Se creía que el campo de aviación Kolwezi-Kengere había sido reforzado con una serie de baterías antiaéreas. Lo mismo se había hecho, al parecer, en Kipushi. En otros lugares de Katanga se había estado trabajando desde enero de 1962 en la construcción de nuevas pistas de aterrizaje en Kipushi, Lengwe, Pepa y en la carretera de Sakania. No se conocía el número total de personal extranjero empleado en la fuerza aérea de Katanga. Sin embargo, se creía que había aproximadamente de 20 a 50 pilotos y técnicos experimentados al servicio de las autoridades de Katanga.

Se informaba también acerca de una serie de incidentes ocurridos en Katanga. El 12 de septiembre se había producido un choque en el cruce de caminos de Martini en Elisabethville al ser atacada una patrulla de las fuerzas de la ONUC, compuesta por 20 hombres, por unos 100 miembros de la gendarmería katanguesa. Según se decía en el incidente habían resultado muertos dos miembros de la gendarmería. Las fuerzas de la ONUC no habían sufrido bajas.

El 24 de septiembre una patrulla de la ONUC que estaba cumpliendo una misión de reconocimiento del camino de Martini había sufrido algunas bajas a consecuencia de la explosión de una mina colocada por la gendarmería katanguesa.

El 20 de septiembre había sido derribado en Kamunzu un avión de la ONUC que efectuaba un vuelo de reconocimiento. Había resultado muerto un miembro de la tripulación, y otro había fallecido poco después del incidente a consecuencia de las heridas recibidas. Una junta investigadora no había podido llegar a una conclusión definitiva con respecto al origen de los disparos, ya que se había comprobado que en el momento del incidente se hallaban en la región tropas del ENC y de las fuerzas terrestres katanguesas.

En un informe (S/5053/Add.13) de fecha 26 de noviembre, el funcionario encargado de la ONUC manifestó que el programa de medidas propuesto por el Secretario General interino, conocido con el nombre de "Plan de Conciliación nacional", o, simplemente, "el plan", había sido recibido en Leopoldville el 19 de agosto de 1962 para su presentación al Gobierno Central y, con el asentimiento de éste, al Sr. Moise Tshombé. Conforme a las disposiciones constitucionales sugeridas en el plan, el Gobierno Central debía, en el mes de septiembre, presentar y apoyar en el Parlamento, hasta su entrada en vigor, un proyecto de constitución que estableciera un gobierno federal para el Congo. A tal efecto, el Gobierno Central había pedido a las Naciones Unidas que le facilitaran los servicios de expertos internacionales en derecho constitucional, especializados en sistemas federales. Teniendo en cuenta las opiniones de todos los gobiernos provinciales y grupos políticos interesados del Congo acerca de las disposiciones que habían de incluirse en esta constitución, el Gobierno Central daría a los



expertos las instrucciones necesarias para la preparación definitiva, para el mes de septiembre, de un proyecto de constitución conforme al cual los poderes se dividirían según se expone a continuación. Quedarían reservados exclusivamente al Gobierno Central los siguientes aspectos: a) relaciones exteriores, b) defensa nacional (fuera de las funciones de policía local), c) aduanas, d) moneda, control de cambios y política tributaria, e) comercio interior y exterior, f) facultades impositivas suficientes para atender las necesidades del Gobierno Central, g) nacionalidad e inmigración y h) correos y telecomunicaciones. Los gobiernos provinciales tendrían autoridad sobre sus propias administraciones y poseerían todos los poderes que no estuviesen reservados al Gobierno Central, incluidos los de policía local, como así también las facultades impositivas necesarias para sufragar los gastos de las actividades de administración local.

Además de la preparación de una constitución federal, los otros elementos principales previstos en el Plan eran la distribución de los ingresos y divisas entre el Gobierno Central y los gobiernos de las provincias, la unificación de la moneda, la integración y unificación de todas las unidades militares, paramilitares y de gendarmería en un ejército y gendarmería nacionales, el retiro de todas las misiones o los representantes diplomáticos o consulares en el exterior que no estuviesen sujetos a la autoridad del Gobierno Central, la proclamación de una amnistía general y la reconstitución del Gobierno Central de modo que estuviesen representadas en él todas las agrupaciones políticas y provinciales (S/5053/Add.13/Corr.1). El informe del funcionario encargado de la ONUC expresaba a continuación que el plan había sido presentado al Primer Ministro Cyrille Adoula en Leopoldville el 20 de agosto, y el 24 de agosto a las autoridades de Katanga en Elisabethville. En sus conversaciones con el Primer Ministro Adoula, lo mismo que con el representante del Sr. Tshombé, el funcionario encargado de la ONUC había aclarado que el plan, tal como les había sido presentado, debía ser aceptado o rechazado en su totalidad, y que no estaba sujeto a negociaciones.

Después que el Primer Ministro Adoula y el Sr. Tshombé habían aceptado el plan, les fueron remitidas, el 10 de septiembre, dos cartas idénticas que incluían un programa detallado para la aplicación inmediata del mismo. El programa, entre otras cosas, requería: a) que se terminara el proyecto de constitución federal para fines de septiembre y se lo presentara al Parlamento; b) que se preparara un proyecto de ley financiera sobre distribución de los ingresos y divisas que debía incluirse en la constitución y someterse al Parlamento; c) que se tomara inmediatamente un juramento de lealtad al Presidente de la República, a los comandantes de todas las unidades militares, paramilitares o de gendarmería que no lo hubieran prestado aún; d) que las autoridades del Gobierno Central proclamaran una amnistía; e) que el Sr. Tshombé disolviera el "Ministerio de Relaciones Exteriores" de Katanga y se retiraran inmediatamente todos los representantes y misiones de Katanga en el exterior; y f) que el Gobierno Central ofreciera asignar a los miembros del Partido Conakat determinados ministerios en un Gobierno Central reorganizado lo más pronto posible. En el programa para la aplicación del Plan se había previsto también la creación de comisiones mixtas que debían ocuparse de los detalles prácticos

relacionados con las disposiciones militares y financieras del Plan (Anexo VI).

De conformidad con la primera cláusula del Plan de Conciliación Nacional, los expertos en derecho constitucional cuyos servicios fueron facilitados por las Naciones Unidas redactaron un proyecto de constitución federal. Los expertos tuvieron en cuenta algunas "observaciones preliminares" presentadas por las autoridades de Katanga (Anexo IX) así como las propuestas de otras provincias y grupos. El proyecto de constitución federal, junto con un memorándum explicativo y comentarios detallados sobre sus diversas cláusulas, había sido sometido al Primer Ministro Adoula el 27 de septiembre, quien lo había transmitido a las Mesas de las dos Cámaras del Parlamento el 13 de octubre (Anexo XI). Posteriormente se lo había presentado a una conferencia de presidentes provinciales celebrada en Leopoldville del 16 al 23 de octubre. Las autoridades de Katanga, a pesar de haber sido invitadas, no habían asistido. La Conferencia había aprobado una resolución en la que se invitaba al Sr. Tshombé "a cooperar en forma constructiva y sincera con el Gobierno Central y otras provincias".

Según estaba previsto en el programa de ejecución, se habían establecido tres comisiones integradas por representantes de las autoridades del Gobierno Central y de Katanga, con el asesoramiento de expertos de las Naciones Unidas, que debían determinar las modalidades administrativas de la aplicación de las disposiciones militares del Plan como así también las relativas a ingresos y divisas. Las Comisiones habían celebrado varias reuniones. El 16 de octubre, la Comisión de Asuntos Militares había llegado a un acuerdo sobre cesación del fuego en el que se pedía entre otras cosas la cesación inmediata de los movimientos de tropas del ENC y de Katanga en el norte de Katanga y el suministro de armas y municiones a estas fuerzas, el retiro por ambas partes de todas las barreras colocadas en los caminos de la zona respectiva, un canje de prisioneros y un compromiso mutuo de no aumentar las fuerzas militares en las zonas de operaciones del norte de Katanga.

El Secretario General interino había dado instrucciones al funcionario encargado de la ONUC el 30 de octubre para que señalara a la atención del Gobierno Central y de las autoridades katanguesas los compromisos que habían contraído al aceptar el Plan. Esto había sido objeto de dos cartas idénticas dirigidas al Primer Ministro Adoula y al Sr. Tshombé de fechas 1º y 2 de noviembre respectivamente, a las cuales se había agregado una nota acerca de "los requisitos del Plan" en que se enumeraban las disposiciones que habían de adoptar el Gobierno Central y el de Katanga, y se hacía una evaluación de las disposiciones efectivamente adoptadas por ellos.

En un cablegrama dirigido al Secretario General interino, de fecha 9 de noviembre, el Primer Ministro Adoula había reafirmado su apoyo al Plan de conciliación nacional pero había señalado los peligros que podrían surgir en caso de que las partes no se ajustaran estrictamente a los plazos previstos en el mismo. Posteriormente, el Primer Ministro había explicado en detalle, en un anexo agregado a una carta de fecha 13 de noviembre, las medidas y la posición adoptadas por su Gobierno con respecto a la ejecución del Plan. Había sostenido que su Gobierno había hecho todo lo posible para aplicar las disposiciones pertinentes del

Plan, a menudo frente a graves provocaciones por parte de las autoridades de Katanga (Anexo XVIII).

Después de la visita que el funcionario encargado de la ONUC había realizado a Elisabethville para hacer comprender al Sr. Tshombé la necesidad de que diese una respuesta positiva, antes del 15 de noviembre, a la nota del Secretario General interino sobre los requisitos del Plan, el Sr. Tshombé le había informado en una carta de fecha 12 de noviembre que estaba resuelto a aplicar el Plan y había negado que Katanga hubiese insistido en adoptar una actitud separatista, y había atribuido toda la responsabilidad por las dificultades con que se había tropezado en el cumplimiento del Plan al Gobierno Central (Anexo XIX). El 12 de noviembre el Sr. Tshombé había emitido un comunicado de prensa en el que atribuía al Gobierno Central el fracaso de la ejecución del Plan y afirmaba que las Naciones Unidas estaban tratando de encontrar pretextos para justificar el empleo de la fuerza (Anexo XIX-a).

En una carta de fecha 16 de noviembre, dirigida al Sr. Tshombé, el funcionario encargado de la ONUC le había pedido que adoptara las siguientes medidas: a) enviar sin demora a Leopoldville a los funcionarios superiores de Katanga para prestar juramento de lealtad al Presidente de la República, quedando entendido que si era necesario la ONUC garantizaría su seguridad y les proporcionaría medios de transporte; b) anunciar la inmediata adopción de medidas para la aplicación de las disposiciones del Plan relativas a ingresos, finanzas y divisas; c) autorizar a los funcionarios de aduanas e inmigración del Gobierno Central a desempeñar sus funciones en Katanga lo mismo que en cualquier otro punto del Congo; d) permitir completa libertad de movimiento a todo el personal de la ONUC en Katanga, inclusive en Jadotville, Kipushi y Kowezi, y e) cooperar con la ONUC a fin de eliminar a todos los mercenarios de la gendarmería.

Con respecto a la proclamación de la amnistía general recomendada en el Plan de conciliación nacional, en una adición (S/5043/Add.13/Add.1) distribuida el 28 de noviembre, se reproducía la proclamación formulada el 26 de noviembre por el Presidente de la República, Sr. Kasa-Vubu. El Presidente declaraba lamentar profundamente la conducta extraviada de algunos de "nuestros hermanos del sur de Katanga" quienes, confiaba, escucharían "nuestro llamado para que retornen al redil". Agregaba que las puertas estaban abiertas para todos aquellos que desearan regresar y que con el mismo espíritu que había reinado en la época de la reunión de Lovanium, en julio y agosto de 1961, en que se habían superado y sepultado las más graves enemistades y divergencias de opinión, renovaba solemnemente el ofrecimiento que había formulado en aquella ocasión y proclamaba que se concedería una amnistía general y completa a todos aquellos que regresaran al Congo, cualesquiera fuesen los delitos políticos que pudieran haber cometido.

En un informe (S/5053/Add.14) sobre los acontecimientos ocurridos en Katanga desde el 26 de noviembre de 1962 al 4 de enero de 1963, el funcionario encargado de la ONUC declaró que el Sr. Tshombé no había adoptado ninguna medida de importancia para lograr la reintegración de Katanga. En el Plan del Secretario General se había enunciado un programa de medidas concretas que habían de adoptarse en determinados plazos, al término de los cuales Katanga debía quedar reintegrada en una república federal del

Congo. El Sr. Tshombé sólo había respondido con tibias declaraciones de aceptación y sus actos habían desmentido aun esas declaraciones.

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales de Katanga se habían dedicado a una campaña de hostigamiento de creciente intensidad contra las fuerzas y el personal civil de la ONUC en la zona de Elisabethville, las que se habían encontrado cada vez más en una situación análoga a la de un sitio. Se mencionaba el caso de cinco soldados tunecinos de la ONUC que se habían dado por desaparecidos o secuestrados por la gendarmería. El 18 de diciembre el Sr. Tshombé había informado al representante de las Naciones Unidas en Elisabethville que la devolución de los cinco soldados se efectuaría solamente 10 días antes de la repatriación del contingente tunecino, posición que el representante de las Naciones Unidas se había negado a aceptar. Se mencionaba también el caso de los dos empleados civiles de la ONUC que habían sido detenidos el 4 de diciembre. Los enérgicos esfuerzos realizados por el representante de las Naciones Unidas en Elisabethville para conseguir que fueran puestos en libertad habían resultado infructuosos. Uno de los hombres detenidos había escapado a la vigilancia de la gendarmería el 22 de diciembre de 1962 y había informado de que se había hecho fuego contra el otro y que se temía que hubiera muerto. Se denunciaba que durante la noche del 7 de diciembre de 1962, siete funcionarios de la ONUC que viajaban en un *jeep* habían sido detenidos por miembros de la gendarmería y policías katangueses. Habían sido abofeteados y golpeados por los policías y por el General Moke, Comandante de la Gendarmería, antes de entregárseles a las autoridades militares de la ONUC.

Gradualmente, la campaña del Sr. Tshombé contra las Naciones Unidas se había hecho extensiva a los nacionales de los Estados Miembros de la Organización cuyos Gobiernos cooperaban en la aplicación del Plan del Secretario General y del mandato de las Naciones Unidas en el Congo.

El informe se refería también a choques entre tropas del ENC y fuerzas katanguesas, a bombardeos y destrucciones en el norte de Katanga y señalaba que el funcionario encargado de la ONUC había protestado enérgicamente por la innecesaria destrucción de la infraestructura vital del país en una carta de fecha 8 de diciembre en la cual se había informado además al Sr. Tshombé de que se había enviado un destacamento militar de la ONUC a Kongolo, localidad a la que habían entrado las fuerzas del ENC, para mantener el orden y la legalidad y evitar la guerra civil y choques fratricidas (Anexo IX). El 14 de diciembre, las tropas de las Naciones Unidas habían entrado en Kongolo y habían permanecido allí.

Con respecto a la aplicación del Plan de conciliación nacional, se señalaba que durante el período a que se refería el informe, el gobierno del Sr. Tshombé no había adoptado medida alguna para llevar a cabo la parte del Plan que le correspondía a Katanga. Por consiguiente, se había informado al Sr. Tshombé de que se aplicarían las fases II a IV de las pautas de acción del Plan (S/5053/Add.13, Anexo I) y de que la ONUC insistiría en que se cumplieran las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al Congo.

El 11 de diciembre, el Secretario General había pedido ayuda al Gobierno de Bélgica, uno de los primeros en apoyar el Plan, para poner fin pacíficamente al problema de Katanga. Se había solicitado al Go-

bierno de Bélgica que ejerciera toda la influencia posible sobre la Union Minière du Haut Katanga para lograr que desistiera inmediatamente de pagar utilidades a la provincia de Katanga (Anexo XIII).

El Secretario General se había dirigido también a los Gobiernos de Portugal, de la República de Sudáfrica y del Reino Unido para pedirles que adoptaran las medidas necesarias a fin de prohibir la expedición de mineral de cobre de Katanga a través de los territorios bajo su jurisdicción, hasta tanto quedase resuelta la cuestión del pago de los ingresos de la Union Minière al Gobierno Central y a la división de los mismos con Katanga (Anexos XIV y XV).

El 11 de diciembre el Primer Ministro Adoula había dirigido cartas idénticas a 17 Gobiernos interesados pidiéndoles que, en cumpliendo de la fase II del Plan no permitieran la importación a sus territorios de cobre y cobalto de Katanga. Esta petición había sido apoyada por el Secretario General.

El 12 de diciembre el Sr. Tshombé había transmitido al Secretario General un "ofrecimiento" relativo a la cuestión de las divisas, con arreglo al Plan de conciliación nacional, pero había resultado imposible llegar a un acuerdo sobre los detalles de ese ofrecimiento.

En el informe se continuaba diciendo que del 24 al 28 de diciembre se habían producido tiroteos esporádicos por parte de la gendarmería en Elisabethville, y sus alrededores, causando varias bajas entre las tropas de la ONUC. Cuando las Naciones Unidas habían pedido el retiro de las barreras y posiciones de sitio desde las cuales se producían los tiroteos, las autoridades katanguesas habían publicado una declaración en la que se invitaba a la resistencia contra las tropas de la ONUC y se amenazaba con volar puentes, represas y otras instalaciones (Anexo XXVIII).

Del 28 al 31 de diciembre las Naciones Unidas habían iniciado la acción necesaria para restablecer la seguridad de las tropas de la ONUC en la zona de Elisabethville y su libertad de movimientos mediante el retiro de las barreras de la gendarmería. La acción se había llevado a cabo con éxito y se habían capturado las posiciones fortificadas de los lugares siguientes: el camino de Jadotville, el campo de golf de Kasapa, el camino de Kipushi, la Avenida Tombeur, Munama y Naviundu. Las fuerzas de la ONUC controlaban en forma efectiva toda la zona que se extiende aproximadamente a unos 20 kilómetros en torno a Elisabethville y la primera fase de la operación de las Naciones Unidas en Elisabethville había terminado.

Prosiguiendo su acción para lograr libertad de movimiento, la Fuerza de las Naciones Unidas, en el período comprendido entre el 31 de diciembre y el 4 de enero, había avanzado sobre las posiciones fortificadas de Katanga y luego sobre Jadotville, una importante ciudad minera en la que se habían concentrado los mercenarios. Las fuerzas de la ONUC habían llegado a esta ciudad el 3 de enero y habían sido entusiastamente acogidas por la población.

La operación de Jadotville había sido la primera experiencia de una fuerza armada estrictamente bajo el mando de las Naciones Unidas en condiciones de combate sobre el terreno. Las dificultades de la batalla habían revelado serias deficiencias en materia de comunicaciones y coordinación entre la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el cuartel general de la Ope-

ración del Congo en Leopoldville y los destacamentos militares que actuaban sobre el terreno.

En el informe se agregaba que desde el 28 de diciembre los aviones de combate de la ONUC, armados con cañones y cohetes pero no con bombas, habían permanecido listos para entrar en acción con la máxima rapidez. En caso de ser necesaria su actuación, la misión concreta de los mismos consistía en impedir toda actividad aérea de los katangueses contra la ONUC. El plan consistía en destruir los aviones katangueses que se encontrasen en el aire o en el aeródromo militar de Kolwezi Kengere y otros aeródromos del sur de Katanga que podrían ser empleados para las operaciones aéreas katanguesas en la zona de Elisabethville. Desde el 28 de diciembre hasta el 4 de enero inclusive se habían efectuado en total 76 salidas que representaban más de 100 horas de vuelo. Siete aviones de combate de la ONUC y uno de reconocimiento habían sido alcanzados por proyectiles aunque ninguno de sus pilotos había resultado herido.

Con respecto a las bajas sufridas por las fuerzas de la ONUC entre el 24 y el 28 de diciembre a raíz de los disparos de la gendarmería y en el transcurso de las subsiguientes operaciones cumplidas entre el 28 de diciembre y el 4 de enero, el informe fijaba en nueve el número de muertos y en 72 el de heridos.

Se señalaba que durante las operaciones las autoridades civiles y militares de la ONUC habían realizado grandes esfuerzos para mantener la legalidad y el orden público así como los servicios civiles esenciales, y que a partir del 3 de enero habían comenzado a llegar a Elisabethville algunos funcionarios del Gobierno Central para estudiar el problema del restablecimiento de las relaciones normales y las comunicaciones y el enlace entre las autoridades de Leopoldville y Elisabethville.

Al informar acerca de las relaciones con las autoridades katanguesas después de las recientes operaciones, el funcionario encargado de la ONUC declaró, en un informe posterior (S/5053/Add.15), que el Sr. Tshombé, después de salir de Elisabethville el 28 de diciembre y efectuar una visita a Salisbury, capital de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, se había dirigido por vía de Rhodesia del Norte a Kolwezi, último centro minero de importancia ocupado todavía por la gendarmería katanguesa. Con posterioridad se había informado de que el Sr. Tshombé había continuado dando muestras de cierto interés en reanudar las conversaciones con los funcionarios de la ONUC, pero que había dicho también que, si se veían obligados, los katangueses lucharían hasta el último hombre y recurrirían a una política de "tierra arrasada", que incluiría la destrucción de valiosas instalaciones mineras, centrales eléctricas y puentes, especialmente en Kolwezi. La amenaza de una política de "tierra arrasada" se había hecho cada vez más grave en vista de la extensa e innecesaria destrucción de puentes ya causada durante las recientes operaciones (en el Anexo I adjunto al informe se reproducía una lista de los puentes y otras instalaciones destruidos o dañados en Katanga desde noviembre hasta el 14 de enero).

A su regreso a Elisabethville el 8 de enero, el Sr. Tshombé había informado a los funcionarios de las Naciones Unidas de que había regresado a Elisabethville con el exclusivo objeto de restablecer la paz y la tranquilidad de Katanga y de todo su pueblo lo más pronto posible. Sin embargo, en una conferencia de



prensa realizada el 9 de enero, había puesto de manifiesto que no había renunciado a la política de "tierra arrasada" y que la cuestión de la libertad de movimientos de las tropas de la ONUC continuaba todavía "en discusión".

El Secretario General había formulado inmediatamente una declaración en la que había reiterado los cuatro puntos básicos con respecto a los cuales las Naciones Unidas habían pedido garantías al Sr. Tshombé antes de entrar en contacto con él en lo referente a otros asuntos. Estos puntos habían sido: 1) la renuncia categórica del Sr. Tshombé a la política de tierra arrasada y de sabotaje que se le atribuía frecuentemente; 2) la renuncia a su intención reiteradamente expresada de luchar hasta el último hombre; 3) la adopción inmediata de medidas prácticas para la ejecución del Plan de Conciliación Nacional que el Sr. Tshombé había aceptado hacía muchos meses; y 4) la seguridad de que reconocería de inmediato el derecho de la ONUC a circular libremente por todo el territorio de Katanga (Anexo III).

El 12 de enero, el Sr. Tshombé había partido precipitadamente en automóvil hacia la frontera con Rhodesia y había regresado en avión a Kolwezi. En esa fecha se tuvo conocimiento de que elementos de la gendarmería y mercenarios habían minado completamente las importantes instalaciones industriales y mineras de Kolwezi y estaban decididos a hacer volar dichas instalaciones en caso de que las tropas de la ONUC hubieran tratado de aproximarse a dicha ciudad. Asimismo habían quedado en peligro de destrucción el puente sobre el río Lualaba, cerca de Kolwezi, la represa Delcommune y la central de energía eléctrica de Lufira.

El 17 de enero, el Sr. Tshombé había convenido en reunirse con representantes de las Naciones Unidas en la sede de la ONUC en Elisabethville, a fin de discutir las modalidades de la entrada de la ONUC en Kolwezi. Al final de la reunión, el Sr. Tshombé se había comprometido a facilitar la entrada pacífica de la ONUC en Kolwezi, la cual debía efectuarse el 21 de enero de 1963. Se le había permitido mantener una pequeña guardia personal.

En consecuencia, las tropas de las Naciones Unidas habían entrado en Kolwezi en la tarde del 21 de enero. El Sr. Tshombé había reiterado ulteriormente su sincera determinación de poner en práctica el Plan de Conciliación Nacional propuesto por el Secretario General.

El funcionario encargado de la ONUC informó asimismo acerca de las operaciones militares que se habían llevado a cabo durante el período a que se refería su informe. Dichas operaciones, que habían permitido a la fuerza de las Naciones Unidas tener bajo su control todos los centros importantes que hasta entonces habían estado en poder de los katangueses, se cumplieron, en general, con un mínimo de resistencia. Para el 21 de enero, las tropas de las Naciones Unidas habían restablecido la legalidad y el orden en todas partes. La gendarmería katanguesa había dejado de existir como fuerza organizada de combate. De este modo habían concluido las operaciones militares comenzadas el 28 de diciembre.

Refiriéndose a la cuestión de los mercenarios, en el informe se manifestaba que durante la última semana de diciembre y las dos primeras semanas de enero, las tropas de las Naciones Unidas habían capturado a nueve mercenarios o personas de quienes se sospechaba que eran mercenarios.

No obstante, se había comprobado que si bien los miembros mercenarios de la gendarmería katanguesa ascendían en diciembre a unos 400 según la mayoría de las fuentes de información, pronto habían quedado desorganizados y desmoralizados. Se había observado que eran incapaces de reforzar la moral y de dirigir eficazmente a la gendarmería katanguesa como lo habían hecho anteriormente. Antes de la entrada de las fuerzas de la ONUC en Kolwezi, se había informado de que un gran número de mercenarios habían partido por tren en dirección a Dilolo, en la frontera con Angola, y desde entonces las tropas de la ONUC no habían encontrado a ningún mercenario.

En el mismo informe, el funcionario encargado de la ONUC describía el restablecimiento de los servicios y las medidas adoptadas para la reintegración de Katanga.

Durante la primera semana de enero de 1963, se había transportado por avión a Elisabethville a 22 oficiales y funcionarios representantes del Gobierno Central, los cuales habían integrado la Comisión Administrativa que se había ido organizando gradualmente, instalando oficinas y estableciendo los contactos preliminares, pero no se había ocupado de la legalidad y el orden, lo cual había seguido siendo la responsabilidad principal de la ONUC, actuando en cooperación con la policía katanguesa. El 16 de enero, el Presidente de la República del Congo, había designado al Sr. Joseph Ileo como Ministro de Estado, miembro del Consejo de Ministros, residente en Elisabethville, con la misión especial de establecer los contactos necesarios con las instituciones provinciales y de facilitar el proceso de reintegración de Katanga del Sur a la República. El Sr. Ileo y su comitiva habían llegado a Elisabethville el 23 de enero para asumir sus funciones.

Del 4 al 15 de enero se habían celebrado conversaciones entre representantes de la Unión Minière du Haut Katanga y del Gobierno del Congo, las cuales habían dado como resultado un acuerdo sobre divisas, en virtud del cual la Unión Minière debía remesar al Consejo Monetario todos sus ingresos por concepto de exportación; este último, a su vez, debía asignar a la Unión Minière las divisas que precisase para satisfacer sus necesidades esenciales y mantener sus actividades, a condición de que la utilización de dichas divisas se hiciera bajo la fiscalización del Consejo Monetario.

Con respecto a la integración de la gendarmería katanguesa, se informó de que, después de una declaración hecha por el Primer Ministro Adoula el 7 de enero, un número cada vez mayor de miembros de la misma había comenzado a presentarse a la ONUC o al representante del Gobierno Central en Elisabethville para solicitar que se les reintegrara en el ENC.

En un informe sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de 14 de julio de 1960, 21 de febrero y 24 de noviembre de 1961 (S/5240) distribuido el 4 de febrero, el Secretario General manifestó que el informe más reciente del funcionario encargado de la ONUC (S/5053/Add.15) indicaba que se había terminado una importante fase de la operación en el Congo y que consideraba adecuado y oportuno informar al Consejo de Seguridad acerca del grado en que se había puesto en práctica el mandato que las resoluciones del Consejo de Seguridad habían otorgado a la ONUC y de los aspectos de ese mandato que seguían sin ejecutar, y sugerir después de un análisis de las perspectivas, las tareas que quedaban por realizar y determinar los recursos que se requerían a tal efecto.

Refiriéndose a las recientes operaciones militares emprendidas por tropas de la ONUC a fin de lograr completa libertad de movimiento en todo el territorio de Katanga, el Secretario General manifestaba que se habían visto coronadas por un éxito total. Pero lamentaba profundamente que dichas operaciones hubieran originado la pérdida de algunas vidas y ciertos daños. Agregaba que para una fuerza de paz, incluso tales escaramuzas eran excesivas y unas cuantas bajas, demasiadas.

El Secretario General recordaba que la política y los objetivos de las Naciones Unidas para la República del Congo, tal como habían sido establecidos por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones, eran los siguientes:

a) Mantener la integridad territorial y la independencia política de la República del Congo;

b) Ayudar al Gobierno Central del Congo a restablecer y mantener la legalidad y el orden;

c) Evitar que se produjera una guerra civil en el Congo;

d) Conseguir el retiro y la evacuación inmediata del Congo de todo el personal militar y paramilitar y de los asesores extranjeros que no dependieran del Mando de las Naciones Unidas, así como de todos los mercenarios; y

e) Proporcionar asistencia técnica.

Con respecto al mantenimiento de la integridad territorial y la independencia política, el Secretario General manifestaba que la amenaza más grave había sido la actividad secesionista que desde el 11 de julio de 1960 habían realizado las autoridades provinciales de Katanga. A pesar de las frecuentes declaraciones del Sr. Tshombé de que aceptaba la reintegración, no se había logrado ningún progreso real en este sentido hasta después de terminadas las recientes operaciones militares en Katanga.

No obstante, el Secretario General señalaba que, si las tropas de la ONUC descuidaban la vigilancia o se retiraban demasiado pronto, era probable que volviera a resurgir el movimiento secesionista. En Katanga existían intereses y elementos que siempre estarían en favor de dicho movimiento. Podría producirse una reagrupación y rearme de la gendarmería, o de parte de ella, para organizar una nueva fuerza secesionista.

El Secretario General recordaba que en el Congo había habido otras tentativas separatistas, pero que ninguna había contado con el apoyo financiero otorgado a las pretensiones de Katanga y se encontraban más o menos inactivas. Por fortuna, no parecía existir ninguna amenaza directa contra la independencia del Congo procedente de fuentes exteriores. Así, pues, era posible afirmar que se había cumplido en gran parte el mandato de la operación de las Naciones Unidas relativo a la integridad territorial y la independencia política y que sólo quedaba por desempeñar un papel de vigilante.

En cuanto a la ayuda para restablecer y mantener la legalidad y el orden, el Secretario General manifestaba que parecía que se había restablecido con firmeza la legalidad y el orden en los principales centros de Katanga, y se esperaba que la presencia de la ONUC tendría el mismo efecto en las zonas rurales donde había habido choques entre tropas del ENC y los gendarmes katanguéses. De todas formas, durante el período de transición hasta que Katanga se reintegrara con el resto de la República, el problema de la legalidad

y el orden seguiría siendo delicado. Así lo había reconocido el Gobierno Central, que había accedido por el momento a colocar sus fuerzas de seguridad en el sur de Katanga bajo la jurisdicción del Mando de las Naciones Unidas, y había aceptado, por lo menos en principio, que la entrada de sus unidades armadas en esa zona se efectuara escalonadamente. Se había pedido al funcionario encargado de la ONUC y al comandante de la Fuerza que se entrevistaran con las autoridades congoleñas para tratar de determinar hasta cuándo necesitaría el Gobierno Central la asistencia militar de las Naciones Unidas para mantener la legalidad y el orden.

En lo tocante al mandato de prevenir una guerra civil en el Congo, el Secretario General observaba que, después de la formación en agosto de 1961 de un gobierno de unión nacional y a raíz de la decisión de las autoridades katanguésas de poner fin a sus actividades secesionistas, podía considerarse que dicho mandato se había cumplido en su mayor parte, si bien todavía habría que ejercer durante algún tiempo una observación vigilante y eficaz de la situación. Refiriéndose al retiro del personal militar y paramilitar y de los asesores, así como de los mercenarios, el Secretario General declaraba que se había calculado que había unos 400 mercenarios en las filas de la gendarmería katanguésa al iniciarse las operaciones de diciembre de 1962 y enero de 1963 y que la feliz terminación de dichas operaciones había hecho, al parecer, que la mayoría de los mercenarios, si no todos, hubieran huido de Katanga por la vía de Angola, salvo un pequeño número que se encontraba bajo la custodia de las Naciones Unidas. Así, pues, era posible sacar la conclusión de que el mandato relativo a los mercenarios había quedado prácticamente cumplido. Sin embargo, no se sabía si aún quedaban entre los técnicos que prestaban servicios a las autoridades provinciales katanguésas, o entre los residentes no congoleños del sur de Katanga, algunas personas que hubieran traspasado los límites de las actividades legítimas y hubieran actuado como asesores políticos y posiblemente militares, o como mercenarios. Por lo tanto, no podía descartarse la posibilidad de que hubiera expulsiones por ese motivo.

Con respecto a la asistencia técnica, el Secretario General informaba de que había iniciado consultas con el Gobierno congolés sobre la manera en que debería encauzarse la ayuda que se prestara al país en el porvenir. Desde luego, continuaría la ayuda multilateral o de las Naciones Unidas. Faltaba saber hasta qué punto podía ser oportuno y conveniente prever un aumento de la ayuda bilateral. Aunque las Naciones Unidas habían creído preferible que toda la ayuda para el Congo fuese encauzada o por lo menos aprobada por ellas, resultaba evidente que la Organización no dispondría por sí misma de los recursos que se requerirían para atender a las ingentes necesidades del Congo.

El Secretario General continuaba diciendo que había concluido una fase decisiva de las actividades de las Naciones Unidas en el Congo. Se trataba del período en que las tropas de las Naciones Unidas habían tenido que desempeñar un papel militar activo. Sin embargo, esto no significaba automáticamente que la Organización retiraría sus tropas del país. Se reduciría gradualmente el número de hombres de la Fuerza y no podía excluirse la posibilidad de retirarla del todo en breve.

Al final de su informe, el Secretario General destacaba los principios básicos en que se había fundado la

operación, a saber el principio de no intervención en los asuntos políticos internos del Congo y el de evitar el empleo de la fuerza con fines políticos.

En una carta de fecha 2 de marzo dirigida al Secretario General (S/5249), el Representante Permanente de la URSS, refiriéndose al informe del Secretario General de 4 de febrero, recordó que la misión que debían cumplir las Naciones Unidas en el Congo había sido clara y concretamente proteger a la República del Congo contra la agresión externa y garantizar su independencia política, su unidad y su integridad territorial. Señaló que, si bien en el informe del Secretario General se indicaba que se habían cumplido en gran medida las tareas a que habían tenido que hacer frente las Naciones Unidas en el Congo, en realidad continuaba sin resolver el problema de Katanga, tanto desde el punto de vista político como desde el económico, aunque las operaciones militares de las Naciones Unidas en el Congo hubiesen terminado. Se disponía de indicios considerables de que, en violación directa de las resoluciones del Consejo de Seguridad, un gran número de belgas y de otros mercenarios extranjeros estaban regresando a Katanga junto con diversos tipos de asesores y expertos procedentes de las Potencias coloniales. El representante de la URSS continuaba diciendo que algunas Potencias seguían ejerciendo presión sobre el Gobierno de la República del Congo para que resolviese la cuestión de la reunificación de Katanga y el Congo de una manera que supondría prácticamente la sujeción de la República del Congo a los monopolios extranjeros que dominaban en Katanga. La posición de su país con respecto a esta cuestión había quedado explicada en la respuesta de su Gobierno al llamamiento que el Secretario General había dirigido a los Estados Miembros de las Naciones Unidas el 31 de julio de 1962.

La política fundamental de la Unión Soviética había sido y continuaba siendo que debía darse al pueblo, al Parlamento y al Gobierno de la República del Congo la oportunidad de resolver sus propios asuntos.

Refiriéndose a la presencia de las tropas de las Naciones Unidas en el Congo, el representante de la URSS sostenía que la Carta no autorizaba a las Naciones Unidas a actuar en casos relacionados con el mantenimiento de la legalidad y el orden en un determinado país, ya que ésta era una prerrogativa del gobierno del país respectivo. En consecuencia, era evidente que el mantenimiento de la ONUC en el Congo sólo para desempeñar funciones de policía era una acción que no podía justificarse desde el punto de vista de los principios y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Con respecto a otras cuestiones referentes a las perspectivas de nuevas actividades de las Naciones Unidas en el Congo, expresaba la opinión de que todas estas cuestiones debía decidir las el Consejo de Seguridad. Finalmente, expresaba la creencia de que la incorporación de elementos militares congoleños en las fuerzas armadas de las Naciones Unidas, que estaban bajo las órdenes del Mando de las Naciones Unidas, era incompatible con la soberanía del Congo y contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En una carta (S/5253) de fecha 4 de marzo, el Representante Permanente de Ghana pidió al presidente del Consejo de Seguridad que convocase una reunión a fin de estudiar el informe de la Comisión de Investigación creada por la resolución 1601 (XV)

de la Asamblea General, que figuraba en el documento A/4964 y S/4976 de 11 de noviembre de 1961. En el memorándum explicativo que acompañaba a la carta, el Representante Permanente de Ghana recordaba que en la 942a. sesión celebrada el 20 y 21 de febrero de 1961, el Consejo de Seguridad había aprobado una resolución en cuyo párrafo dispositivo 4 de la parte A se decidía que se iniciara "una investigación inmediata e imparcial con el fin de averiguar las circunstancias que rodearon la muerte del Sr. Lumumba y sus colegas y hacer que se castigue a los responsables de esos crímenes". La Comisión de Investigación, que había sido establecida oficialmente por la resolución 1601 (XV) de la Asamblea General, había cumplido debidamente la tarea que se le había encomendado y había presentado una serie de conclusiones enumeradas en el párrafo 124 de su informe. La Comisión había previsto la realización de actividades complementarias a su informe al manifestar en el párrafo 31 que, "tras presentar este informe, la Comisión suspende su labor en espera de instrucciones de la Asamblea General" en cuanto a sus trabajos futuros. El Representante Permanente de Ghana continuaba diciendo que no había indicios de que desde la fecha de publicación del informe se hubieran adoptado nuevas medidas para lograr los objetivos previstos en la resolución S/4752 del Consejo de Seguridad. A juicio del Gobierno de Ghana, el Consejo de Seguridad, que había iniciado la investigación, debía examinar el informe de la Comisión y decidir acerca de las nuevas medidas que estimara necesarias para descubrir la verdad.

En una carta de fecha 7 de marzo, distribuida a solicitud del remitente en el documento S/5254, el Encargado de Negocios interino del Congo (Leopoldville) transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad un telegrama dirigido por el Ministro de Relaciones Exteriores de su país en relación con la solicitud de Ghana. En el telegrama se manifestaba que el Gobierno del Congo consideraba que la cuestión que había motivado la solicitud de Ghana era estrictamente de la jurisdicción de las instituciones de la República del Congo. En consecuencia, estimaba que la acción de Ghana constituía una abierta intervención en los asuntos internos del Congo y una violación inadmisible de la soberanía de la República del Congo.

En una carta de fecha 11 de marzo (S/5257) el Representante Permanente de Ghana solicitó al Presidente del Consejo que no adoptara ninguna medida en relación con su carta de fecha 4 de marzo. Manifestó que se obraba de esa suerte en vista de las representaciones especiales hechas ante su gobierno por el Gobierno Central del Congo.

En una carta de fecha 16 de marzo, dirigida al Secretario General (S/5277), el Primer Ministro del Congo, refiriéndose a la carta (S/5249) del Representante Permanente de la URSS, recordó que el acuerdo básico que regía las relaciones entre la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo y la República era el texto que se había publicado como documento de las Naciones Unidas el 29 de julio de 1960 (S/4389/Add.5) y manifestó que el Gobierno del Congo, en ejercicio de sus derechos soberanos, declaraba categóricamente que consideraba necesario que la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo permaneciera en la República durante algún tiempo más, en vista de que el ejército congolés, a pesar de los grandes progresos hechos a fin de reorganizarse y obtener mayor eficacia, no podría asumir por sí mismo la tarea de

mantener el orden en todo el vasto territorio del Congo.

El 21 de mayo se distribuyeron como documento S/5240/Add.2 las comunicaciones canjeadas por el Primer Ministro o el Primer Ministro interino del Congo, por una parte, y el Secretario General o el funcionario encargado de la ONUC, por la otra, sobre la cuestión de la ayuda para modernizar y dar adiestramiento a las fuerzas armadas congoleñas. El Gobierno del Congo había informado a la Organización que había decidido pedir ayuda a los siguientes países para modernizar el ENC: 1) Canadá, para escuelas técnicas (comunicaciones); 2) Italia, para la fuerza aérea; 3) Noruega, para la marina; 4) Israel, para el adiestramiento de paracaidistas; 5) Bélgica, para el suministro de técnicos destinados a la sede del ENC y las diversas unidades. También se había pedido a Bélgica que suministrase ayuda en lo relativo a las bases, la gendarmería y las varias escuelas militares. Se había solicitado a los Estados Unidos que

suministraran el equipo necesario para asegurar el éxito de las medidas de asistencia técnica.

Después de un intercambio de comunicaciones, el Primer Ministro había informado al Secretario General el 12 de mayo de la decisión de su Gobierno de proceder inmediatamente a la reorganización del ENC y de solicitar con tal fin ayuda bilateral de los países que estuvieran dispuestos a suministrarla. Esto no significaba en modo alguno que la República del Congo no deseara que las Naciones Unidas se asociaran a dicha reorganización; por el contrario, le complacía observar que las Naciones Unidas podrían poner a disposición de la República los servicios de expertos, pues consideraría dicha asistencia como la continuación de la cooperación que su Gobierno deseaba mantener e intensificar.

En la última carta contenida en ese documento se expresaba que se había llegado a un acuerdo en principio entre los Gobiernos del Congo y de Nigeria con respecto a la prestación de asistencia por Nigeria para la reorganización de las fuerzas de policía del Congo.

### **Capítulo 10**

#### **INFORMES SOBRE EL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACIFICO, CONSIDERADO ZONA ESTRATEGICA**

Con una nota de fecha 19 de julio de 1962 (S/5143), el Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad el informe presentado por el Consejo de Administración Fiduciaria en conformidad con el Artículo 83 de la Carta, sobre el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, correspondiente al período comprendido entre el 20 de julio de 1961 y el 16 de julio de 1962. El informe se refería a las actividades del Consejo de Administración Fiduciaria respecto de dicho Territorio y a su examen de las condiciones imperantes en el mismo.

El 21 de mayo de 1963 el Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad el informe que había recibido del Gobierno de los Estados Unidos (S/5137) sobre la administración del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, correspondiente al período

comprendido entre el 1° de julio de 1961 y el 30 de junio de 1962, presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución aprobada por el Consejo en su 415a. sesión, celebrada el 7 de marzo de 1949.

El 11 de julio de 1963 el Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad el informe del Consejo de Administración Fiduciaria (S/5340) sobre el Territorio en fideicomiso, correspondiente al período comprendido entre el 17 de julio de 1962 y el 23 de junio de 1963. El informe se refería a las actividades del Consejo de Administración Fiduciaria y a su examen de las condiciones imperantes en el Territorio, así como a la Misión Visitadora que se trasladaría próximamente al Territorio en fideicomiso.

### **Capítulo 11**

#### **COMUNICACIONES RELATIVAS AL IRIAN OCCIDENTAL (NUEVA GUINEA OCCIDENTAL)**

##### **A. Comunicaciones del Gobierno de los Países Bajos**

En cartas de fecha 10 y 14 de agosto de 1962 (S/5155 y S/5157), el representante de los Países Bajos informó al Secretario General interino del desembarco en Nueva Guinea Occidental de agentes de infiltración y paracaidistas indonesios. Su Gobierno protestaba contra estos actos de Indonesia en un momento en que se estaban realizando negociaciones entre los Países Bajos e Indonesia bajo la responsabilidad del Secretario General interino.

##### **B. Acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino de los Países Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental)**

Por carta de fecha 21 de septiembre de 1962 (S/5169), el Secretario General interino transmitió al

Presidente del Consejo de Seguridad los textos de un acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino de los Países Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental), así como otros documentos conexos. En la carta se indicaba que el acuerdo se había firmado en la Sede de las Naciones Unidas el 15 de agosto de 1962, que se habían canjeado instrumentos de ratificación entre las Partes el 20 de septiembre y que, conforme a las disposiciones del Acuerdo, éste había entrado en vigor el 21 de septiembre al aprobarse la resolución 1752 (XVII) de la Asamblea General. En virtud de esta resolución, la Asamblea tomaba nota del Acuerdo, reconocía la función conferida en él al Secretario General y autorizaba a éste a dar cumplimiento a las tareas que se le confiaban en el Acuerdo.

En el Acuerdo se disponía que, poco después de entrar en vigor el mismo, los Países Bajos traspasarían



la administración del Territorio a una Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones Unidas (AEPNU) que el Secretario General establecería bajo su autoridad. La AEPNU, que estaría dirigida por un Administrador de las Naciones Unidas, debía traspasar oportunamente, después del 1° de mayo de 1963, la administración a Indonesia. El Acuerdo contenía ciertas garantías para la población del Territorio, incluso disposiciones detalladas respecto al ejercicio del derecho de libre determinación conforme a arreglos que había de hacer Indonesia con el asesoramiento, la asistencia y la participación del Secretario General, quien designaría a este efecto a un representante de

las Naciones Unidas. Este representante informaría al Secretario General sobre las disposiciones adoptadas para el acto de libre determinación, el cual se efectuaría antes de finalizar el año 1969. Todos los gastos en que incurriesen las Naciones Unidas en la aplicación del Acuerdo serían sufragados por los Gobiernos de Indonesia y los Países Bajos por partes iguales.

El 1° de mayo de 1963, en conformidad con el Acuerdo de 15 de agosto de 1962, el Administrador de la AEPNU procedió a traspasar la autoridad al representante del Gobierno de la República de Indonesia.

## **Capítulo 12**

### **DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SITUACION EN ANGOLA**

Por una carta de fecha 13 de noviembre de 1962 (S/5205), dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el Presidente de la Subcomisión encargada de examinar la situación en Angola transmitió el informe que dicha Subcomisión había preparado en conformidad con las resoluciones 1605 (XV) y 1742 (XVI) de la Asamblea General, de fecha 20 de abril de 1961 y 30 de enero de 1962 respectivamente, y de la resolución S/4835 del Consejo de Seguridad, de 9 de junio de 1961.

Por una carta de fecha 22 de enero de 1963 (S/5239), dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario General transmitió el texto de la resolución 1819 (XVII) de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1962, relativa al tema "La situación en Angola". Se señalaba especialmente a la atención del Consejo de Seguridad el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución, en el que la Asamblea General pedía al Consejo que adoptase las medidas apropiadas, incluso sanciones, para que Portugal acatase esa resolución y las resoluciones anteriores de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

## **Capítulo 13**

### **CARTA DEL SECRETARIO GENERAL, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1962, RELATIVA A LOS PROBLEMAS EXISTENTES ENTRE CAMBOYA Y TAILANDIA**

En una carta de fecha 18 de diciembre de 1962 el Secretario General recordó que, por solicitud de Camboya y Tailandia, en octubre había designado al Sr. Nils Göran Gussing como su representante personal a fin de investigar los problemas que se habían suscitado entre esos dos Gobiernos. El Secretario General informaba de que, si bien quedaban graves problemas por resolver, las actividades del representante de las Naciones Unidas habían coincidido con una disminución de la tirantez entre los dos países. Como resultado de nuevas conversaciones celebradas con los Representantes Permanentes de Camboya y de Tailandia, recientemente se había llegado a un acuerdo sobre la conveniencia de designar a un Representante Especial en la zona, por un período de un año a partir del

1° de enero de 1963. El Representante Especial se pondría a la disposición de las partes a fin de ayudarles a resolver todos los problemas existentes o que pudiesen suscitarse entre ellas. El más inmediato de dichos problemas se refería al restablecimiento del acuerdo de 15 de diciembre de 1960 sobre ataques en la prensa y en la radio, y a la supresión de algunas restricciones al tránsito aéreo impuestas a nacionales de ambos países. Se confiaba en que oportunamente se consideraría la posibilidad de reanudar las relaciones diplomáticas. Como prueba de su buena voluntad, ambos Gobiernos se habían manifestado dispuestos a compartir por igual los gastos que ocasionase la misión del Representante Especial, quien contaría con la colaboración de un reducido personal.

## **Capítulo 14**

### **COMUNICACIONES RELATIVAS A LA CUESTION DEL CONFLICTO RACIAL EN EL AFRICA DEL SUR**

En una carta de fecha 14 de enero de 1963 (S/5235), dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario General transmitió el texto de la resolución 1761 (XVII), titulada "La política de

*apartheid* del Gobierno de la República de Sudáfrica", que había sido aprobada por la Asamblea General en su 1165a. sesión plenaria, celebrada el 6 de noviembre de 1962. En la carta se señalaba a la atención de los

miembros del Consejo el párrafo 8 de la parte dispositiva de la resolución, en el que se pedía al Consejo de Seguridad que tomase medidas apropiadas, incluso sanciones, para lograr que Sudáfrica cumpliera las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión y que, de ser necesario, considerase la aplicación del Artículo 6 de la Carta.

En una carta de fecha 6 de mayo de 1963 (S/5310), el Presidente del Comité Especial encargado de examinar la política de *apartheid* del Gobierno de la República de Sudáfrica presentó al Consejo de Seguridad un informe provisional (A/5418), aprobado unánimemente el 6 de mayo de 1963 por dicho Comité y preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea General, de fecha 6 de noviembre de 1962.

En una carta de fecha 11 de julio de 1963 (S/5348), los representantes de Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Árabe

Unida, República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanganika, Togo, Túnez y Uganda pidieron al Presidente del Consejo de Seguridad que convocase a una reunión del Consejo para examinar la explosiva situación existente en la República de Sudáfrica, provocada por la intolerable política de *apartheid* del Gobierno de dicho país, y que adoptase las medidas requeridas por la situación. Acompañaba a dicha carta un memorándum explicativo que contenía párrafos de una resolución relativa a la *apartheid* que había sido aprobada por unanimidad por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno Africanos, celebrada en Addis Abeba del 22 al 25 de mayo de 1963. En la carta se decía que dicha resolución expresaba la profunda preocupación de los Jefes de Estado y de Gobierno Africanos ante el constante empeoramiento de la situación en la República de Sudáfrica, y reafirmaba que la continua negativa del Gobierno de Sudáfrica a dar cumplimiento a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la cuestión del conflicto racial en dicho país no sólo constituía una fuente de tirantez internacional sino, también, una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

## Capítulo 15

### COMUNICACIONES RELATIVAS A LA CUESTION INDIA-PAKISTAN

En una carta de fecha 16 de marzo de 1963 (S/5263 y Corr.1), el Encargado de Negocios de la delegación de la India señaló a la atención del Consejo de Seguridad el acuerdo sobre fronteras entre la China y el Pakistán firmado en Pekín el 2 de marzo de 1963, y por el cual, a juicio de la India, los dos signatarios se habían repartido ilegalmente una parte del territorio de la Unión India, en Jammu y Cachemira. La India declaraba que el Pakistán había firmado dicho acuerdo con pleno conocimiento de que el mismo entrañaba violaciones de la soberanía de la India y de la resolución del Consejo de Seguridad de fecha 17 de enero de 1948. El 3 de diciembre de 1959 en una carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad (S/4242), el Pakistán, a la vez que se refería a la agresión china contra Ladakh y a la tentativa de la India de obtener la evacuación de esa zona mediante negociaciones pacíficas había declarado que no reconocería validez a ninguna posición adoptada o ajuste hecho por cualquiera de ambas partes en esa controversia. El Pakistán había reiterado esa posición en otra carta, de fecha 25 de marzo de 1960 (S/4278). Contrariamente a la actitud adoptada entonces el Pakistán había decidido concertar un acuerdo con la China, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la condición jurídica de Jammu y Cachemira. Cuando el Pakistán había publicado un comunicado en el sentido de que dichos países habían convenido en realizar negociaciones respecto de la demarcación de la frontera, la India había protestado formalmente ante el Pakistán contra tal procedimiento. Nuevamente, cuando en diciembre de 1962 los Gobiernos de la China y el Pakistán anunciaron un acuerdo de principio sobre la delineación de la frontera de Cachemira, ocupada por el Pakistán, con Sinkiang, la India había presentado una protesta formal contra ese "acuerdo de principio". Así pues, no obstante habersele señalado su ilegalidad, el Pakistán había

decidido firmar un acuerdo con la China acerca de una región en la cual ninguno de esos países tenía *locus standi* alguno, excepto el de agresor. El 5 de marzo de 1963 la India había presentado una protesta al Pakistán en ese sentido.

La India envió adjunta a su carta una copia del acuerdo entre la China y el Pakistán, así como copias de sus protestas ante el Gobierno del Pakistán con respecto a dicho acuerdo.

En una carta de fecha 30 de marzo de 1963 (S/5275), el representante de la China, después de referirse a la carta de la India de fecha 16 de marzo (S/5263 y Corr.1) sobre la cuestión del acuerdo de fronteras entre la China y el Pakistán, manifestó que en la 1012a. sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 15 de junio de 1962, la delegación de la China, refiriéndose a las negociaciones que, según se informaba, se estaban realizando a la sazón entre "el Pakistán y los comunistas chinos" había declarado que el resultado de las mencionadas negociaciones no obligaría en nada al Gobierno y al pueblo de la China, ya que "los comunistas chinos no pueden representar al pueblo chino ni tienen derecho alguno para concertar, en nombre de la China, ningún tratado o acuerdo con ningún país". Esa continuaba siendo la posición del Gobierno de la China con respecto al acuerdo de fronteras de que se había informado.

En una carta de fecha 10 de abril de 1963 (S/5280 y Corr.1), el representante del Pakistán manifestó que la carta de la India, de fecha 16 de marzo (S/5263 y Corr.1), en que se criticaba el acuerdo de fronteras concertado por el Pakistán con la China, contenía alegaciones sin ningún fundamento de hecho ni de derecho e intentaba tergiversar ciertos hechos de los que había constancia en las Naciones Unidas. El acuerdo de fronteras entre la China y el Pakistán no "repartía" parte alguna del territorio de la Unión India entre el Pakistán y la China, puesto que el



territorio en cuestión era el de Jammu y Cachemira, el cual, desde luego, no formaba parte del territorio de la Unión India. En realidad no se trataba de la repartición de ningún territorio, puesto que el acuerdo tenía por única finalidad delimitar y demarcar oficialmente una frontera basándose en la línea tradicional y consuetudinaria, que incluía los accidentes topográficos. El acuerdo no constituía una violación de la resolución del Consejo de Seguridad de 17 de enero de 1948, como alegaba la India. En esa resolución se había instado a las partes a adoptar todas las medidas a su alcance destinadas a mejorar la situación. A juicio del Pakistán, un acuerdo para delimitar y demarcar una frontera con una Potencia extranjera a los efectos de evitar toda confusión era, evidentemente, una medida destinada a mejorar la situación. El hecho de que, por su parte, la India no hubiese querido o no hubiese podido cumplir un propósito análogo, no alteraba el carácter pacífico de la medida adoptada por el Pakistán para garantizar la tranquilidad en una frontera cuya defensa estaba en ese momento bajo su control. Más aún, el acuerdo concertado por el Pakistán no provocaba ningún cambio esencial en la situación en Jammu y Cachemira, como también lo requería la misma resolución. La India se había referido luego a la posición del Pakistán en ocasión de la controversia entre la China y la India acerca de la región de Ladakh, en el Estado de Jammu y Cachemira. Sin embargo, el representante de la India había hecho, a este respecto, sólo una cita parcial de una comunicación de la delegación del Pakistán de fecha

3 de diciembre de 1959 (S/4242) puesto que el Pakistán había declarado en esa oportunidad que "mientras no se decidiese el porvenir de Cachemira, ninguna posición adoptada o ajuste hecho por cualquiera de ambas partes en la controversia actual tendría validez ni alteraría la condición jurídica del territorio de Jammu y Cachemira ni las exigencias de la desmilitarización y la libre determinación del Estado, como habían quedado establecidas por las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Comisión de las Naciones Unidas". El Pakistán había añadido que consideraba como una cuestión de principio axiomático que correspondía a la autoridad soberana libremente surgida del pueblo de Jammu y Cachemira y aceptada por él efectuar cualesquier ajustes de sus fronteras con cualquier Potencia extranjera. Esa había sido en todo momento la posición del Pakistán, y por tal razón en el artículo 6 del acuerdo de fronteras concertado con China se expresaba que las dos partes habían convenido en que, una vez zanjada la controversia sobre Cachemira, la autoridad soberana interesada reanudaría las negociaciones con el Gobierno de la República Popular de China con respecto a la frontera, según se la describía en el artículo 2 del acuerdo, a los efectos de firmar un tratado de fronteras que reemplazaría dicho acuerdo. Así pues, el acuerdo de fronteras entre la China y el Pakistán no prejuzgaba de ningún interés eventual que la India pudiese derivar de las resoluciones conjuntamente aceptadas de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, de 13 de agosto de 1948 y 5 de enero de 1949.

## Capítulo 16

### COMUNICACIONES RELATIVAS A LOS TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACION PORTUGUESA

En una carta de fecha 5 de abril de 1963 (S/5276), el Secretario General transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad el texto de la resolución relativa a los territorios bajo administración portuguesa aprobada el 4 de abril de 1963 (A/AC.109/38), por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

En una carta de fecha 11 de julio de 1963 (S/5347), los representantes de Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Árabe Unida, República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanganyika,

Togo, Túnez y Uganda, solicitaron al Presidente del Consejo de Seguridad que convocase una reunión del Consejo, lo antes posible, para considerar la situación reinante en los territorios bajo la dominación portuguesa. En la carta se afirmaba que la situación creada por la persistente negativa del Gobierno de Portugal a aplicar las disposiciones de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y la resolución de 9 de junio de 1961 del Consejo de Seguridad constituía una amenaza para la seguridad de Africa y para la paz internacional. La carta expresaba la profunda preocupación de los Jefes de Estado africanos quienes, en la Conferencia celebrada en Addis Abeba del 22 al 25 de mayo de 1963, habían aprobado una resolución sobre esta cuestión, algunos de cuyos párrafos se incluían en un memorándum explicativo anexo a la carta.

## Capítulo 17

### COMUNICACION RELATIVA A LA CUESTION DE COREA

En una nota de fecha 7 de junio de 1963 (S/5327), el representante de los Estados Unidos informó al Consejo de Seguridad que, con efectividad al 1° de agosto de 1963, el Presidente de los Estados Unidos había designado al General Hamilton H. Howze para reemplazar al General Guy S. Meloy, Jr., en el cargo de Jefe de las Fuerzas Militares que los Estados Miembros de las Naciones Unidas habían facilitado al Mando Unificado bajo los Estados Unidos, en cumplimiento de la resolución de 7 de julio de 1950 del Consejo de Seguridad.

## **Capítulo 18**

### **COMUNICACION RELATIVA A LA SITUACION EN EL AFRICA SUDOCIDENTAL.**

En una carta de fecha 14 de mayo de 1963 (S/5322), el Secretario General transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad el texto de la resolución sobre la cuestión del Africa Sudoccidental aprobada, el 10 de mayo de 1963 (A/AC.109/43), por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

## **Capítulo 19**

### **COMUNICACION RELATIVA A RHODESIA DEL SUR**

En una carta de fecha 21 de junio de 1963 (S/5337), el Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad el texto de la resolución sobre la cuestión de Rhodesia del Sur aprobada por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales en su 177a. sesión, celebrada el 20 de junio de 1963 (A/AC.109/45).

## **Capítulo 20**

### **COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA ARABE DEL YEMEN Y DEL REINO UNIDO**

En un telegrama de fecha 28 de febrero de 1963 (S/5248), el Presidente de la República Árabe del Yemen se quejó de la llegada de fuerzas británicas a la zona de Hareb y de que aviones británicos habían lanzado circulares en apoyo de los elementos infiltrados desde Arabia Saudita para ayudar al destronado Imam. Añadía que esto constituía una clara violación de la soberanía del Yemen, así como una amenaza a la paz mundial. En su respuesta (S/5250), de fecha 4 de marzo, el representante del Reino Unido describió la serie de acontecimientos relativos a la incursión de las fuerzas republicanas yemenitas en el Territorio de la Federación de la Arabia Meridional. Afirmó que las autoridades de la República habían enviado fuerzas de tierra a la Federación. Después de las debidas advertencias, la artillería británica había abierto fuego para expulsar a las fuerzas yemenitas del territorio de la Federación. El representante del Reino Unido afirmó que el relato de los hechos contenido en el mensaje yemenita del 28 de febrero era inexacto.

En una carta de fecha 24 de junio (S/5338), el representante de la República del Yemen protestó contra la continua agresión armada por parte de las fuerzas británicas en las fronteras de la República Árabe del Yemen desde el 11 de junio. Pidió que se tomaran medidas urgentes para poner término a esta agresión y lograr la evacuación de las fuerzas británicas del Yemen. En la carta se advertía que si la agresión no cesaba, el Gobierno de la República Árabe del Yemen utilizaría todos los medios a su alcance para ponerle fin. En su respuesta de fecha 1º de julio (S/5343), el representante del Reino Unido negó las afirmaciones yemenitas y presentó una lista de incidentes de agresión iniciado por las fuerzas republicanas yemenitas en la frontera de la Federación de la Arabia Meridional entre el 3 y el 25 de junio. Añadió que su Gobierno tomaría todas las medidas necesarias para defender al territorio de la Federación de conformidad con las obligaciones que había asumido en virtud de un tratado.

## **Capítulo 21**

### **COMUNICACIONES DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS, DEL IRAK Y DE LA REPUBLICA ARABE SIRIA**

En una carta de fecha 9 de julio de 1963 (S/5345 y Corr.1), el representante de la URSS afirmó que se habían iniciado operaciones militares en gran escala contra el pueblo kurdo en el norte del Irak. Señalaba que esta política de represión creaba la amenaza de que se extendiese el conflicto y estaba minando la paz en el Cercano Oriente y el Oriente Medio. Según las informaciones disponibles, unidades militares procedentes de Estados vecinos, entre ellas un batallón de Siria, estaban prestando ayuda a las autoridades iraquesas contra el pueblo kurdo.

El representante de la URSS añadía que el establecimiento de bases junto a las fronteras soviéticas creaba una amenaza para la seguridad de varios Estados, entre ellos la Unión Soviética. Si la intervención extranjera continuaba, otros Estados podrían verse obligados a tomar medidas para eliminar esa intervención y proteger su propia seguridad. El Gobierno de la Unión Soviética creía que podría resultar necesario convocar una reunión del Consejo de Seguridad para poner fin a tal intervención.

En una carta de fecha 10 de julio (S/5346), el representante del Irak protestó contra la intervención de la Unión Soviética en los asuntos internos del Irak. Los recientes actos y declaraciones de la Unión Soviética con respecto a la situación en el norte del Irak, constituían una violación de la Carta. Negó las afirmaciones relativas a la participación de unidades militares sirias en las operaciones del norte del Irak. Agregó que se realizaban operaciones militares limitadas contra un grupo de bandidos. De continuar la intervención soviética en los asuntos del Irak ello no podría dejar de tener las más graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales.

En una carta de fecha 12 de julio (S/5349 y Corr.1), el representante de la República Árabe Siria transmitió

la declaración formulada el 11 de julio por el Ministro de Relaciones Exteriores de Siria en la que el Gobierno de este país afirmaba que consideraba el movimiento de Barzani en el norte del Irak como un acto de insubordinación, dentro de la esfera de competencia del Irak, y que toda intervención extranjera era contraria a las disposiciones del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta. El Gobierno de Siria negaba que se hubiese enviado al Irak ninguna unidad militar siria para ayudar a sofocar el movimiento. En la declaración se añadía que, como países liberados, Siria y el Irak aplicaban una política de no alineamiento que les impedía cooperar con países cuyos objetivos eran imperialistas.

## APENDICES

### I. Representantes, representantes suplentes y representantes interinos acreditados ante el Consejo de Seguridad

Durante el período a que se refiere este informe, fueron acreditados ante el Consejo de Seguridad los siguientes representantes y representantes suplentes e interinos:

#### *Brasil<sup>a</sup>*

Sr. Geraldo de Carvalho Silos  
Sr. Carlos Alfredo Bernardes  
Sr. Carlos dos Santos Veras  
Sr. Antonio Houaiss

#### *Chile<sup>b</sup>*

Sr. Daniel Schweitzer  
Sr. Humberto Díaz Casanueva

#### *China*

Dr. Tingfu F. Tsiang  
Sr. Liu Chieh  
Sr. Yu Chi Hsueh  
Dr. Chun-Ming Chang

#### *Estados Unidos de América*

Sr. Adlai E. Stevenson  
Sr. Francis T. P. Plimpton  
Sr. Charles W. Yost

#### *Filipinas<sup>a</sup>*

Dr. Jacinto Castel Borja  
Sr. Privado G. Jiménez  
Sr. Amelito Mutuc  
Sr. Joaquín M. Elizalde  
Sr. Hortencio J. Brillantes

#### *Francia*

Sr. Armand Béard  
Sr. Roger Seydoux  
Sr. Pierre Millet  
Sr. Claude Arnaud

<sup>a</sup> Su período de funciones comenzó el 1° de enero de 1963.

<sup>b</sup> Su período de funciones terminó el 31 de diciembre de 1962.

#### *Ghana*

Sr. Alex Quaison-Sackey  
Sr. Kenneth K. S. Dadzie  
Sr. Nathan Anang Quao

#### *Irlanda<sup>b</sup>*

Sr. Frederick H. Boland  
Sr. Tadhg O'Sullivan

#### *Marruecos<sup>a</sup>*

Sr. Ahmed Taïbi Benhima  
Sr. Dey Ould Sidi Baba

#### *Noruega<sup>a</sup>*

Sr. Sivert A. Nielsen  
Sr. Ole Algard

#### *Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte*

Sir Patrick Dean  
Sr. C. T. Crowe  
Sr. R. W. Jackling  
Sr. A. H. Campbell

#### *República Árabe Unida<sup>b</sup>*

Sr. Mahmoud Riad  
Sr. Mohamed H. El-Zayyat

#### *Rumania<sup>b</sup>*

Profesor Mihail Haseganu  
Sr. Mircea Malitza  
Sr. Corneliu Bogdan

#### *Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas*

Sr. Valerian Aleksandrovich Zorin  
Dr. Nikolai Trofimovich Fedorenko  
Sr. Platon Dmitrievich Morozov

#### *Venezuela*

Dr. Carlos Sosa Rodríguez  
Dr. Tulio Alvarado  
Dr. Leonardo Díaz González

### II. Presidentes del Consejo de Seguridad

Los representantes que se citan a continuación ejercieron el cargo de Presidente del Consejo de Seguridad durante el período a que se refiere este informe:

#### *Ghana*

Sr. Alex Quaison-Sackey (16 a 31 de julio de 1962)

#### *Irlanda*

Sr. Frederick H. Boland (1° a 31 de agosto de 1962)

#### *Rumania*

Profesor Mihail Haseganu (1° a 30 de septiembre de 1962)

#### *Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas*

Sr. Valerian Aleksandrovich Zorin (1° a 31 de octubre de 1962)

#### *República Árabe Unida*

Sr. Mahmoud Riad (1° a 30 de noviembre de 1962)

#### *Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte*

Sir Patrick Dean (1° a 31 de diciembre de 1962)

#### *Estados Unidos de América*

Sr. Adlai E. Stevenson (1° a 31 de enero de 1963)

**Venezuela**

Dr. Carlos Sosa Rodríguez (1° a 28 de febrero de 1963)

**Brasil**

Sr. Geraldo de Carvalho Silos (1° a 31 de marzo de 1963)

**China**

Sr. Liu Chieh (1° a 30 de abril de 1963)

**Francia**

Sr. Roger Seydoux (1° a 31 de mayo de 1963)

**Ghana**

Sr. Alex Quaison-Sackey (1° a 30 de junio de 1963)

**Marruecos**

Sr. Ahmed Taibi Benhima (1° a 15 de julio de 1963)

### III. Sesiones celebradas por el Consejo de Seguridad durante el período de 16 de julio de 1962 a 15 de julio de 1963

<i>Sesión</i>	<i>Punto del orden del día</i>	<i>Fecha</i>
1017a.	Admisión de nuevos Miembros	26 de julio de 1962
1018a.	<i>Idem</i>	12 de septiembre de 1962
1019a. (Privada)	Examen del informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea General	13 de septiembre de 1962
1020a.	Admisión de nuevos Miembros	4 de octubre de 1962
1021a.	<i>Idem</i>	15 de octubre de 1962
1022a.	Carta de fecha 22 de octubre de 1962 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de los Estados Unidos de América (S/5181); Carta de fecha 22 de octubre de 1962 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Cuba (S/5183); Carta de fecha 23 de octubre de 1962 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente Adjunto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (S/5186)	23 de octubre de 1962
1023a.	<i>Idem</i>	24 de octubre de 1962
1024a.	<i>Idem</i>	24 de octubre de 1962
1025a.	<i>Idem</i>	25 de octubre de 1962
1026a. (Privada)	Cuestión de una recomendación para el nombramiento de Secretario General de las Naciones Unidas	30 de noviembre de 1962

<i>Sesión</i>	<i>Punto del orden del día</i>	<i>Fecha</i>
1027a.	Carta de fecha 10 de abril de 1963 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios Interino de la Misión Permanente del Senegal (S/5279)	17 de abril de 1963
1028a.	<i>Idem</i>	18 de abril de 1963
1029a.	<i>Idem</i>	19 de abril de 1963
1030a.	<i>Idem</i>	19 de abril de 1963
1031a.	<i>Idem</i>	22 de abril de 1963
1032a.	<i>Idem</i>	23 de abril de 1963
1033a.	Carta de fecha 10 de abril de 1963 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios Interino de la Misión Permanente del Senegal (S/5279)	24 de abril de 1963
1034a.	Admisión de nuevos Miembros	7 de mayo de 1963
1035a.	Telegrama de fecha 5 de mayo de 1963 dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití (S/5302)	8 de mayo de 1963
1036a.	<i>Idem</i>	9 de mayo de 1963
1037a.	Informes del Secretario General al Consejo de Seguridad acerca de los acontecimientos relativos al Yemen (S/5298, S/5321, S/5323 y S/5325)	10 de junio de 1963
1038a.	<i>Idem</i>	11 de junio de 1963
1039a.	<i>Idem</i>	11 de junio de 1963

### IV. Representantes, presidentes y secretarios principales del Comité de Estado Mayor

#### A. REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS AGRUPADOS POR DELEGACIÓN

**CHINA**

General Wang Shu-ming, Fuerza Aérea china  
 Teniente General Lu Fu-ning, Ejército chino  
 Contraalmirante Chang Hsiang-chi, Armada china

*Período de funciones desde el 16 de julio de 1962*

16 de julio de 1962 hasta el presente  
 16 de julio de 1962 hasta el presente  
 16 de julio de 1962 hasta el presente

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Teniente General G. H. Davidson, Ejército de los EE.UU.  
 Vicealmirante Ch. Wellborn, Jr., Armada de los EE.UU.  
 Vicealmirante H. T. Deutermann, Armada de los EE.UU.  
 Teniente General R. W. Burns, Fuerza Aérea de los EE.UU.

16 de julio de 1962 hasta el presente  
 16 de julio de 1962 a 31 de enero de 1963  
 31 de enero de 1963 hasta el presente  
 16 de julio de 1962 hasta el presente



# A. REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS AGRUPADOS POR DELEGACIÓN (continuación)

FRANCIA		Periodo de funciones desde el 16 de julio de 1962
General de Brigada P. Gouraud, Ejército francés		16 de julio de 1962 a 2 de agosto de 1962
General de Brigada J. Compagnon, Ejército francés		2 de agosto de 1962 hasta el presente
Contraalmirante J. Guérin, Armada francesa		16 de julio de 1962 hasta el presente
General de División Aérea H. M. de Rancourt de Mimerand, Fuerza Aérea francesa		16 de julio de 1962 hasta el presente
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE		
General de División J. M. McNeill, Ejército británico		16 de julio de 1962 a 26 de febrero de 1963
General de División R. E. T. St. John, Ejército británico		26 de febrero de 1963 hasta el presente
Vicealmirante Sir William Crawford		16 de julio de 1962 a 26 de febrero de 1963
Contraalmirante J. F. D. Bush		26 de febrero de 1963 hasta el presente
Vicemariscal del Aire R. H. E. Emson, Real Fuerza Aérea		16 de julio de 1962 a 21 de marzo de 1963
Vicemariscal del Aire Ian G. Esplin, Real Fuerza Aérea		22 de marzo de 1963 hasta el presente
UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS		
Teniente General V. A. Dubovik, Ejército soviético		16 de julio de 1962 hasta el presente
Contraalmirante B. D. Yashin, Armada de la URSS		16 de julio de 1962 a 29 de octubre de 1962
Vicealmirante L. K. Bekrenev, Armada de la URSS		29 de octubre de 1962 hasta el presente
General de División M. N. Kostiuik, Fuerza Aérea de la URSS		16 de julio de 1962 a 7 de agosto de 1962
General de División A. N. Chizhov, Fuerza Aérea de la URSS		7 de agosto de 1962 hasta el presente

## B. PRESIDENTES DE LAS SESIONES

Sesión	Fecha	Presidente	Delegación
448a.	26 de julio de 1962	General Wang Shu-ming, Fuerza Aérea china	China
449a.	9 de agosto de 1962	General de División Aérea H. M. de Rancourt de Mimerand, Fuerza Aérea francesa	Francia
450a.	23 de agosto de 1962	General de Brigada J. Compagnon, Ejército francés	Francia
451a.	6 de septiembre de 1962	Teniente General V. A. Dubovik, Ejército soviético	URSS
452a.	20 de septiembre de 1962	Contraalmirante B. D. Yashin, Armada de la URSS	URSS
453a.	4 de octubre de 1962	General de División J. M. McNeill, Ejército británico	Reino Unido
454a.	18 de octubre de 1962	Vicealmirante Sir William Crawford	Reino Unido
455a.	1º de noviembre de 1962	Vicealmirante Ch. Wellborn, Jr., Armada de los EE.UU.	Estados Unidos
456a.	15 de noviembre de 1962	Vicealmirante Ch. Wellborn, Jr., Armada de los EE.UU.	Estados Unidos
457a.	29 de noviembre de 1962	Vicealmirante Ch. Wellborn, Jr., Armada de los EE.UU.	Estados Unidos
458a.	13 de diciembre de 1962	General Wang Shu-ming, Fuerza Aérea china	China
459a.	27 de diciembre de 1962	General Wang Shu-ming, Fuerza Aérea china	China
460a.	10 de enero de 1963	General de Brigada J. Compagnon, Ejército francés	Francia
461a.	24 de enero de 1963	General de División Aérea H. M. de Rancourt de Mimerand, Fuerza Aérea francesa	Francia
462a.	7 de febrero de 1963	Teniente General V. A. Dubovik, Ejército soviético	URSS
463a.	21 de febrero de 1963	Teniente General V. A. Dubovik, Ejército soviético	URSS
464a.	7 de marzo de 1963	Contraalmirante J. F. D. Bush	Reino Unido
465a.	21 de marzo de 1963	Comodoro J. G. B. Cooke	Reino Unido
466a.	4 de abril de 1963	Teniente General G. H. Davidson, Ejército de los EE.UU.	Estados Unidos
467a.	18 de abril de 1963	Teniente General G. H. Davidson, Ejército de los EE.UU.	Estados Unidos
468a.	2 de mayo de 1963	General Wang Shu-ming, Fuerza Aérea china	China
469a.	16 de mayo de 1963	General Wang Shu-ming, Fuerza Aérea china	China
470a.	29 de mayo de 1963	General Wang Shu-ming, Fuerza Aérea china	China
471a.	13 de junio de 1963	Contraalmirante J. G. M. Guérin, Armada francesa	Francia
472a.	27 de junio de 1963	General de División Aérea H. M. de Rancourt de Mimerand, Fuerza Aérea francesa	Francia
473a.	11 de julio de 1963	Teniente General V. A. Dubovik, Ejército soviético	URSS

# C. SECRETARIOS PRINCIPALES

<i>Sesión</i>	<i>Fecha</i>	<i>Secretario Principal</i>	<i>Delegación</i>
448a.	26 de julio de 1962	Teniente Coronel J. Soong, Ejército chino	China
449a.	9 de agosto de 1962	Capitán de Fragata A. Gélinet, Armada francesa	Francia
450a.	23 de agosto de 1962	Capitán de Fragata A. Gélinet, Armada francesa	Francia
451a.	6 de septiembre de 1962	Teniente Coronel A. B. Senkin, Ejército soviético	URSS
452a.	20 de septiembre de 1962	Teniente Coronel A. B. Senkin, Ejército soviético	URSS
453a.	4 de octubre de 1962	Coronel T. H. Sergeant, Ejército británico	Reino Unido
454a.	18 de octubre de 1962	Coronel J. C. d'E. Coke, Real Infantería de Marina	Reino Unido
455a.	1° de noviembre de 1962	Coronel C. F. Nelson, Ejército de los EE.UU.	Estados Unidos
456a.	15 de noviembre de 1962	Capitán F. W. Pump, Armada de los EE.UU.	Estados Unidos
457a.	29 de noviembre de 1962	Capitán F. W. Pump, Armada de los EE.UU.	Estados Unidos
458a.	13 de diciembre de 1962	Teniente Coronel J. Soong, Ejército chino	China
459a.	27 de diciembre de 1962	Teniente Coronel J. Soong, Ejército chino	China
460a.	10 de enero de 1963	Capitán de Fragata A. Gélinet, Armada francesa	Francia
461a.	24 de enero de 1963	Capitán de Fragata A. Gélinet, Armada francesa	Francia
462a.	7 de febrero de 1963	Teniente Coronel A. B. Senkin, Ejército soviético	URSS
463a.	21 de febrero de 1963	Teniente Coronel A. B. Senkin, Ejército soviético	URSS
464a.	7 de marzo de 1963	Coronel J. L. Carter, Real Infantería de Marina	Reino Unido
465a.	21 de marzo de 1963	Capitán de Fragata T. B. Homan, Armada Real	Reino Unido
466a.	4 de abril de 1963	Capitán F. W. Pump, Armada de los EE.UU.	Estados Unidos
467a.	18 de abril de 1963	Capitán F. W. Pump, Armada de los EE.UU.	Estados Unidos
468a.	2 de mayo de 1963	Teniente Coronel J. Soong, Ejército chino	China
469a.	16 de mayo de 1963	Teniente Coronel J. Soong, Ejército chino	China
470a.	29 de mayo de 1963	Teniente Coronel J. Soong, Ejército chino	China
471a.	13 de junio de 1963	Capitán de Fragata A. Gélinet, Armada francesa	Francia
472a.	27 de junio de 1963	Capitán de Fragata A. Gélinet, Armada francesa	Francia
473a.	11 de julio de 1963	Teniente Coronel A. B. Senkin, Ejército soviético	URSS

## AFRICA

**CAMERUN:** LIBRAIRIE DU PEUPLE AFRICAINE  
La Gérante, B. P. 1197, Yaoundé.  
**DIFFUSION INTERNATIONALE CAMEROUNAISE**  
DU LIVRE ET DE LA PRESSE, Sangmelima.

**CONGO (Leopoldville):**  
INSTITUT POLITIQUE CONGOLAIS  
B. P. 2307, Léopoldville.

**ETIOPIA:** INTERNATIONAL PRESS AGENCY  
P. O. Box 120, Addis-Abeba.

**GHANA:** UNIVERSITY BOOKSHOP  
University College of Ghana, Legon, Accra.

**KENIA:** THE E.S.A. BOOKSHOP, Box 30167, Nairobi.

**MARRUECOS:** CENTRE DE DIFFUSION  
DOCUMENTAIRE DU B.E.P.I.  
8, rue Michaux-Bellaire, Rabat.

**REPUBLICA ARABE UNIDA:** LIBRAIRIE  
"LA RENAISSANCE D'EGYPTE"  
9 Sh. Adly Pasha, Le Caire.

**RHODESIA DEL SUR:**  
THE BOOK CENTRE, First Street, Salisbury

**SUDAFRICA:** VAN SCHAIK'S BOOK STORE (PTY) LTD.  
Church Street, Box 724, Pretoria.

## AMERICA DEL NORTE

**CANADA:** THE QUEEN'S PRINTER  
Ottawa, Ontario.

**ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:** SALES SECTION,  
UNITED NATIONS, New York.

## AMERICA LATINA

**ARGENTINA:** EDITORIAL SUDAMERICANA, S.A.  
Alsina 500, Buenos Aires.

**BOLIVIA:** LIBRERIA SELECCIONES  
Casilla 972, La Paz.

**BRASIL:** LIVRARIA AGIR  
Rua México 98-B, Caixa Postal 3291,  
Rio de Janeiro.

**COLOMBIA:** LIBRERIA BUCHHOLZ  
Av. Jiménez de Quesada 8-40, Bogotá.

**COSTA RICA:** IMPRENTA Y LIBRERIA TREJOS  
Apartado 1313, San José.

**CUBA:** LA CASA BELGA  
O'Reilly 455, La Habana.

**CHILE:**  
EDITORIAL DEL PACIFICO  
Ahumada 57, Santiago.

**LIBRERIA IVENS**  
Casilla 205, Santiago.

**ECUADOR:** LIBRERIA CIENTIFICA  
Casilla 362, Guayaquil.

**EL SALVADOR:** MANUEL NAVAS Y CIA.  
1a. Avenida Sur 37, San Salvador.

**GUATEMALA:** SOCIEDAD ECONOMICA-  
FINANCIERA  
6a. Av. 14-33, Ciudad de Guatemala.

**HAITI:** LIBRAIRIE "À LA CARAVELLE"  
Port-au-Prince.

**HONDURAS:** LIBRERIA PANAMERICANA  
Tegucigalpa.

**MEXICO:** EDITORIAL HERMES, S.A.  
Ignacio Mariscal 41, México, D. F.

**PANAMA:** JOSE MENENDEZ  
Agencia Internacional de Publicaciones,  
Apartado 2052, Av. 8A, Sur 21-58, Panamá.

**PARAGUAY:** AGENCIA DE LIBRERIAS  
DE SALVADOR NIZZA  
Calle Pte. Franco No. 39-43, Asunción.

**PERU:** LIBRERIA INTERNACIONAL  
DEL PERU, S.A.  
Casilla 1417, Lima.

**REPUBLICA DOMINICANA:** LIBRERIA  
DOMINICANA  
Mercedes 49, Santo Domingo.

**URUGUAY:** REPRESENTACION DE EDITORIALES  
PROF. H. D'ELIA  
Plaza Cagancha 1342, 1er piso, Montevideo.

**VENEZUELA:** LIBRERIA DEL ESTE  
Av. Miranda, No. 52, Edif. Galipán, Caracas.

**CEILAN:** LAKE HOUSE BOOKSHOP  
Assoc. Newspapers of Ceylon, P. O. Box 244,  
Colombo.

**COREA (REPUBLICA DE):** EUL-YOO PUBLISHING  
CO., LTD.  
5, 2-KA, Chongno, Seoul.

**CHINA:**  
THE WORLD BOOK COMPANY, LTD.  
99 Chung King Road, 1st Section, Taipei, Taiwan.  
THE COMMERCIAL PRESS, LTD.  
211 Hanan Road, Shanghai.

**FILIPINAS:**  
ALEMAR'S BOOK STORE, 769 Rizal Avenue, Manila.  
POPULAR BOOKSTORE, 1573 Darateo José, Manila.

**HONG KONG:** THE SWINDON BOOK COMPANY  
25 Nathan Road, Kowloon.

**INDIA:**  
ORIENT LONGMANS  
Bombay, Calcutta, Hyderabad, Madras  
y New Delhi.  
OXFORD BOOK & STATIONERY COMPANY  
Calcutta y New Delhi.  
P. VARADACHARY & COMPANY  
Madras.

**INDONESIA:** PEMBANGUNAN, LTD.  
Gunung Sahari 84, Djakarta.

**JAPON:** MARUZEN COMPANY, LTD.  
6 Tori-Nichome, Nihonbashi, Tokyo.

**PAKISTAN:**  
THE PAKISTAN CO-OPERATIVE BOOK SOCIETY  
Dacca, East Pakistan.  
PUBLISHERS UNITED, LTD.  
Lahore.  
THOMAS & THOMAS  
Karachi.

**SINGAPUR:** THE CITY BOOK STORE, LTD.  
Collyer Quay.

**TAILANDIA:**  
PRAMUAN MIT, LTD.  
55 Chakrawat Road, Wat Tuk, Bangkok.  
NIBONDH AND CO., LTD.  
New Road, Sikak Phya Sri, Bangkok.

**SUKSAPAN PANIT**  
Mansion 9, Rajadamnern Avenue, Bangkok.

**VIET-NAM (REPUBLICA DE):** LIBRAIRIE-  
PAPETERIE XUAN THU  
185, rue Tu-do, B. P. 283, Saigon.

**GRECIA:** LIBRAIRIE KAUFFMANN  
28, rue du Stade, Athènes.

**HUNGRIA:** KULTURA, P.O. Box 149, Budapest 62.

**IRLANDA:** STATIONERY OFFICE  
Dublin.

**ISLANDIA:** BÓKAVERZLUN SIGFÚSAR  
EYMUNDSSONAR H. F.  
Austurstreæti 18, Reykjavík.

**ITALIA:** LIBRERIA COMMISSIONARIA  
SANSONI  
Via Gino Capponi 26, Firenze,  
y Via Paolo Mercuri 19/8, Roma.

**LUXEMBURGO:** LIBRAIRIE J. TRAUSSCH-  
SCHUMMER  
Place du Théâtre, Luxembourg.

**NORUEGA:** JOHAN GRUNDT TANUM  
Karl Johansgate, 41, Oslo.

**PAISES BAJOS:** N. V. MARTINUS NIJHOFF  
Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage.

**POLONIA:** PAN, Palac Kultury i Nauki, Warszawa.

**PORTUGAL:** LIVRARIA RODRIGUES & CIA.  
186 rua Aurea, Lisboa.

**REINO UNIDO:** H.M. STATIONERY OFFICE  
P. O. Box 569, London, S.E.1  
(y sucursales de HMSO en Belfast, Birmingham, Bristol,  
Cardiff, Edinburgh, Manchester).

**RUMANIA:** CARTIMEX, Str. Aristide Briand 14-18,  
P.O. Box 134-135, Bucuresti.

**SUECIA:** C.E. FRITZES KUNGL. HOVBOK-  
HANDEL A-B  
Fredsgatan 2, Stockholm.

**SUIZA:**  
LIBRAIRIE PAYOT, S.A.  
Lausanne, Genève.

**HANS RAUNHARDT**  
Kirchgasse 17, Zürich 1.

**TURQUIA:** LIBRAIRIE HACHETTE  
469 Istiklal Caddesi, Beyoglu, Istanbul.

**UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS  
SOVIETICAS:**  
MEZHDUNARODNAYA KNYGA  
Smolenskaya Ploshchad, Moskva.

**YUGOSLAVIA:**  
CANKARJEVA ZALOZBA  
Ljubljana, Slovenia.

**DRZAVNO PREDUZEĆE**  
Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/11,  
Beograd.

**PROSVIETA**  
5, Trg Bratslva i Jedinstva, Zagreb.

**PROSVETA PUBLISHING HOUSE**  
Import-Export Division, P. O. Box 559,  
Terazije 16/1, Beograd.

## EUROPA

**ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE):**  
R. EISENSCHMIDT  
Schwanthaler Str. 59, Frankfurt/Main.

**ELWERT UND MEURER**  
Hauptstrasse 101, Berlin-Schöneberg.

**ALEXANDER HORN**  
Spiegelgasse 9, Wiesbaden.

**W. E. SAARBACH**  
Gertrudenstrasse 30, Köln (1).

**AUSTRIA:**  
GEROLD & COMPANY  
Graben 31, Wien, 1.

**B. WÜLLERSTORFF**  
Markus Sittikusstrasse 10, Salzburg.

**GEORG FROMME AND CO.,** Spengergasse 39, Wien, V.

**BELGICA:** AGENCE ET MESSAGERIES  
DE LA PRESSE, S. A.  
14-22, rue du Persil, Bruxelles.

**BULGARIA:**  
RAZNOIZNOS, 1, Tzar Assen, Sofia.

**CHECOSLOVAQUIA:**  
ARTIA LTD., 30 ve Smečkáč, Praha, 2.

**ČESKOSLOVENSKÝ SPISOVATEL**  
Národní Třída 9, Praha, 1.

**CHIPRE:** PAN PUBLISHING HOUSE  
10 Alexander the Great Street, Strovolos.

**DINAMARCA:** EJNAR MUNKSGAARD, LTD.  
Nørregade 6, København, K.

**ESPAÑA:**  
LIBRERIA BOSCH  
11 Ronda Universidad, Barcelona.

**LIBRERIA MUNDI-PRENSA**  
Castelló 37, Madrid.

**FINLANDIA:** AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA  
2 Keskukatu, Helsinki.

**FRANCIA:** EDITIONS A. PÉDONE  
13, rue Soufflot, Paris (V<sup>e</sup>).

## OCEANIA

**AUSTRALIA:**  
WEA BOOKROOM, University, Adelaide, S.A.  
UNIVERSITY BOOKSHOP, St. Lucia, Brisbane, Qld.  
THE EDUCATIONAL AND TECHNICAL BOOK AGENCY  
Parap Shopping Centre, Darwin, N.T.  
COLLINS BOOK DEPOT PTY, LTD.  
Monash University, Wellington Road, Clayton, Vic.  
MELBOURNE CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED  
10 Bowen Street, Melbourne C.T, Vic.  
COLLINS BOOK DEPOT PTY, LTD.  
363 Swanston Street, Melbourne, Vic.  
THE UNIVERSITY BOOKSHOP, Nedlands, W.A.  
UNIVERSITY BOOKROOM  
University of Melbourne, Parkville N.2, Vic.  
UNIVERSITY CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED  
Manning Road, University of Sydney, N.S.W.

**NUOVA ZELANDIA:**  
GOVERNMENT PRINTING OFFICE  
Private Bag, Wellington  
(y librerías del Gobierno en Auckland,  
Christchurch y Dunedin).

## ORIENTE MEDIO

**IRAK:** MACKENZIE'S BOOKSHOP  
Baghdad.

**ISRAEL:** BLUMSTEIN'S BOOKSTORES  
35 Allenby Rd. y 48 Nachlat Benjamin St.,  
Tel Aviv.

**JORDANIA:** JOSEPH I. BAHOS & CO.  
Dar-ul-Kutub, Box 66, Amman.

**LIBANO:** KHAYAT'S COLLEGE BOOK  
COOPERATIVE  
92-94, rue Bliss, Beyrouth.

## ASIA

**BIRMANIA:** CURATOR, GOVT. BOOK DEPOT  
Rangoon.

**CAMBOYA:** ENTREPRISE KHMÈRE  
DE LIBRAIRIE  
Imprimerie & Papeterie, Sàrl, Phnô Penh.